

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
ESCUELA DE POST GRADO
CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS
POLÍTICAS



**EVALUACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN
LOS DELITOS DE MINERÍA ILEGAL EN LA FISCALÍA
ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL DE LA
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, 2012 – 2016.**

TESIS
PARA OPTAR EL GRADO DE MAESTRO EN DERECHO CON
MENCIÓN EN DERECHO PROCESAL

PRESENTADO POR LA TESISTA:
BACHILLER: LUZCEILA CESIA JEMINA CALLATA PALOMINO

DOCENTE ASESOR:
Mg. ALFREDO MARTEL SANTIAGO

Huánuco - Perú

2018

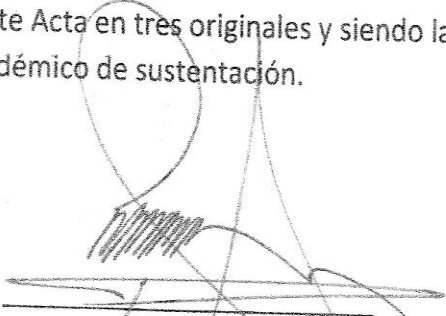
ACTA DE SUSTENTACIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

En la ciudad de Huánuco, Auditorio de la Universidad de Huánuco, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, siendo las 17:00 horas, los Jurados, docentes en la Universidad de Huánuco, Dr. Hugo ROMERO DELGADO, Presidente, Mg. Marlo TELLO PONCE, Secretario, y Mg. Héctor Raúl ZACARÍAS VENTURA, Vocal, respectivamente; nombrados mediante Resolución N° 183-2018-D-EPG-UDH, de fecha trece de abril del año dos mil dieciocho y la aspirante al Grado Académico de Maestro, **Abg. Luzceila Cesia Jemina, CALLATA PALOMINO**.


Luego de la instalación y verificación de los documentos correspondientes, el Presidente del jurado invitó a la graduando a proceder la exposición y defensa de su tesis intitulada. "**EVALUACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LOS DELITOS DE MINERÍA ILEGAL EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, 2012 - 2016**", para optar el Grado Académico de Maestro en Derecho y Ciencias Políticas, mención **Derecho Procesal**.

Concluida la exposición, se procedió a la evaluación correspondiente, luego el Presidente del jurado comunicó el resultado, habiendo obtenido la nota Diecinueve con la calificación de Muy bueno; al mismo tiempo recomendó a la Escuela de Post Grado, se le otorgue el grado académico de Maestro en Derecho y Ciencias Políticas, con mención en **Derecho Procesal**, a la graduando **Abg. Luzceila Cesia Jemina, CALLATA PALOMINO**

Se suscribe la presente Acta en tres originales y siendo las 19:15 horas, se da por concluido el acto académico de sustentación.


PRESIDENTE
Dr. Hugo ROMERO DELGADO


SECRETARIO
Mg. Marlo TELLO PONCE


VOCAL
Mg. Héctor Raúl ZACARÍAS VENTURA

DEDICATORIA

A Dios quien me bendice y protege día y día.

A mi padre Francisco quién desde el cielo me ilumina y a mi madre María, por ser mi motor y motivo para alcanzar mis sueños.

AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer a la Universidad de Huánuco, la cual cuenta con calidad de docentes, los mismos que con sus conocimientos y motivación han conllevado que mi persona culmine la carrera profesional de Derecho y Ciencias Políticas en forma exitosa.

Asimismo, a los sinodales, quienes, con su tiempo y amabilidad, me han brindado su valioso apoyo, para colaborar en la realización de la presente investigación y a mis jurados Dr. Hugo E. Romero Delgado, Mg. Marlo Tello Ponce, Mg. Héctor Raúl Zacarías Ventura quiénes estudiaron mi tesis y la aprobaron.

Por último, a mi asesor el Mg. Alfredo Martel Santiago quien, con su conocimiento, experiencia, paciencia y motivación, coadyuvó profesionalmente en la elaboración de mi tesis.

La investigadora

RESUMEN

Esta investigación es producto del trabajo donde viene laborando la investigadora siendo la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, del cual el contenido temático de investigación consiste en la **“EVALUACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LOS DELITOS DE MINERÍA ILEGAL, EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, 2012-2016”**.

Hemos sido testigos de los problemas que ha generado la minería ilegal en nuestro país, esto se ha visto agravado en las últimas décadas por el aumento del precio de oro y la insuficiente fiscalización a dicha actividad y que ha traído como consecuencia que se expande a nivel regional, en especial en toda la Amazonía. El crecimiento desmedido de la minería ilegal ha generado que gran cantidad de mineros invadan la propiedad y concesión de terceros, vulnerando los derechos de estos, así como que titulares de concesiones inviten a los mineros a operar en sus áreas, sin mediar acuerdos o contratos que permitan regular sus derechos y obligaciones de ambas partes, convirtiéndose en mineros informales. Esto permite evidenciar el desinterés por parte del Estado, acarreando que el minero informal tenga la posibilidad de formalizarse, trabajen al margen de la ley sin pagar impuestos e incumplan con normas ambientales, laborales y de seguridad en sus operaciones. Esta actividad realizada al margen de la ley ha originado graves impactos económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales y sobre todo esto ha conllevado a una contravención a la norma, ya que la aplicación de este principio solo es para los delitos con escasa relevancia social; sin embargo, hasta ahora se viene aplicando el Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal; cuando ello, debería no ser aplicado; toda vez, que estos delito que viene hacer la minería ilegal viene causando daños y destrucción a nuestro ecosistema y especialmente a nuestra sociedad; por lo que la formalización minera debe ser un reto que debe enfrentarse con esto en mente.

Esta investigación tiene como objeto de estudio: “Evaluar la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la Provincia de Leoncio Prado, 2012-2016”. Esto con la finalidad de poner más énfasis en torno a la fiscalización por parte de los

organismos competentes a fin de reducir la incidencia en la minería ilegal en la zona de Leoncio Prado. La importancia de esta investigación radica, entonces, en el impacto social que pudiera tener en un futuro ya que la información obtenida se va a canalizar a las autoridades competentes, a efectos de evaluar sí, las autoridades están cumpliendo a cabalidad con sus funciones siendo ello, el de fiscalizar a través de mecanismos de control, interdicción, zonas de exclusión prohibición, remediación para la erradicación de la minería ilegal en áreas naturales protegidas, en salvaguarda de nuestro ecosistema y la calidad de vida de los pobladores.

Para dar respuesta a dicha problemática, se pretende hacer un análisis cuantitativo y cualitativo, que implica analizar un estudio de carpetas fiscales, acompañado de la experiencia y conocimiento de los expertos de la materia; para ello, se debe partir del análisis de este instituto jurídico procesal que permita conocer su origen, fundamentos y regulación, tanto en nuestro ordenamiento jurídico como en el Derecho comparado pertinente.

Con ambos ejes de la hipótesis desarrollados, efectuamos el análisis de adecuación de los mismos; es decir, si resulta apropiado o congruente que frente a la comisión del delito de minería ilegal, resulta efectivo la aplicación el principio de oportunidad, como facultad de abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, precisando los posibles estándares de tratamiento de la minería ilegal, a partir de la naturaleza jurídica del principio de oportunidad; llevándonos a plantear y formular las conclusiones y recomendaciones que, en su momento, alcancemos como fruto de la presente investigación.

De tal forma que, al finalizar la investigación estemos en condiciones de establecer los criterios normativos errados que conllevan la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal en la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Leoncio Prado, proponiendo las modificaciones a la legislación a través de una propuesta coherente de la ley, en aras de la seguridad jurídica y de la vigencia de los principios de jerarquía y coherencia normativa.

La investigadora.

ABSTRACT

This research is the product of the work where the researcher is working being the Specialized Prosecutor's Office in Environmental Matters of the province of Leoncio Prado, of which the thematic content of research consists of the "EVALUATION OF THE PRINCIPLE OF OPPORTUNITY IN THE CRIMES OF ILLEGAL MINING, IN THE SPECIALIZED PROSECUTOR'S OFFICE IN ENVIRONMENTAL MATTERS OF THE PROVINCE OF LEONCIO PRADO, 2012-2016 ".

We have witnessed the problems that illegal mining has generated in our country, this has been aggravated in recent decades by the increase in the price of gold and insufficient control of this activity and that has resulted in the expansion of the regional, especially throughout the Amazon. The excessive growth of illegal mining has generated a large number of miners invading the property and concession of third parties, violating the rights of these, as well as concession holders inviting the miners to operate in their areas, without mediating agreements or contracts that allow to regulate their rights and obligations of both parties, becoming informal miners. This shows the lack of interest on the part of the State, leading the informal miner to formalize, work outside the law without paying taxes and fail to comply with environmental, labor and safety standards in their operations. This activity conducted outside the law has caused serious economic, political, social, environmental and cultural impacts and above all this has led to a violation of the rule, since the application of this principle is only for crimes with little social relevance ; however, until now the Opportunity Principle has been applied in the crimes of illegal mining; when that, it should not be applied; every time, that these crimes that illegal mining comes to do are causing damage and destruction to our ecosystem and especially to our society; so the mining formalization must be a challenge that must be faced with this in mind.

This research has as object of study: "To evaluate the application of the Principle of Opportunity in the crimes of illegal mining in the Specialized Attorney's Office in Environmental Matters of the Province of Leoncio Prado, 2012-2016". This in order to put more emphasis on the control by the competent agencies in order to reduce the incidence in illegal mining in the area of Leoncio Prado. The importance

of this research lies, then, in the social impact that could have in the future since the information obtained will be channeled to the competent authorities, in order to evaluate itself, the authorities are fully complying with their functions, and , it to control through mechanisms of control, interdiction, zones of exclusion prohibition, remediation for the eradication of illegal mining in protected natural areas, in safeguarding of our ecosystem and the quality of life of the inhabitants.

With both axes of the hypothesis developed, we carry out the adequacy analysis of them; that is, if it is appropriate or congruent that against the commission of the crime of illegal mining, the application of the principle of opportunity is effective, as a faculty of abstention from the exercise of criminal action by the Public Prosecutor's Office, specifying the possible treatment standards of illegal mining, based on the legal nature of the principle of opportunity; leading us to raise and formulate the conclusions and recommendations that, in turn, we reached as a result of the present investigation.

In such a way that, at the end of the investigation, we are in a position to establish the erroneous normative criteria that entail the application of the Opportunity Principle in the crimes of illegal mining in the Provincial Specialized Prosecutor's Office in Environmental Matters of Leoncio Prado, proposing the amendments to the legislation through a coherent proposal of the law, for the sake of legal security and the validity of the principles of hierarchy and normative coherence.

The Researcher

PRESENTACIÓN

A los señores miembros del Jurado.

Presento mi tesis titulada **“EVALUACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LOS DELITOS DE MINERÍA ILEGAL, EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, 2012-2016”**, con la finalidad de comprobar si los organismos competentes están realizando una fiscalización adecuada a través de mecanismo de control, interdicción, remediación para la erradicación de la minería ilegal en áreas naturales protegidas que existe en nuestra región, a fin de salvaguardar nuestro ecosistema y reducir la incidencia en la minería ilegal en la zona de Leoncio Prado; ello en mérito a obtener el grado de Magister en Derecho en la mención de Derecho Procesal Penal.

La presente tesis consta de tres capítulos, referidos al Principio de Oportunidad, Minería Ilegal y el análisis del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal.

Espero señores miembros de jurado que el presente estudio se ajuste a las exigencias de la Universidad y esperando las sugerencias oportunas que me sirvan para dar un mejor aporte en el desarrollo de las ciencias del derecho, más aún si resulta apropiado o congruente aplicar el principio de oportunidad frente a la comisión del delito de minería ilegal, como facultad de abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público y si esto conlleva a una modificación a nuestro ordenamiento sustantivo para una correcta aplicación en torno a los delitos de minería ilegal e incluir como norma el cierre de las minas y cierre de pasivos ambientales para que haya el resarcimiento físico en los delitos de minería ilegal y recaer responsabilidad penal aquellos sujetos que cometen estos delitos.

Aprovecho la oportunidad para expresarles un sincero agradecimiento a ustedes y a todos los docentes de la Escuela de Post Grado de Derecho de nuestra alma mater, quienes durante las cátedras aportaron significativamente a enriquecer mis conocimientos del derecho y de las problemáticas que afronta en la actualidad.

La investigadora

Caratula	
Índice	
Resumen	
Presentación	

CAPITULO I INTRODUCCIÓN

	Página
1.1. Planteamiento del problema	11
1.2. Formulación del problema	14
1.3. Trascendencia teórica, técnica y académica	15
1.4. Antecedentes inmediatos	17
1.5. Objetivos	22

CAPITULO II REFERENCIA CONCEPTUAL

2.1. Antecedentes históricos	23
2.2. Aspectos conceptuales o doctrinarios	29
2.3. Base teórica o teoría en la que se sustenta	61
2.4. Definiciones operacionales	67

CAPITULO III METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3.1. Método y nivel de investigación	68
3.2. Sistema de hipótesis, variables y esquema de diseño	68
3.3. Técnicas e instrumentos	70
3.4. Cobertura de la investigación	71

CAPITULO IV RESULTADOS

4.1. Presentación de resultados	73
4.2. Análisis y organización de datos, .	93

CAPITULO V
DISCUSIÓN DE RESULTOS

5.1.	Verificación o contrastación de la hipótesis, objetivos y problema	100
5.2.	Nuevos planteamientos	104

CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1.	Conclusiones	109
6.2.	Recomendaciones	109

CAPITULO VII
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

7.1.	Referencia Bibliográfica	112
------	--------------------------	-----

Anexos

CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1. Planteamiento del problema

El Perú es un país minero, que ha estado presente en toda nuestra historia debido al enorme potencial geológico con que cuenta y que ha contribuido al desarrollo económico de nuestro país; sin embargo, por las características que tiene dicha actividad; es también, es la que mayor impacto (positivo y negativo) ha generado en su entorno y ha sido la causa de numerosos conflictos socio-ambientales.

Imaginemos por un momento que estamos en un lugar, donde un numeroso grupo de individuos realizan una actividad que no se encuentra amparada por nuestras leyes y que a la par, causa la destrucción progresiva del patrimonio natural del país, produciendo pérdidas económicas al Estado, generando explotación laboral y sexual, atentando contra la salud de las personas y subvencionando a organizaciones delictivas, e incluso al narcotráfico, del cual denominamos minería ilegal. Este tipo de minería ha venido desarrollándose con total incidencia en nuestro país y sobretodo en nuestra región Huánuco.

A todas luces dicha actividad debe ser reprimida por el Estado, con el fin de salvaguardar el orden social interno, garantizando el respeto a los derechos fundamentales de la población, haciendo prevalecer los principios que inspiran y sobre los que se cimienta nuestro Ordenamiento Jurídico, el poder lo tiene el Estado, quién es el llamado a combatir la criminalidad así desarrollada. Tal es el escenario actual en torno a la minería ilegal en nuestro país, con una actividad que hasta ahora viene siendo realizada con preocupante impunidad y frente a la cual el Estado ha pretendido tomar la decisión de combatirla y erradicarla.

Así tenemos que la minería artesanal y la pequeña minería cambian sustancialmente su principal característica pasando de ser una de las actividades de subsistencia, a convertirse en actividades que en muchos casos llegan a ser informales o ilegales con todo lo que esto conlleva; es

decir, todos los impactos que la minería ilegal o informal ha traído consigo, como el impacto ambiental que suscita la extracción del mineral (vertimiento del mercurio, en los ríos, destrucción de bosques, etc.), sin olvidar los impactos sociales (trata de personas) económicos (evasión de impuestos) y de seguridad (mafias).

El Estado tras más de veinte años de restarle importancia a este tema, y casi forzado por las repercusiones de la pequeña minería y la minería artesanal, el año 2012 promulgó la “Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal”- Ley N° 27651 de fecha 22/01/2002, en la cual se cometió el error de estipular en su artículo 4°, que el rol del Estado es proteger y promover la pequeña minería y la minería artesanal, esto fue mal interpretado por la gente, que infirió que el Estado avalaba esta clase de actividades lo que condujo a que la ilegalidad incrementara.

Permitiendo una adecuada regulación de las actividades mineras desarrolladas por pequeños productores mineros y mineros artesanales, los cuales venían realizando actividades mineras sin considerar las políticas medioambientales y sin tener autorización del Estado para realizar dicha actividad, proponiendo la formalización, promoción y desarrollo de las mismas. Siguiendo este propósito, de manera posterior, en el año 2012 se aprobó el Decreto Legislativo N° 1100 y se estableció lo siguiente “... se declara de necesidad pública, interés nacional y de ejecución prioritaria las acciones de interdicción relacionadas con las minería ilegal, a fin de garantizar la salud de la población, la seguridad de las personas, la conservación del patrimonio cultural y de los ecosistemas frágiles, la recaudación tributaria, y el desarrollo de actividades económicas sostenibles, promoviendo el ordenamiento y la formalización con inclusión de la minería a pequeña escala”.

De igual forma, se creó el Decreto Legislativo N° 1102, publicado el 29 de febrero de 2012, que incorporó al Código Penal los delitos de minería ilegal en los artículos 307°-A (delito de minería ilegal), 307°-B (formas agravadas), 307°- C (delito de financiamiento de la minería ilegal),307°-D (delito de

obstaculización de la fiscalización administrativa), 307°-E (actos preparatorios de minería ilegal) y 307°-F (inhabilitación). Asimismo, modificó el art. 2° CPP que regula el principio de oportunidad, incorporando el numeral 8 que contempla la posibilidad de recurrir a este mecanismo procesal frente a la comisión de los delitos de minería ilegal tipificados.

El objetivo era paliar la minería ilegal, y se pretendía la creación de un Proceso de Formalización a través de la dación de un paquete normativo, en el que se incluye el Decreto Legislativo N° 1105, a fin de establecer disposiciones para implementar el proceso de formalización de la actividad minera de la pequeña minería y de la minería artesanal ejercidas en zonas no prohibidas.

Sin embargo, ante este cuestionamiento, nos preguntamos si el delito de minería ilegal resulta ser considerado como delito de bagatela o insignificante, para la aplicación del principio de oportunidad, teniendo en cuenta que a partir del año 2012 entró en vigencia el Código Procesal Penal en el Distrito Fiscal de Huánuco, creándose mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1326-2012- MP-FN, de fecha 30/05/2012, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental en el Distrito Fiscal de Huánuco tanto en las provincia de Huánuco y Leoncio Prado, siendo este último, el cual tendrá como tema: **“EVALUACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LOS DELITOS DE MINERÍA ILEGAL, EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, 2012-2016”**.

El hecho que se haya incluido a los delitos de minería ilegal dentro de los supuestos de aplicación del principio de oportunidad, resulta cuanto menos curioso, ya que no se trata de un delito de implicancias menores, sino que sus diversos efectos perniciosos – mencionados anteriormente- revisten mayor gravedad.

Del camino trazado, resulta la interrogante que pretende servir de hipótesis de la presente investigación: Es deficiente la aplicación del Principio de Oportunidad debido a una limitada fiscalización por parte de los operadores de los organismos competentes y por los escasos recursos logísticos para

un mejor tratamiento en los delitos de minería ilegal, en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la Provincia de Leoncio Prado, 2012 – 2016.

Es evidente que se requiere con urgencia un tratamiento que tenga como resultado la reducción de la minería ilegal y es evidente que el Proceso de Formalización no ha cumplido con las expectativas del Estado; por lo tanto, podremos decir que la minería ilegal es como un cáncer que carcome la Amazonía Peruana que nació en Madre de Dios; pero, que lamentablemente se ha extendido su devastación a otras regiones y la ambición del oro está desangrando una zona llamada reserva comunal el sira localizado en la región Huánuco.

Por lo que, el Estado ha creado un medicamento que no está remediando el mal, sólo está sirviendo de analgésico y por momentos es un sedante que nos hace sentir confiados en que se está reestructurando la minería informal y combatiendo lo ilegal, cuando no es necesario y el motivo es porque no se está ejecutando en la medida que debería hacer y esto no depende mucho de los sujetos acogidos al proceso de formalización sino también del Estado.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema General:

¿Cuál es la evaluación que se da respecto a la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012-2016?

1.2.2. Problema Específico:

- A) ¿Cómo es el tratamiento que se viene dando con la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012-2016?
- B) ¿Cuál es el nivel de efectividad que tiene la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal en la

Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012-2016?

- C) ¿Cuáles son los fundamentos fácticos y normativos que se deben proponer para reducir la incidencia en los delitos de minería ilegal en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012-2016?
- D) ¿Qué planteamientos se deben adoptar para hacer efectivo el resarcimiento en los delitos de minería ilegal en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012-2016?

1.3. Trascendencia teórica, técnica y académica

A mediados del año 2012 fuimos testigos de una serie de conflictos sociales generados a partir del ejercicio de la actividad económica más rentable en el Perú: La minería, actividad que a pesar de colocarnos como uno de los países de América latina más ricos en la extracción de metales como el oro, la plata o el cobre, la misma no se encuentra debidamente regulada, ocasionando que se ejerza por parte de ciertas personas de forma ilegal, afectando al país a nivel ambiental, social, económico y político.

El desarrollo de una actividad como la minera, fuera del ámbito de la ley, de manera desordenada y sin control alguno, genera graves impactos ambientales negativos en aspectos que requieren una atención prioritaria del Estado, como son la salud de las personas, la conservación de los ecosistemas, así como el crecimiento y desarrollo económico de nuestro país.

Asimismo, el desarrollo desordenado de dicha actividad afecta en muchos casos los derechos constitucionales de toda persona a su libre desarrollo y bienestar, a la propiedad, a la paz, a la tranquilidad, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida y su salud.

En efectos se ha evidenciado que el impacto de dichas actividades afecta principalmente la salud de las personas que realizan dichas actividades, así como la de los mineros que viven en su zona de influencia, situación que se agrava por la precariedad e insalubridad en la que viven en las áreas

donde se explota el mineral.

Asimismo, como consecuencia de dichas actividades, se ha generado problemas sociales que requieren la atención del Estado, como son la problemática de la trata de personas, la transgresión a los derechos laborales, el trabajo infantil y la explotación sexual.

Un avance en el cumplimiento de la meta establecida es la regulación del proceso de formalización regulada por el Decreto Legislativo N° 1105 y normas complementarias que se inició a través de la presentación de la Declaración de Compromiso, mecanismos que ha permitido identificar el número de personas naturales, jurídicas o grupo de personas organizadas para ejercer la actividad minera, que accedieron al proceso de formalización.

Ante ello, se han dispuestos varias normas legales cuyo objetivo fundamental fue enfrentar el fenómeno de la minería ilegal a través de su interdicción, brindar asistencia técnica y procedimientos ágiles y simplificados para la formalización minera; sin embargo, sigue siendo una amenaza para la seguridad jurídica; por lo que, este proyecto está encaminado a dar preferencia a temas que tengan trascendencia socio-jurídica específica.

Esta investigación va a contribuir a una correcta aplicación de la norma, que deben realizar los profesionales del Derecho siendo magistrados, abogados, fiscales, procuradores; así como también a la formación de los estudiantes que desean enfocarse al ámbito del Derecho Ambiental.

De igual forma, contribuye al ámbito social, toda vez que esta investigación permitirá que exista una preparación adecuada para todas las personas que se encuentran ligadas al proceso de formalización de la actividad minera, y conllevara a que exista una exigente fiscalización por parte de los organismos competentes, quién deben estar capacitados y preparados al momento de una interdicción minera, cumpliendo con las exigencias que señala la ley.

1.4. Antecedentes inmediatos

En cuanto se refiere a los antecedentes relacionados a la presente investigación, debemos indicar que existen algunos trabajos relacionados al principio de oportunidad y minería ilegal, entre ellos tenemos:

Tesis: La Importancia de la Derogación de la Aplicabilidad del Principio de Oportunidad sobre el Delito de Minería Ilegal en el Perú (2015) Elaborado por Lachira Correa, Ingrid Lorena (Tesis para optar el título profesional de abogada) en cuyo resumen expresa lo siguiente:

La presente investigación da a conocer una posición sobre la derogatoria del numeral ocho del artículo 2 del código procesal penal sobre el principio de oportunidad, dicha tesis es de enfoque cualitativo, ya que la minería ilegal es un mal que causa daño a nuestro país, destruyendo nuestro ecosistema y ocasionando enfermedades en la población que pueden llevarlos incluso a la muerte. El estudio fue realizado con el objetivo de establecer que la aplicación del principio de oportunidad en los delitos de minería ilegal a parte de causar daño ambiental y en la salud de los moradores habitantes en zonas cerca en donde se practica esta actividad, también es una contravención a la norma, ya que la aplicación de este principio solo es para los delitos con escasa relevancia social, es decir que no causen daños a la sociedad. El tipo de investigación es de carácter sustantivo porque describe una situación teórica con alcances de llegar a proponer una modificación a nuestro ordenamiento sustantivo. El método de investigación fue el inductivo e interpretativo, toda vez que del estudio del caso teórico se extrajeron conclusiones de carácter general, concordantemente el diseño de investigación es el no experimental, ya que el estudio se realiza sin manipulación de variables, por lo que se tuvo en cuenta categorías conceptuales. Se tuvo como conclusión: la necesidad de derogar la aplicación del principio de oportunidad en los delitos de minería ilegal en nuestro país.

TESIS: ¿Merecida Oportunidad? Análisis Crítico de la Regulación Nacional del Principio de Oportunidad en relación con el delito de Minería Ilegal (2017) Elaborado por Josué Narro-Abanto (Tesis para optar el título profesional de abogado) en cuya introducción refiere:

Para dar respuesta a dicha problemática, se pretende hacer un análisis del sentido (teleológico) del principio de oportunidad, que implicará efectuar un estudio de este instituto jurídico procesal que permita conocer su origen, fundamentos y regulación, tanto en nuestro ordenamiento jurídico como en el Derecho comparado pertinente. Acto seguido, se procederá a analizar el tipo penal de minería ilegal, efectuando un recorrido previo por el insoslayable elemento fáctico e histórico de la realidad de la minería en Perú. Asimismo, se considera importante en este punto agregar elementos extrajurídicos que permitan formar una idea de los efectos negativos de la actividad minera ilegal y su gravedad y finalmente, con ambos ejes de la hipótesis desarrollados, corresponderá efectuar un análisis de adecuación de los mismos, es decir, si resulta apropiado o congruente que frente a la comisión del delito de minería ilegal, resulte de aplicación el principio de oportunidad, como facultad de abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público.

Artículo científico: “La otra cara del oro: La Minería Informal e Ilegal un problema aún por resolver” Escrita por Ramón Escobar Banda. Sociedad Peruana de derecho ambiental. XII Taller de derecho ambiental en Lima, 8 de setiembre de 2013). En cuya recomendación final refiere:

Al final de este ensayo, es preciso resaltar que el actual gobierno ha tomado la decisión de enfrentar esta problemática, los avances han sido significativos, pero aún existen falencias que deberán ser superadas no solo con el esfuerzo del gobierno central sino con el esfuerzo de todos los sectores de la sociedad comenzando por un acuerdo entre los partidos políticos que fortalezca la lucha contra la minería ilegal y su formalización.

Para maximizar la eficacia en la lucha contra de la minería ilegal sugiero el control de los insumos (petróleo, mercurio) desde su ingreso al país, es

decir, realizar los controles respectivos en el puerto del Callao y desde allí comenzar su seguimiento constante. Además, no se debe otorgar ni una sola concesión más para pequeña minería y minería artesanal por lo menos por una temporada prolongada, también se debe vigilar y erradicar la minería ilegal de las zonas de amortiguamiento de los parques y reservas nacionales (Bahuaja Sonene, Manu y Tambopata). La lucha contra la minería ilegal, tantas veces postergada ha comenzado y no podemos ceder más.

Reportaje: La Minería informal e ilegal siendo la fiebre por el oro en el Perú que supera las cifras al narcotráfico, emitido con fecha 06 de octubre del 2013. Se obtuvo a través de la página web: <http://www.americatev.com.pe/cuarto-poder/reportajes/fiebre-oro-peru-mineria-ilegal-supera-cifras-al-narcotrafico-noticia-671> (Huánuco, 22/07/ 2017).

En el Perú: 180 toneladas de oro ilegal salen de nuestro país cada año sin pagar un centavo de impuestos. Esta situación ha convertido a la minería ilegal en la actividad ilícita más importante del país, desplazando con creces al narcotráfico desde el 2010. 70 toneladas de químicos tóxicos son vertidos en las aguas y tierras del departamento de Madre de Dios causando la deforestación irreparable de 50 mil hectáreas de tierras en la Amazonía, pero ahora, por una ley llena de imprecisiones y contradicciones, la minería ilegal está migrando a Huánuco, donde se proyecta a ser un nuevo punto de explotación en el país.

Reportaje: La Minería ilegal que invade reserva comunal El Sira donde Mineros ilegales han ingresado a extraer oro en la reserva Comunal El sira, ubicada en la Amazonía Peruana con fecha 06 de diciembre del 2015. Se obtuvo a través de la web:

<http://www.americatev.com.pe/cuarto-poder/reportaje/mineria-ilegal-invade-reserva-comunal-sira-noticia-37676> (Huánuco, 24/07/ 2017).

Por lo que podemos decir que la minería ilegal es como un cáncer que carcome la Amazonía peruana que nació en Madre de Dios, pero que

lamentablemente se ha ramificado y ha extendido su devastación hacia otras regiones y la ambición por el oro está desangrando una zona sagrada, la llamada reserva comunal El Sira, donde está ubicada entre los departamentos de Pasco, Huánuco y Ucayali. Es una cadena montañosa muy escarpada prácticamente inaccesible para los foráneos como en toda la selva, esta zona tiene gran diversidad de especies animales y vegetales y miles de hectáreas que vienen siendo amenazadas. “Quieren convertir a esta zona emblemática en un Madre de Dios y estamos tratando de controlar eso porque no queremos que se convierta en una Madre de Dios”, indicó Alfredo Neyra, representante del SERNANP. Por décadas, la fiebre por extraer oro ha arruinado grandes extensiones de selva virgen, la geografía que enmarca la reserva comunal. El Sira, vista desde lo alto, parece estar aún intacta; sin embargo, a medida que avanzábamos fue inevitable comprobar que la minería ilegal ya está lacerando parte de su impresionante extensión.

Libro Derecho Minero y Concesión: Análisis de toda la legislación vigente incluyendo la minería ilegal e informal, Belaúnde Moreyra, Martín; Quinta edición, 2013, editorial San Marcos.

La presente obra pretende analizar la concesión minera desde todos sus ángulos jurídicos, comenzando con los antecedentes e importancia de la industria minera en el desarrollo de la humanidad. Una institución legal no nace del vacío ni tampoco de la exclusiva creación abstracta de un pequeño grupo de personas. Si eso fuera el caso, sus trabajos intelectuales probablemente no conducirían a nada. El derecho proviene de un conjunto de necesidades frente a las cuales la sociedad y eventualmente el Estado asume la decisión de darle alguna solución normativa. De ahí que al estudiar una institución legal es indispensable ahondar en sus orígenes y en la forma como ha evolucionado.

La concesión minera en el Perú y en Iberoamérica se remonta al viejo derecho hispano – portugués que fue trasladado al Nuevo Mundo como consecuencia del Descubrimiento y la Conquista. Al producirse ese trasplante, las normas venidas de la península Ibérica sufrieron cambios y

adaptaciones provenientes del contacto con las culturas nativas que venían practicando la minería en forma secular. Pero la minería prehispánica no tuvo un fin económico en el sentido actual de la palabra. Sirvió a otras necesidades de carácter religioso, ornamental y militar, tal como lo hemos podido apreciar en la legendaria riqueza de nuestras huacas.

La frase “vale un Perú” dio a nuestra patria una imagen de abundancia, que el sabio Raymondi popularizó aún más con su incierto dicho de que el Perú era un mendigo sentado en un banco de oro. Recién con el advenimiento del dominio español se produce ese dramático desarrollo de la minería principalmente en México y Perú. En nuestras tierras de Sudamérica el Cerro Rico de Potosí, hoy Bolivia, pero antes el Alto Perú, simbolizó un tremendo esfuerzo, así como una inocultable tragedia, en las que miles de campesinos indígenas sacrificaron sus vidas como consecuencia de la mita. La minería es nuestra tierra fue sacrificada con sangre, sudor y lágrimas, parafraseando a Churchill. Sin embargo, es preciso reconocer que ese sacrificio no fue en vano y también tuvo como consecuencia positiva.

El desarrollo del Perú en no escasa medida se debe a la minería. El autor de este trabajo ha enfocado el tema desde un ángulo inicial más vinculado al Derecho Público que al Derecho Privado, aunque sin desconocer la contribución de este último. Para ubicar a la concesión minera en un contexto político jurídico ha iniciado el análisis con algunas referencias a la teoría tradicional del Estado. He considerado indispensable empezar de esa manera para entender por qué la nación, después de producida la independencia, asumió el dominio de la riqueza natural minera. Y la respuesta es sencilla: el Estado Peruano, a partir de 1821, sustituyó a la persona del monarca español, que desde los albores de la Edad Media había asumido la propiedad de las minas. Propiedad que no se oponía a que se concedieran a sus súbditos a condición de que se pagara un impuesto en beneficio del Rey. He ahí la palabra regalía. Por eso nuestra constitución señala que la concesión refleja la soberanía del Estado, que por cierto no es incompatible con su explotación privada.

1.5 Objetivos

Objetivo general.

Evaluar la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012-2016.

Objetivos específicos.

A) Analizar el tratamiento que se viene dando con la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de Minería Ilegal en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012-2016.

B) Identificar el nivel de efectividad que tiene la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012-2016.

C) Proponer mecanismos fácticos y normativos que permitan reducir la incidencia en los delitos de minería ilegal en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012-2016.

D) Proponer mecanismos normativos para hacer efectivo el resarcimiento en los delitos de minería ilegal en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012 - 2016.

CAPITULO II

REFERENCIA CONCEPTUAL

1.1. Antecedentes históricos.

A través del tiempo, una de las actividades que ha sido intensamente desarrollada es la actividad minera, esto porque en buena cuenta ha sido considerada el motor de las grandes inversiones a nivel mundial y siendo el Perú un país históricamente minero no ha sido ajeno a esta realidad y se ha puesto a la orden de las necesidades de los inversionistas, estableciendo normas legales y dictando mandatos que regule esta actividad.

En este marco de situaciones, la legislación minera peruana ha clasificado a la minería siguiendo unos perfiles, como son el número de hectáreas otorgadas en concesión y la cantidad de producción que proyecta ejecutar, de esta forma ha tenido a bien clasificarlos en sectores que dentro de la normativa actual vigente la denomina estratos o categorías, de esta manera ha identificado a la Gran Minería, Medía Minería, Pequeña Minería y Minería Artesanal.

1) POR LA ESCALA DE PRODUCCIÓN

a) Minería artesanal

Preceptúa el Artículo 91° del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, sustituido por el Artículo 10° de la Ley N° 27651:

“Son Productores Mineros Artesanales (PMA) los que:

- 1) En forma personal o como conjunto de personas naturales o jurídicas se dedican habitualmente y como medio de sustento a la explotación y/o beneficio directo de minerales, realizando sus actividades con métodos manuales y/o equipos básicos.

- 2) Posean, hasta mil (1,000) hectáreas, entre denuncios, petitorios y concesiones mineras; o hayan suscrito acuerdos o contratos con los titulares mineros según lo establezca el reglamento de la presente ley; y, además;
- 3) Posean, una capacidad instalada de producción y/o beneficio no mayor de veinticinco (25) toneladas métricas por día. En el caso de los productores de minerales no metálicos y de materiales de construcción, el límite máximo de la capacidad instalada de producción y/o beneficio será de hasta cien (100) toneladas métricas por día.
- 4) En el caso de los yacimientos metálicos tipo placer, el límite máximo de capacidad instalada de producción y/o beneficio será de doscientos (200) metros cúbicos por día.

La condición de pequeño productor minero o productor minero artesanal se acreditará ante la Dirección General de Minería mediante declaración jurada bienal.

b) Pequeña minería

El Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, con las modificaciones realizadas hace mención en el Artículo III del título preliminar de la pequeña minería (PPM) que a continuación se detalla:

ARTÍCULO 91.-Son pequeños productores mineros los que:

- i. En forma personal o como conjunto de personas naturales, o personas jurídicas conformadas por personas naturales o cooperativas mineras o centrales de cooperativas mineras se dedican habitualmente a la explotación y/o beneficio directo de minerales; y
- ii. Posean, hasta dos mil (2,000) hectáreas, entre denuncios, petitorios y concesiones mineras; y, además. Posean, por

cualquier título, una capacidad instalada de producción y/o beneficio no mayor de trescientas cincuenta (350) toneladas métricas por día. En el caso de los productores de minerales no metálicos y materiales de construcción, el límite máximo de la capacidad instalada de producción y/o beneficio será de hasta un mil doscientas (1,200) toneladas métricas por día.

En el caso de los yacimientos metálicos tipo placer, el límite máximo de la capacidad instalada de producción y/o beneficio, será de tres mil (3,000) metros cúbicos por día.

La calificación de PPM y PMA deben acreditar los requisitos ante la DREMH del Ministerio de Energía y Minas, quien expedirá la calificación correspondiente y tendrá una vigencia de 2 años renovables a pedido de parte.

c) Mediana minería

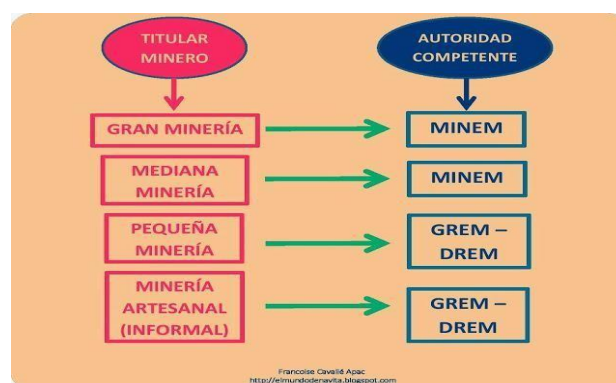
La vigente legislación minera no ha conceptualizado a la mediana minería, tampoco indica las condiciones para su calificación que corresponderían realizar a la Dirección General de Minería a tenor del Artículo 102 Inciso g).

La Mediana Minería es la escala intermedia entre la pequeña y gran minería. Constituye el grado de optimización y avance de la pequeña minería. Se caracteriza porque la explotación minera es subterránea con vetas más amplias, relativa mecanización, operación casi integrada, se cuenta a veces con planta de beneficio, déficit relativo a la energía, transporte y comunicaciones y los centros de producción están también alejados a los puertos y fundiciones. (*Cfr. SAMAMÉ BOGGIO, Mario; MINERIA PERUANA. Biografía y estrategia de una actividad decisiva, Editorial Litográfica la Confianza, Lima 1972, p.418.*)

d) Gran minería

Asimismo, la vigente legislación minera no ha conceptualizado a la gran minería, y menos indica las condiciones para su clasificación que correspondería realizar a la Dirección General de Minería a tenor del Artículo 102 Inciso g).

La Gran Minería es el grado de máximo desarrollo y de optimización de la industria minera. Se caracteriza por que la explotación es a cielo abierto o por galerías; hay una máxima mecanización, altas inversiones, operación integrada en la mina, concentración, fundición, refinación transporte; presencia de ingentes capitales; los yacimientos de hierro y de cobre de baja ley son explotados; auto sostenimiento en servicios de fluido eléctrico, médico y educacional; presencia de una gran masa laboral.



1. POR LA CLASE DE SUSTANCIA

a. METÁLICA

La doctrina informa que a medida que la ciencia descubre un nuevo mineral o nuevas cualidades o aplicaciones de los ya conocidos, el derecho positivo lo atesora e incorpora en el conjunto de las cosas susceptibles de apropiación, y sean de aquellos caracteres se determina la posición jurídica de cada uno; lo que determina que los minerales metálicos propiamente dichos, los que dan origen al nacimiento y desarrollo del derecho minero. (GONZALES, Joaquín V.; Volumen IV, Legislación de Minas, Universidad Nacional de la Plata, Imprenta Mercateli, Buenos Aires, 1935, p.22.)

b. NO METÁLICA

Son sustancias minerales que, sin haberse previamente beneficiado a través de procesos químicos, como el caso de los minerales metálicos, satisfacen la necesidad al ser humano en la industria de la construcción (arena, piedras, arcilla, mármol, ónix) o la industria de los cosméticos (talco).

Minería Artesanal

La minería artesanal y la pequeña escala de oro es la mayor fuente de liberación intencional de mercurio del mundo. Al llegar al medio ambiente la exposición de los seres humanos a este compuesto es claramente peligroso y debería ser motivo de preocupación.

PROCESO ARTESANAL

Se extrae arena, piedras y lodo del área a explotar. Se tritura generalmente en molinos caseros, hasta conseguir una pasta.



Cerca del 10% del mercurio utilizado en la mezcla se une al oro el restante 90% es vaciado al medio ambiente.

Luego se calienta la amalgama para que se evapore el mercurio y quede el oro solo. Se utilizan diferentes técnicas que liberan distintas cantidades de mercurio

El mercurio se usa para separar el oro del resto de los minerales. Al agregarlo a la mezcla con agua se disuelve y se une al oro en polvo y se forma una amalgama.

Los seres humanos que comen pescado contaminado absorbe, el metilmercurio fácilmente y son vulnerables a sus efectos

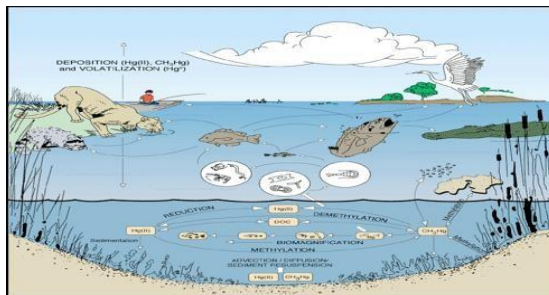
Pérdida de la memoria



Dentro del cuerpo humano el mercurio funciona como una neurotoxina, interfiriendo con el cerebro y el sistema

Exponerse al tóxico antes del nacimiento y durante la infancia puede causar retraso mental, parálisis cerebral, sordera, ceguera, déficit de atención y problemas de aprendizaje

El mercurio empieza a viajar a través de la cadena alimenticia cuando los peces grandes se comen a los peces pequeños contaminados. El lugar de disolverse el mercurio se acumula a niveles siempre ascendentes.



En la cadena alimenticia
Cuando el mercurio inorgánico
entra a un cuerpo de agua, las
bacterias lo absorben y lo
convierten en metilmercurio
(mercurio orgánico).

2.2 Aspectos conceptuales.

A. Con referencia a la variable independiente: El principio de oportunidad.

a. Origen y Fundamento del Principio de Oportunidad

El principio de oportunidad es una institución que se basa en el Derecho anglosajón, su incorporación a nuestro ordenamiento procesal penal altera la inflexibilidad del clásico principio de obligatoriedad en el ejercicio de la acción penal. Hoy el fiscal no está obligado a denunciar ante toda noticia criminal. Puede dejar de hacerlo en virtud de pautas o criterios establecidos por ley.

El legislador ha facultado a los representantes del Ministerio Público para que se abstengan de ejercitar la acción penal en base a dos supuestos legalmente establecidos: falta de necesidad y falta de merecimiento de pena. La aplicación de estas pautas de oportunidad por el fiscal no está sujeta al control jurisdiccional, lo que nos lleva a afirmar que el proceso penal en nuestro país se ha rediseñado al adoptarse, con algunas limitaciones legales, una institución característica del modelo de justicia criminal anglo americano. En este determinado por la negociación a que llegan las partes, sin ninguna intervención del juez.

En efecto, solo tratándose de casos en los que se produce una mínima afectación a los bienes jurídicos o cuando el imputado ha manifestado una escasa responsabilidad en su comisión, el fiscal y el autor del delito pueden decidir sobre la apertura del proceso. Ambos se hallan facultados para negociar, tomando en cuenta los intereses reparatorios de la víctima, acerca del no ejercicio de la acción penal a cambio de la tácita aceptación de

los hechos atribuidos al imputado. No cabe duda que de esta manera se abre en el campo penal un cierto espacio para el consenso.

Entre éstas se destacan: buscar la eficacia del sistema a través de una selectividad controlada de los casos que merecen el concurso del derecho punitivo, favorecer el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, la búsqueda de la celeridad procesal, la revitalización de los objetivos de la pena, la ratificación del principio de igualdad, la finalidad de obtener la rápida indemnización de la víctima, evitar los efectos criminógenos de las penas cortas privativa de libertad y finalmente contribuir a la consecución de una justicia material por sobre la formal.

El espacio de consenso está destinado para la resocialización del autor del hecho y puede implicar, para respetar el principio de autonomía de la voluntad, el uso voluntariamente limitado de ciertos derechos y garantías fundamentales asegurados por el Estado constitucional y democrático de derechos, tales como la igualdad de oportunidades, el de presunción de inocencia, el de verdad real, el de amplia defensa, contradictorio, etc.

La procura del consenso, es un imperativo ético-jurídico que entre nosotros viene apoyado por dos parámetros constitucionales, que son:

- La obtención del consentimiento del imputado para someterse a una sanción constituye una manifestación de la autonomía de la voluntad o el ejercicio de la libertad y desenvolvimiento de la propia personalidad;
- El reconocimiento de la propia responsabilidad y la aceptación de sanción implican una actitud socializadora que facilita la reinserción social, reclamada con fin de la pena, que no debe ser perturbado ni por inicio o continuación del proceso ni por la estigmatización de la audiencia de juzgamiento.

b. Definición

El principio de oportunidad es un mecanismo de simplificación procesal en el ámbito del derecho penal, en virtud del cual el Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, tiene la facultad de abstenerse de su ejercicio en los casos previamente establecidos en nuestro ordenamiento procesal penal. Hoy el fiscal no está obligado a denunciar ante toda noticia criminal, puede dejar de hacerlo en virtud de pautas o criterios establecidos por ley, bajo determinados requisitos o supuestos previstos en la ley. Esta institución del Derecho procesal penal, se sustentaría en la falta de necesidad de pena en el caso concreto, que justifica que el Fiscal, pese a haber realizado un juicio preliminar sobre el carácter delictivo del hecho y la posible intervención del investigado en el mismo, se abstenga de ejercer la acción penal; en este sentido, hay quien entiende las causales previstas en el art. 2° CPP, como supuestos en que la imposición de la pena resulta innecesaria y, por lo tanto, irracional.

Es así, con la incorporación del Principio de Oportunidad en nuestro ordenamiento procesal legal ha beneficiado no sólo a los interesados o sujetos procesales; sino, también incide en el sistema judicial, toda vez, que mediante la aplicación de este principio establecido en el artículo 2° del Código Procesal Penal se consigue la eficiencia del sistema, pues permitir reducir la sobrecarga procesal, dejando que el órgano judicial conozca de delitos graves en los que resulta necesario hacer uso de las medidas coercitivas facultadas por ley.

En el ámbito del derecho procesal penal peruano podemos encontrar autores que definen el principio de oportunidad desde un punto de vista positivo, poniendo énfasis en los aspectos normativos y procesales. Así tenemos que para ORE GUARDIA, (1999; 213), define al principio de oportunidad como: “Un

mecanismo procesal a través del cual se faculta al Fiscal titular de la acción penal para decidir sobre la pertinencia de no dar inicio a la actividad jurisdiccional penal, o en su caso a solicitar el sobreseimiento cuando concurren los requisitos exigidos por ley”.

Asimismo, GIMENO SENDRA, (1987; 145) señala que el principio de oportunidad es: “La facultad, que al titular de la acción penal asiste, para disponer, bajo determinadas condiciones, de su ejercicio con independencia de que se haya acreditado la existencia de un hecho punible contra un autor determinado”. SANCHEZ VELARDE, (1993; 159) advierte que: “El principio de oportunidad supone la discrecionalidad de la actuación en la persecución penal; es decir, la libertad absoluta para decidir sobre el ejercicio de la acción o de la acusación penal”.

Según el jurista CAFFERATA NORES (2000;79) dice que: “Por principio de oportunidad debe entenderse la atribución que tienen los órganos encargados de la promoción de la persecución penal, fundada en razones diversas de política criminal y procesal, de no iniciar la acción pública o de suspender provisionalmente la acción iniciada o de limitarla en su extensión objetiva y subjetiva, o de hacerla cesar definitivamente antes de la sentencia, aun cuando concurren las condiciones ordinarias para “perseguir y castigar”.

En este mismo sentido, BACIGALUPO (1987; 169) señala que: “El principio de oportunidad no debe entenderse exclusivamente como una renuncia bajo ciertas condiciones a la acción penal diversificado del conflicto social representado por el hecho delictivo”. Un punto de vista similar tiene CREUS CREUS (1987;208), el cual lo considera como la posibilidad que el funcionario posee de discriminar si se encuentra o no ante un hecho que puede constituir delito, para promover la acción o

abstenerse de hacerlo”.

En suma, la conceptualización del principio de oportunidad implica la abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Representante del Ministerio Público cuando ocurra alguna de las circunstancias taxativamente señaladas en la ley.

c. Naturaleza jurídica.

En cuanto a su naturaleza jurídica, prima facie observamos que el principio de oportunidad es un acto jurídico procesal que contiene una declaración de voluntad que pone fin a la persecución penal de algunos ilícitos, bajo las condiciones que la norma taxativamente señala.

Para empezar, habremos de referirnos al tenor del art. 2° CPP, del cual puede colegirse que la aplicación del principio de oportunidad puede darse en dos momentos; como lo refiere (OCHOA, Abril, 2005): i) sin intervención judicial, en la etapa de investigación preliminar conducida por el Fiscal (art. 2°, inc. 1 CPP), o ii) con intervención del Juez de Investigación Preparatoria en la etapa preparatoria del proceso penal común, antes de formularse acusación (conforme al art. 2°, inc. 7 CPP); este instituto impide, en ambos casos, que se llegue a la fase de juzgamiento.

En nuestra opinión, es en el primer escenario donde, en rigor, se aprecia el principio de oportunidad reglado como manifestación de una facultad discrecional limitada reconocida al titular de la acción penal, quien dentro de determinados parámetros puede decidir abstenerse de promover la persecución de un ilícito por motivos de oportunidad.

Suscribimos esta idea del principio de oportunidad como forma de solución alternativa al proceso y pretendemos desarrollarla, partiendo del concepto de “proceso”, entendido éste como el cauce necesario para la actuación de la función jurisdiccional, y el ejercicio del derecho de acción.

Concluimos, por lo expuesto, que la aplicación del principio de oportunidad se da en un momento preprocesal (en ambos supuestos de aplicación, se da antes de la formulación de acusación); por ende, sí cabe ser catalogado como un medio alternativo de solución fuera del proceso en el ámbito penal.

Asumida esta postura, se antoja interesante realizar una breve comparación del principio de oportunidad con algunos mecanismos alternativos de solución de conflictos de otros ámbitos del Derecho, tales como son la transacción, la conciliación y el allanamiento.

d. Características

Las que se analizarán a continuación son las características del principio de oportunidad “reglado”, modelo acogido por los países de la tradición jurídica continental y, por ende, parte central de esta investigación elaborada en torno al caso peruano. En primer lugar, resulta importante conocer que se está ante una facultad del Fiscal: es decir, la posibilidad de aplicar criterios de oportunidad es una facultad otorgada única y exclusivamente al Fiscal, conforme se puede entender del texto del art.2º, inc. 1 CPP. Esto resulta lógico al ser el MP el encargado de la promoción de la persecución penal de acuerdo a lo establecido por el inc. 5, art. 159º Constitución.; por tanto, quién mejor que el guardián de la legalidad y quien lleva a cabo la investigación preparatoria, para poder discernir las situaciones que ameritan o no llegar a un proceso penal formal (ROSAS YATACO, 2004; 172).

Las siguientes características son las que (ANGULO ARA, 2007; 79) ha identificado en su concreto estudio sobre el principio de oportunidad peruano.

Considera el autor que una importante característica sería la taxatividad: esta hace referencia a que los fiscales no podrán aplicar arbitrariamente o a su antojo la oportunidad, sino que lo harán sólo ante casos concretos donde se presenten las

condiciones o supuestos indicados en la norma. El fiscal no puede inventar criterios de oportunidad por sí mismo.

Así, el principio de oportunidad tiene un carácter de excepcionalidad, que restringe su aplicación únicamente en los casos en que la ley faculta.

Como efecto de la aplicación de un criterio de oportunidad, se emite una disposición final equivalente a cosa decidida; esto implica que cualquier otro fiscal quedará impedido de promover u ordenar se promueva acción penal por una denuncia que contenga los mismos hechos, siempre que, se haya cumplido con la reparación a la que se obligó el imputado.

Por otro lado, en la aplicación de los criterios de oportunidad, la orientación no se halla en la búsqueda de la verdad material o histórica, que ha de quedar plasmada en la verdad procesal o legal como en un proceso penal ordinario; aquí más bien estamos ante un mecanismo alternativo de solución el cual se busca mediante la equidad. Esta solución de equidad conlleva por ende a que no se busque investigar los detalles del ilícito cometido, sino que basta con una gran probabilidad de la autoría del hecho por parte del imputado (esto es, la verdad formal a la que hicimos alusión anteriormente), el daño infligido al agraviado, y de las posibilidades reales de privilegiar la composición del conflicto mediante un acto de reparación.

Por último, el instituto del principio de oportunidad está pensado para evitar el proceso judicial, pues procura dar una solución al conflicto en sede fiscal obedeciendo a razones de utilidad.

e. Principio de Oportunidad en el Ordenamiento Jurídico Peruano

a) Antecedentes y regulación actual

En nuestro ordenamiento jurídico, el principio de oportunidad se remonta a la regulación en el artículo 2 del Código

Procesal Penal de 1991, en vigencia desde el 28 de abril de ese mismo año institución procesal que tiene ya más de dos décadas y que fuera modificada hasta en tres ocasiones con la Ley N° 27072, publicada el 23 de marzo de 1999, la Ley N° 27664, publicada el 8 de febrero de 2002 y la última modificatoria la Ley N° 28117 llamada Ley de Celeridad y Eficacia Procesal Pena, publicada el 10 de diciembre de 2003 y el CPP de 2004 (llamado NCPP a la fecha de su creación) Decreto Legislativo 957.

Su incorporación en nuestro sistema procesal obedece básicamente al mejoramiento y rapidez del sistema judicial para descargar la congestión procesal, que abruma ahoga y atosiga actualmente a la administración de justicia.

b) Criterios de Oportunidad en el C.P.P. de 2004

- **Extra proceso.** - significa que los criterios de oportunidad pueden aplicarse antes del inicio formal de la persecución penal, lo que desde ya evidencia una gran ventaja para la administración de justicia penal, al evitar la utilización de recurso siempre escasos (económicos, infraestructura y humano). La abstención del ejercicio de la acción penal por parte del fiscal se resuelve a través de una disposición fiscal motivada, bajo el amparo del cumplimiento de las exigencias para su procesabilidad. El fiscal está facultado para aplicar este principio cumpliendo con los requisitos exigidos en el artículo 2° del C.P.P.
- **Intra proceso.** - Formalizada la investigación preparatoria, el fiscal o el mismo imputado podrán solicitar la aplicación del principio de oportunidad cumpliendo con los requisitos. El Juez de la Investigación Preparatoria si está de acuerdo, luego de la celebración de una audiencia, procede a dictar el auto

de sobreseimiento de la causa y ordenar su archivo.

c) Supuestos de aplicación facultativa

El profesor y magistrado SAN MARTIN CASTRO C. E. (2015) denomina a los recogidos en el inc. 1, art. 2° CPP como criterios de oportunidad “bajo condición”, por cuanto la abstención del ejercicio de la acción penal se encuentra suspendida a condición de que el imputado cumpla con ciertas condiciones, y los sistematiza entre supuestos de: a) falta de necesidad de pena, y b) falta de merecimiento de pena.

Asimismo, como ya se ha comentado el D. Leg. N° 1102 introdujo un nuevo criterio de oportunidad respecto de delitos de minería ilegal, el cual hemos decidido ubicar también en esta categoría por las razones que se expondrán.

a. Falta de necesidad de pena

Se ha regulado el caso del autor-víctima que se da cuando el agente se ha visto afectado de manera directa y grave por las consecuencias del delito que cometió, resultando la pena innecesaria; esto es lo que la doctrina llama “pena natural”.

Se dice que la represión penal sería innecesaria en razón a que esta sanción sería menor al daño ya sufrido por el autor del delito (o que incluso podría ser inapropiada por constituir un exceso), por lo que la pena no cumpliría con sus fines. Para este supuesto contemplado en el literal a) del inc. 1, art. 2° CPP, se ha fijado además un límite objetivo, con base en el principio de proporcionalidad: que la sanción prevista para el delito no sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad.

b. Falta de merecimiento de pena

Este criterio presenta dos supuestos: los delitos bagatela y la mínima culpabilidad. En ambos casos, es relevante que el interés público no se haya visto afectado gravemente; únicamente así calificarán para la aplicación del criterio de oportunidad según lo establecen de forma unánime la ley y la doctrina.

El interés público como concepto jurídico indeterminado que es, posee caracteres de generalidad y variabilidad, por lo que requiere de una concreción jurídica, esto es, debe ser analizado conforme al contexto social del que se trate y al caso concreto.

c. Escasa lesividad

El literal b) del inc. 1, art. 2° CPP recoge la causal en que el Fiscal puede abstenerse de promover la acción penal frente a delitos que por su insignificancia o poca frecuencia no afecten gravemente el interés público.

Son delitos de bagatela o insignificantes aquellos que tienen un mínimo contenido de injusto o escasa lesividad. Para que el fiscal pueda definir la insignificancia del delito ha de tener en cuenta la conminación penal respectiva, que constituye un primer marco de definición y debe precisar, siguiendo lo dispuesto en el artículo 46° del Código Penal; es decir, aquellos factores vinculados a la determinación de la magnitud del injusto, tales como:

- La naturaleza de la acción, importancia y afectación del bien jurídico tutelado por el tipo penal;
- Los medios empleados en la comisión del delito, observando la entidad lesiva de los mismos o su capacidad para vulnerar bienes jurídicos;

- La extensión del daño o peligro causado.
- Las circunstancias agravantes y específicas contenidas en el Código Penal.

Mínima culpabilidad.

Este criterio es recogido en el literal c) del inc. 1, art. 2° CPP y bajo esta terminología, algunos autores agrupan a aquellos supuestos de exención incompleta de responsabilidad penal como son los contemplados en el art. 14°, 15°, 16°, 21°, 22° y 25° del Código Penal y se advierte que no existe ningún interés público gravemente comprometido en su persecución. Aquí se refiere que el agente ha actuado con mínima responsabilidad o culpabilidad. Cuando se presenten circunstancias atenuantes que permitan una rebaja sustancial de la pena, vinculadas entre otros factores, a los móviles y finalidad del autor, a sus características personales, a su comportamiento luego de la comisión del delito, con exclusión de la confesión. Se tendrá en consideración, además, aquellos supuestos vinculados a las causas de inculpabilidad incompletas, al error y al arrepentimiento sin éxito.

La mínima contribución a la perpetración del delito está referida, en primer lugar, a la escasa voluntad aplicada al delito, vinculada al grado de dolo y a la debilidad de la voluntad criminal; y, en segundo lugar, al concreto y objetivo accionar del imputado en la comisión del delito, por ejemplo, si intervino en un delito que quedó en grado de tentativa o en calidad de cómplice secundario.

f. Principio de Oportunidad y Derecho Comparado

a) España

En este país se conoce “la conformidad del imputado” y se refieren a delitos de escasa importancia.

Si las partes llegan a un acuerdo ante la policía o ante el Ministerio Público, éste tiene que ser aprobado por el fiscal y por el juez para su sobreseimiento y archivamiento definitivo.

Vicente Gimeno Sendra conceptúa a la conformidad como un acto unilateral de postulación y de disposición de la pretensión, efectuado por la defensa y realizado en el ejercicio del principio “puro” de oportunidad; por el que, mediante el allanamiento a la más elevada petición de pena, que nunca puede exceder a los seis años de privación de libertad, se ocasiona la finalización del procedimiento a través de una sentencia con todos los efectos de la cosa juzgada.

b) Estados Unidos de América

En Estados Unidos un gran porcentaje de los procesos penales se resuelve bajo el sistema de plea bargaining. Este es un acto mediante el cual el inculcado admite su culpabilidad en el delito instruido, dejando de lado la posibilidad de su absolución, así como de su condena. Edmundo S. Hendler dice que es bien conocido que la mayoría de los procesos penales en los Estados Unidos concluyen con declaraciones de culpabilidad que evitan tener que desarrollar todo el procedimiento de un juicio. También es conocido que la gran mayoría de esos reconocimientos proviene a su vez de transacciones o acuerdos entre la acusación y la defensa. Las tres alternativas básicas de la negociación son: 1) acuerdo permitiendo al acusado declararse culpable de un cargo

menor que el que podría probarse; 2) declararse culpable on the nose, o sea del cargo formulado por la acusación; con la promesa de alguna forma de atenuación, como por ejemplo, un pedido de que se imponga condena condicional; 3) declararse culpable on the nose con la promesa de desistir o no formular otros cargos posibles. Esta institución tiene su procedencia a través de tres formas:

- Cuando es voluntaria (porque es evidente su culpabilidad)
- Cuando es inducida (si renuncia al juicio contradictorio con su confesión sincera, se hará acreedor a una pena leve).
- Finalmente es negociada (acuerdo entre el imputado o su abogado y el fiscal sobre el delito, la pena o ambas).

c) Italia.

Es conocida la figura procesal en Italia del patteggiamento. En este país, a pedido del imputado o del representante del Ministerio Público, se busca la aplicación de una pena sustitutiva pecuniaria naturalmente a favor del agraviado, con la condición de que en los hechos investigados aparezcan circunstancias que atenúen la pena, de manera que permita prever que la pena no será mayor a los dos años de pena privativa de libertad. Este acuerdo autor víctima debe ser apreciado por el juez penal y aprobado por el Tribunal.

d) Inglaterra

En el sistema anglosajón, funciona el mecanismo procesal del plea guilty que en castellano quiere significar la declaración de culpabilidad que evita el juicio del veredicto de los jurados. Se permite también el acuerdo entre las partes a fin de no someterse a un juicio o condena mayor, al margen de la intervención del fiscal.

B. Con referencia a la variable dependiente: Minería ilegal

Este principio de oportunidad está contemplado en el inc. 8 del art. 2° CPP fue incorporado por el art. 3° del D. Leg. N° 1102, publicado el 29 de febrero de 2012, dispositivo legal que añadió al CP los delitos de minería ilegal.

Se ha decidido ubicar este supuesto dentro de los de aplicación facultativa en atención al tenor literal del artículo, que señala: “el Fiscal podrá también abstenerse de ejercer la acción penal, luego de la verificación correspondiente, en los casos en que el agente comprendido en la comisión de los delitos previstos en los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307-D y 307-E del Código Penal (...)”. La terminología escogida por el legislador indica que es potestativo para el Fiscal decidir si aplica o no el principio de oportunidad en este supuesto.

Para su procedencia, se condiciona a quien pretende ser beneficiado mediante la aplicación de la oportunidad a suspender sus actividades ilícitas “de modo voluntario, definitivo e indubitable”. Además, se dispone que este hecho debe ser comunicado al OEFA mediante instrumento de fecha cierta. Esto resulta extraño pues, si bien en el ordenamiento peruano OEFA es el ente administrativo ambiental por excelencia, en el sector de minería los gobiernos regionales son las EFA competentes para fiscalizar a la pequeña minería y minería artesanal en su circunscripción territorial conforme a lo dispuesto por la Ley N° 27651 – Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, modificada por D. Leg. N° 1100 y es precisamente en esta esfera de la actividad en la que opera la minería ilegal, como se tendrá ocasión de explicar (Ley N° 27651 Ley de la Formalización y Promoción de la pequeña minería y minería artesanal).

Supuestos de aplicación obligatoria

Otra expresión del principio de oportunidad es el llamado acuerdo

reparatorio. Estos supuestos se encuentran regulados en el inc. 6, art. 2° CPP, de cuyo tenor puede percibirse claramente un sentido de obligatoriedad de aplicación por el representante del MP en determinados delitos.

a) La minería informal e ilegal, el proceso de interdicción minera y los nuevos dispositivos legales del país.

La Ley General de Minería D.S. N° 014-92-EM, vigente a la fecha no contempla en ninguno de sus artículos las actividades de Minería Ilegal y Minería Informal, habiéndose dado por los dos últimos gobiernos de turno normas para tratar de solucionar, reglamentar y conducir a un mejor puerto este fenómeno social que ha involucrado a cerca de 40000 familias peruanas o personas que están consideradas en el orden de la ilegalidad ante la ley minera y las normas jurídicas peruanas, impactando el ambiente, ríos, cuencas, zonas de cultivo, etc. Propiciando Pasivos Ambientales Mineros irreversibles a lo largo y ancho del país.

Normas últimas del sector minero

Ley N° 27651 (22.Ener.2002)

Decreto Supremo N° 013-2002-EM (21.Abr.2002)

Decreto Legislativo N° 1100 (18.Febr.2012)

Decreto Legislativo N° 1105 (19.Abr.2012)

Decreto Supremo N° 029-2014-PCM (19.04.2014)

Decreto Legislativo N° 1293 (30.Dic.2016)

Decreto Legislativo N° 1336 (06.Ene.2017)

Decreto Supremo N° 018-2017-EM (01.Jun.2017)

b) Delito de la minería ilegal

Para empezar, debe considerarse que el fenómeno jurídico en sí es dinámico, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que existen ramas del Derecho que avanzan con más rapidez que otras, (*BELAUNDE MOREYRA, Martin. "La dinámica del*

Derecho Minero en su Actual y Problemático Laberinto”.

Lima: Revista de Derecho “AGORA”- Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Año IX-X, 2009, pg.447.). Una de las ramas en donde se puede evidenciar la velocidad del cambio y la dinámica es el Derecho Minero y cuando hablamos de este derecho nos referimos a los Decretos Legislativos que regulan la minería ilegal y su formalización:

1. Decreto Legislativo N° 1099 – Aprueba acciones de interdicción de la minería ilegal en el departamento de Puno y remediación ambiental en las cuencas de los ríos Ramis y Suches.
2. Decreto Legislativo N° 1100 – Regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y establece medidas complementarias.
3. Decreto Legislativo N° 1101 – Establece medidas para el fortalecimiento de la fiscalización ambiental como mecanismos de lucha contra la minería ilegal.
4. Decreto Legislativo N° 1102 – Incorpora al Código Penal los delitos de minería ilegal.
5. Decreto Legislativo N° 1103 – Establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal.
6. Decreto Legislativo N° 1104 – Modifica la legislación sobre pérdida de dominio.
7. Decreto Legislativo N° 1105 – Establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal.
8. Decreto Legislativo N° 1106 – Promueve la lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado.
9. Decreto Legislativo N° 1107 – Establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y

comercialización de maquinarias y equipos que puedan ser utilizados en la minería ilegal, así como del producto minero obtenido en dicha actividad.

Este Paquete legislativo no fue fruto de la dinámica o velocidad del derecho minero a la que hacíamos referencia, sino fue resultado de la presión social tras comprobar la destrucción que ha causado la minería ilegal e informal al país y a las personas que trabajan en la extracción de estos minerales.

Por otro lado, el debate de la minería en el país se ha venido centrando en la gran minería, (*BERMUDEZ TAPIA, Manuel. “La Punción de la Minería Informal en una perspectiva penal y social”. RAE Jurisprudencia: Revista de Análisis Especializado en Jurisprudencia. Año 4 – Nº 46. Fecha de Publicación abril 2012; pg.37.*). Casos como los proyectos mineros Conga o Tía María han polarizado a la población, demandando un gran despliegue del gobierno en casi todos sus ámbitos de acción, para evitar una crisis mayor.

Uno de los pasos más importantes que se ha logrado con esta nueva regulación es la diferenciación entre minería ilegal e informal:

Diferencias que existe entre la minería ilegal e informal

Minería ilegal	Minería informal
Se realiza en zonas donde está prohibida su ejercicio, usando equipos y maquinarias que no corresponde a las características de la actividad minera desarrollada y sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental. Los mineros ilegales no pueden formalizarse.	Se realiza en zonas donde no está prohibida su ejercicio, que no trabaja bajo ninguna de las condiciones antes mencionadas y que, además se ha acogido al proceso de formalización impulsado por el Estado. Si cumple con los requisitos establecidos puede llegar a ser formal

Después de haber diferenciado entre minería ilegal e informal es importante señalar los pasos o condiciones que se han planteado para que los Mineros informales se formalicen y puedan obtener la calificación de PPM y PMA.

Según el Decreto Legislativo N° 1105 la formalización podrá ser iniciada o continuada según sea el caso, por aquellos que realicen la actividad cumpliendo con los pasos siguientes:

1. **Presentación de Declaración de Compromisos** (el plazo para su presentación venció el 6 de noviembre de 2012).

Viene hacer una declaración jurada, donde se da por iniciada el proceso de formalización y en ella el sujeto se compromete a cumplir con una serie de obligaciones. Los Gobiernos Regionales llevan el registro de presentación de todas las declaraciones de compromiso, con ello permite identificar quienes se encuentran en este proceso de formalización y quiénes no.

Sin embargo, resulta poco coherente con el propósito mismo de la formalización, ya que los mismos sujetos de formalización y la autoridad entienden que con la sola presentación de la declaración jurada de compromisos pueden continuar con el desarrollo de actividades mineras de exploración y explotación y de hecho ello sucede en la realidad, cuando lo óptimo hubiera sido que culmine el proceso de formalización, obtengan el certificado de inicio y realicen sus actividades mineras con la totalidad de sus títulos habilitantes.

2. **Acreditación de Titularidad, Contrato de Cesión, Acuerdo o Contrato de Explotación sobre la Concesión Minera** (el plazo para su acreditación venció el 5 de setiembre de 2013, pero fue ampliado mediante Decreto Supremo N° 032-2013-EM hasta el 19 de abril del 2014).

Según TEJADA GURMENDI, Jaime: “Análisis de las Disposiciones que regulan el Proceso de Formalización de la Minería Informal”; Universidad San Martín de Porres-Instituto de Investigación Jurídica, Año I-Número V, agosto 2013, p. 5 señala: El minero informal deberá acreditar derechos sobre la concesión mediante cualquiera de las tres alternativas siguientes:

- La Titularidad de una concesión minera, previamente solicitada a la autoridad correspondiente, debidamente titulada y registrada.
- Celebrar un contrato de cesión minera, por el cual el titular de una concesión minera cede temporalmente su derecho a favor del sujeto

de formalización.

- Celebrar un acuerdo o contrato de explotación, por el cual el titular de una concesión minera cede para su explotación una parte del área de su concesión minera a favor del sujeto de formalización.

3. **Acreditación de propiedad o Autorización de Uso del Terreno Superficial** (el plazo para su acreditación se amplió mediante D.S. N° 032-2013-EM, hasta el 19 de abril de 2014).

Refiere CALLE, Isabel; Ruiz, Manuel en: “Marco jurídico del Acceso y Aprovechamiento de Recursos Naturales, Análisis de Experiencias Internacionales” Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Primera Edición; Año 2012, p. 8 que: Se han regulado el acceso a los recursos naturales sobre el fundamento de un sistema Regalista por el cual se realiza una separación legal de la superficie y el yacimiento, individualizándolos como bienes distintos y brindándole a cada uno regulación propia para realizar actividades mineras, además de contar con la concesión, se deberá contar con la propiedad superficial donde se ubica esta, brindada claro está por el propietario de dicha superficie.

El minero informal, deberá acreditar la propiedad o algún derecho sobre la superficie en donde se ubica su concesión o el área materia de contrato de cesión o de explotación. Pero si su área de explotación se encontrara en terrenos eriazos de propiedad del Estado, no será necesaria la acreditación de la propiedad o derechos sobre los terrenos superficiales

4. **Autorización de Uso de Aguas** (El plazo para su acreditación se amplió mediante el D.S. N° 032-2013-EM, hasta el 19 de abril del 2014.)

El minero Informal gestionará una autorización de uso de agua superficial por el plazo no mayor de dos años, con el fin de cubrir exclusivamente las necesidades de agua derivadas o relacionadas directamente con la ejecución de estudios u obras y lavado de suelos.

5. **Aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo – IGAC** (El plazo para su acreditación se amplió mediante el D.S. N° 032-2013-EM, hasta el 19 de abril del 2014.)

El sujeto de formalización adopta las medidas ambientales para prevenir controlar, mitigar y remediar los impactos ambientales y el IGAC contiene

las metas graduales, cronograma de inversiones, y resultados ambientales los que son objeto de fiscalización y sanción. También es pertinente señalar que el incumplimiento del IGAC podrá conducir a la cancelación de su inscripción en el correspondiente registro de Declaración de Compromiso.

6. Contar con el certificado de inicio o reinicio de actividades de exploración, explotación y beneficio

Para iniciar o reiniciar actividades de exploración o explotación, así como beneficiar minerales se requerirá la autorización del Gobierno Regional, específicamente de las Direcciones Regionales de Energía y Minas correspondientes. Esta autorización será emitida previa opinión favorable del Ministerio de Energía y Minas, basada en el informe de evaluación emitido por la Dirección Regional de Energía y Minas, y consistirá en la verificación del cumplimiento de los pasos ya señalados.

El haber delegado competencias a los Gobiernos Regionales sobre el otorgamiento de derechos y regular los asuntos sobre la PPM y PMA y otorgarle la competencia para controlar la minería ilegal, al parecer fue un gravísimo error por diferentes razones; primero debemos tener en cuenta que el proceso de descentralización en nuestro país es muy incipiente y lento, como para delegar funciones tan importantes como las ya mencionadas; segundo, el factor de la corrupción es también un punto en contra de los Gobiernos Regionales y para terminar la falta de técnicos especializados en estos temas, lo cual tuvo como consecuencia la ampliación de plazos para todos los pasos de la formalización. Considero que a la par de otorgar competencias se debió fortalecer las capacidades institucionales, legales y técnicas a los Gobiernos Regionales a fin de que este proceso pueda tener éxito.

Luego de haber transcurrido dos años luego de la aprobación del D.L. N° 1105 y, atendiendo a lo dispuesto en el D.S. N° 032-2013; se aprueba la Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal. El objetivo de este dispositivo legal es el ordenamiento de la minería a pequeña escala de forma gradual, progresiva y ordenada, y siendo de este modo, se establece la

creación de un Registro de Saneamiento en el que constará el total de mineros acogidos al proceso de formalización que ingresarán a la etapa de Saneamiento. Las implicancias de la norma son las siguientes:

- a. Los mineros deben tener Declaración de Compromiso con estatus vigente
- b. Exige que los mineros deban contar con RUC, para ello se estableció un plazo máximo de 120 días contados a partir del 19 de abril de 2014, para que se acredite que cuentan con RUC en la condición de Activo, el mismo que tuvo por vencimiento el 09 de octubre del mismo año.
- c. Continuarán las acciones de fiscalización por parte de la autoridad regional y de ser el caso acciones de interdicción.

Sin embargo, no se ha hecho nada al respecto, recibiendo críticas o falencias que ha originado la inobservancia como bien señaló Hans Kelsen en su Teoría pura del Derecho, al decir: el derecho no es “*norma y solo norma*”, sino que dicha norma debe ir acompañada de aspecto sociales, políticos, económicos y culturales, aquí podemos aprovechar para contestar la pregunta que nos hemos planteado y afirmar que no se ha implementado adecuadamente este nuevo marco legal, esta implementación se debió dar antes de la dación de estos decretos, es decir, informar a los mineros ilegales e informales sobre los beneficios que trae pasar a ser formales, la capacitación sobre nuevas formas de trabajar como la utilización de la retorta para recuperación del mercurio y disminuir los índices de contaminación, asesoramiento en todos los pasos de la formalización, pero nada de esto se hizo, recién ahora se está tratando de realizar ojala tengamos éxito.

¿Que se tiene para el 2017 y los próximos tres años?

Según la prensa estos tres últimos años será de desastres ecológicos y ambientales amenazados por una incontrolable ola de mineros informales e ilegales con impactos irreversibles para el país y la ciudadanía y nuestro ambiente amenazado de un colapso si no se cambian las normas ya y con un control estricto, amén de la economía del país.

(<http://perumineria.com/2017/01/19/peru-flexibilizacion-del-gobierno-en-lalucha-contra-la-mineria-ilegal/>).

Durante la campaña presidencial, el entonces candidato —y ahora presidente— Pedro Pablo Kuczynski marcó una posición firme al referirse a la lucha contra la pequeña minería ilegal en Perú, una actividad que ha arrasado solo en Madre de Dios con más de 50 000 hectáreas de bosques en los últimos 40 años. Su posición contrastaba frente a la de su contendora, Keiko Fujimori, que había prometido a la Central Nacional de Mineros del Perú (Cenami) derogar los decretos legislativos que sentaron las bases para la fiscalización y el proceso de formalización minera en el 2012.

Al promulgarse el Decreto Legislativo N° 1293 de fecha 30 de diciembre de 2016 que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal:

- 1) Los sujetos que cuenten con inscripción vigente en el Registro de Saneamiento referido al artículo 2 del D.S. N° 029-2014-PCM.*
- 2) Los sujetos que forman parte del Registro Nacional de Declaración de Compromiso, con inscripción vigente y que acrediten su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes ante la SUNARP.*
- 3) Excepcionalmente, las personas naturales que se encuentren desarrollando actividades de pequeña minería o de minería artesanal de explotación y que realicen su actividad en una concesión minera, a título personal y que cuenten con inscripción en el RUC.*

Las inscripciones se realizarán a partir del 6 de febrero de 2017 ante la SUNAT y hasta un plazo de 120 días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Ministerio de Energía y Minas verificará que los sujetos mencionados acrediten lo siguiente:

- La actividad minera desarrollada tenga una antigüedad no menor a 5 años.*
- No contar con declaración de compromiso cancelado.*
- No encontrarse inhabilitado para realizar actividad minera.*

Aquellos sujetos que incumplan con acreditar los requisitos antes señalado serán excluidos del Registro Integral de Formalización Minera.

Sin embargo, para los expertos consultados, la nueva legislación promulgada

para combatir esta actividad ilegal se puede resumir en una sola palabra: retroceso. El paquete legislativo aprobado hace pocos días deja la puerta abierta para que los mineros inscritos que no finalizaron al proceso de formalización en el gobierno pasado puedan seguir operando hasta el 2020.

Especialistas como el exministro del Ambiente, Manuel Pulgar- Vidal, y el exviceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, se preguntan ahora “si el retroceso al que están sometiendo el proceso (de formalización) iniciado el 2012, es resultado de dicho pacto”. Así califican la reunión sostenida hace un mes entre el gobierno y las federaciones mineras. Mongabay Latam buscó a un grupo de expertos para analizar las implicancias de los decretos legislativos publicados en los últimos diez días.

c) La minería ilegal y el proceso de formalización

El gobierno pasado abrió un padrón para formalizar a los mineros que hasta ese momento se encontraban realizando actividades de pequeña minería de forma ilegal, es decir, sin ningún permiso del Estado y sobre todo sin resguardar adecuadamente el medio ambiente. Ese padrón se cerró formalmente en abril de 2014. Los mineros que no entraron en esa lista, que tuvo más de 72 000 inscritos, debían ser fiscalizados por el Estado.

Pero ese cerrojo se ha vuelto a abrir.

El 31 de diciembre último se reabrió la inscripción para el proceso de formalización que comenzará el 6 de febrero de 2017 y se extenderá hasta finales de julio. La pregunta que se hicieron en ese momento los expertos fue: ¿quiénes podrán participar en este proceso? El ex Alto Comisionado en asuntos de minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, César Sierra, precisa que tanto los ya inscritos en el primer proceso iniciado en el 2012 como los que no lo hicieron, es

decir, los mineros ilegales que prefirieron continuar desarrollando actividades ilícitas sin autorización, tendrán una segunda oportunidad. “Bajo las mismas condiciones de los inscritos, lamentablemente para aquellos que se han inscrito con anterioridad o están en este proceso de formalización, estas personas ilegales (no inscritas) que tienen la oportunidad que a partir del 6 de febrero de 2017 que se apertura este registro de formalización minera pueden inscribirse siempre y cuando demuestren que han estado haciendo actividades con cinco años de anterioridad”.

Los que no lograron llegar a culminar el proceso de formalización iniciado en el 2012 y obtener una autorización de inicio o reinicio de actividades, sostiene Sierra, tendrán tres años más de plazo: “eso significa que las 72 000 personas que no lograron culminar su proceso de formalización y que no lo terminen el 27 de julio, tienen tres años más para poder terminar su proceso”. Ernesto Ráez, ecólogo tropical y miembro de la Fundación ProNaturaleza, que ha estudiado de cerca el tema, califica el nuevo proceso de formalización como “nefasto” y luego agrega que “el registro famoso (de formalización) ofrece patente de corso a los mineros ilegales para que continúen su actividad sin tropiezos, con el cuentazo de que van a formalizarse. En la práctica, no tienen ningún incentivo para hacerlo, porque operan impunemente. Si hoy puedo vender mi oro mal habido, ¿qué me importa la amenaza de que en tres años ya no podré, sobre todo si lo mismo me dijeron hace tres años y aquí sigo, incólume?”.

¿Qué efecto tiene esta medida para el medio ambiente? ¿Qué significa que los mineros tengan una nueva oportunidad de tres años? Según un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) y la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA), en los últimos cuatro años la minería ilegal deforestó 12 503 hectáreas de

bosques en el sur de la Amazonía, principalmente en Madre de Dios, pero registrándose un impacto importante también en Cusco y Puno. La mitad de esos bosques deforestados están ubicados en las zonas de amortiguamiento de tres áreas naturales protegidas: la Reserva Nacional Tambopata, el Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri.

Son muchas las voces que se han pronunciado sobre este cambio en las reglas de juego. Una es la del exministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, para quien estas nuevas normas forman parte “de un paquete legislativo que de por sí es muy peligroso. Para empezar, el Decreto Legislativo 1293 ha vuelto a abrir la posibilidad de tener nuevos sujetos que ingresan a un proceso de formalización, lo único que han hecho es cambiar de nombre, pero han vuelto a abrir nuevamente la puerta, es decir, de los 70 000 que había, ahora tendremos equis más y eso me parece que es poco apropiado porque a su vez no se están fortaleciendo las acciones de interdicción, (...) más bien se han debilitado y la minería ilegal está creciendo”. Pulgar-Vidal agrega que “una de las cosas peligrosas de esta nueva ley es que, según las normas del 2012, la autorización de inicio o reinicio (otorgada tras culminar el proceso de formalización) de actividades la daba el gobierno regional con una opinión previa del Minem (Ministerio de Energía y Minas). Con la nueva legislación, esto será potestad solo del gobierno regional. Estoy seguro que habiendo algunos gobiernos bastante corruptos o alineados a la minería ilegal van a otorgar estos (permisos de reinicio) como si fueran rifas”. El exministro del Ambiente cita como ejemplo al cuestionado gobernador de Madre de Dios, Luis Otsuka, a quien imagina “dando autorizaciones de inicio y reinicio sin ningún control”.

Tanto el ex Alto Comisionado en asuntos de minería como el ex viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, consideran que el proceso de formalización funcionará si el Estado asesora y fiscaliza a los gobiernos regionales para que guíen a los inscritos y logren que estos no abandonen los compromisos asumidos. “Hay que fortalecer el proceso de formalización, proveer asistencia técnica, orientar y fiscalizar a los gobiernos regionales para que cumplan su tarea, pero este proceso tiene tres ejes, como la lucha con los cultivos ilegales, el eje de la formalización, el eje de la interdicción (operativos policiales contra la minería ilegal) y el eje de economía alternativa, esos tres ejes deben darse con claridad y con eficacia”, explica Castro.

d) Cambio en las reglas de juego

En cuanto a los cambios en la aplicación de las penas por el delito de minería ilegal, la nueva legislación señala que serán sancionados quienes desarrollen la actividad de exploración, extracción, explotación u otro similar sin contar con autorización, y que correrán la misma suerte quienes se encuentren fuera del proceso de formalización. Esta modificación sería adecuada si no fuera porque al final —al abrir una excepción— los mineros ilegales vuelven a obtener un salvoconducto. Al final del decreto legislativo dice que “el agente de los delitos de minería ilegal, que se inscribe en el Registro Integral de Formalización Minera” y quien no logre obtener la autorización final de inicio o reinicio de operaciones mineras por culpa de un funcionario a cargo del proceso de formalización, no será sancionado por el delito de minería ilegal.

Fuente: La Mula / 19/01/2017/ Perú Minería/ El Portal de Noticias de la Minería Peruana.

¿Cómo está la región Huánuco en este tema?

La zona declarada crítica por agentes municipales y tenientes gobernadores, se localiza en el centro poblado Pueblo Nuevo, distrito de José Crespo y Castillo, en la provincia de Leoncio Prado así, otra localidad rural es en el distrito de Cholón, provincia de Marañón, también en la región Huánuco y porque no decirlo en Puerto Inca donde diversas organizaciones marcharon en la provincia de Puerto Inca para exigirle a la Dirección Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de Huánuco deje de otorgar petitorios mineros en zonas frágiles de la Amazonía, así como la nulidad de las declaraciones de compromiso a empresarios que no merecen acogerse a esta medida.

El reclamo contra los mineros, se da porque en los últimos meses la minería ilegal e informal se ha expandido afectando zonas de biodiversidad y comunidades nativas.

Un caso peculiar tenemos en Pueblo Nuevo, el río Soledad, donde existe cristalinas aguas en verano y abundantes camarones, cangrejos y exóticos peces amazónicos, pero; de la noche a la mañana viene mostrando un cambio radical, presentando una inusual turbidez, perjudicando con ello a los agricultores, a sus cultivos agrícolas y a sus animales.

De esta manera la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Leoncio Prado, el Juzgado de Paz y la Dirección Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de Huánuco constataron esta ilegal actividad en la quebrada Libertad, en la localidad rural de El Árabe en el distrito de José Crespo y Castillo. Allí encontraron un cargador frontal y un volquete, iniciando una investigación con la finalidad de encontrar a los responsables y contrarrestar este tipo de actividades ilícitas, por lo que, se dispuso aperturar investigación con la finalidad de obtener suficientes medios de

prueba.

Estas son solo algunas de las muchas experiencias que a diario se conocen en pueblos del Alto Huallaga como Aucayacu, Tingo María, Pachitea, Marañón y otras provincias de la región Huánuco, donde los mineros informales vienen alterando el equilibrio ecológico, ya que los residuos químicos como el letal mercurio se vierten a las aguas de estos afluentes.

Sin embargo, los casos que se encuentran en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Leoncio Prado desde el año 2012 han sido aperturados como investigación preventiva, donde se dispuso exhortar y recomendar a los responsables a que no incurran en este hecho delictivo siendo el delito de minería ilegal, teniendo un total de 30 carpetas fiscales que se han aperturado desde el periodo 2012 hasta periodo 2016.

No obstante, a ello existen carpetas fiscales, del cual es materia de la presente investigación, donde se han aperturado casos como investigación preliminar, en los delitos de minería ilegal previsto en el artículo 307-A del Código Penal, donde los responsables de estos hechos ilícitos se han acogido al Principio de Oportunidad, previsto en el inciso 8 del artículo 2 del Código Procesal Penal tal como lo señala literalmente: “el Fiscal podrá abstenerse del ejercicio de la acción penal, luego de la verificación correspondiente, en los casos en que el agente comprendido en la comisión de los delitos previstos en los artículos 307-,A, 307-b, 307-c, 307-d y 307-e del Código Penal, suspenda sus actividades ilícitas de modo voluntario, definitivo e indubitable, comunicando este hecho al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, mediante instrumentos de fecha cierta.

Por lo que existen 12 carpetas fiscales, que son objeto de estudio, donde el sujeto activo asumiendo su responsabilidad se han acogido a este beneficio premial, llegando a un acuerdo con la parte agraviada siendo en este caso el Ministerio del

Ambiente representado por el Procurador Público Especializado en delitos ambientales fijando un monto a la reparación civil, es de acotar que muchas de estos casos, la parte agraviada no ha concurrido a la audiencia de principio de oportunidad a pesar que se ha notificado válidamente, por lo que el Fiscal con la facultad que ejerce podrá determinar el monto de la reparación al daño causado; tal es el caso de las carpetas que serán materia de estudio, y que a continuación se detalla:

N°	Órgano Jurisdiccional	N° de caso
1	Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Leoncio Prado	50-2012-01
2	Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental Leoncio Prado	2006065200-2012-63-0
3	Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental Leoncio Prado	2006065200-2013-21-0
4	Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental Leoncio Prado	2006065200-2013-29-0
5	Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental Leoncio Prado	2006065200-2013-53-0
6	Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental Leoncio Prado	2006065200-2013-135-0
7	Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental Leoncio Prado	2006065200-2013-145-0
8	Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental Leoncio Prado	2006065200-2013-195-0
9	Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental Leoncio Prado	2006065200-2013-211-3
10	Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental Leoncio Prado	2006065200-2013-263-0
11	Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental Leoncio Prado	2006065200-2013-264-0
12	Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental Leoncio Prado	2006065200-2014-62-0

Cuadro N° 1: Fuente; Elaboración Propia.

PASIVO AMBIENTAL MINERO

¿QUÉ ES UN PASIVO AMBIENTAL MINERO?

Aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, abandonadas o inactivas a la fecha de vigencia de la Ley, y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad.

(Art. 2º de la Ley N° 28271 publicada 6 de julio de 2004).

BASE LEGAL QUE REGULA LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS

- a. Ley N° 28271, Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, pub. 14/07/2004. Modificada por la Ley N° 28526, publicada el 25/05/2005 y Decreto Legislativo N° 1042.
- b. Decreto Supremo N° 059-2005-EM, Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, pub. 09/12/2005, modificado por Decreto Supremo N° 003-2009-EM.
- c. Resolución Ministerial N° 290-2006-EM/DM, Inventario Inicial de Pasivos Ambientales Mineros, pub. 19/06/2006, ampliada por Resoluciones Ministeriales N° 487-2007- MEM/DM, N° 079-2008- MEM/DM, N° 164-2008-MEM/DM y N° 591-2008-MEM/DM.
- d. Actualizaciones del Listado de los Pasivos Ambientales Mineros desde el 2010 al 2017 por la Dirección General de Minería – Lima.

ii. COMPARACIÓN ENTRE PASIVO AMBIENTAL MINERO Y PLAN DE CIERRE DE MINAS

Dentro de las normas sectoriales ambientales aplicables a la actividad minera se encuentran: el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM;

NORMAS SOBRE PASIVOS AMBIENTALES Y PLAN DE CIERRE DE MINAS.

- La Ley que Regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, Ley N° 28271;
- La Ley que regula el Cierre de Minas, Ley N° 28090;
- El Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-EM;
- El Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2008-EM;
- Los Términos de Referencia Comunes para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental Detallados y

Semidetallados de las Actividades de Exploración, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero y otros, aprobado por Resolución Ministerial N° 116-2015-MEM/ DM;

- El Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Procedimiento de Aprobación de los Estudios Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N° 028-2008-EM.

1. PASIVO AMBIENTAL MINERO.

Preceptúa la ley en el Artículo 2: *Son considerados pasivos ambientales aquellas instalaciones, "entes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en la actualidad abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad.*

Esta ley se inclina por conceptualizar y enumerar en forma abierta los pasivos ambientales ubicados en las instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en la actualidad abandonadas o inactivas; pero tiene la carencia de no haber legislado en indicar el origen de donde proceden o provienen dichos pasivos, que pueden ser de concesiones mineras vigentes o concesiones mineras extinguidas y que se reduce en el aforismo latino *res clamat domino* (la cosa reclama a su dueño).

El Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, aprobado por Decreto Supremo N° 059-2005-EM, con el objeto de deslindar la ubicación del pasivo, dentro o fuera de una concesión minera vigente al tiempo de entrar en vigor la ley, define a pasivo ambiental minero

abandonado en el sentido que son los pasivos que se encontraban localizados fuera de una concesión amparada a la fecha de entrada en vigencia de la Ley (Artículo 4, párrafo 4.5.). En tanto que, pasivo ambiental minero inactivo, como aquellos pasivos que, a la fecha de vigencia de la Ley, se encontraban localizados en concesión vigente, en áreas, labores o instalaciones que estaban sin operar durante dos años o más (Artículo 4, párrafo 4.6).

2. PLAN DE CIERRE DE MINAS

La Definición del Plan de Cierre de Minas se establece por la LEY QUE REGULA EL CIERRE DE MINAS, LEY N° 28090;

Fue publicada en el diario oficial "El Peruano" el 8 de mayo de 2005, establece la definición legal de Plan de Cierre de Minas como el instrumento de gestión ambiental conformado por acciones técnicas y legales, efectuadas por los titulares mineros, destinado a establecer medidas que se deben adoptar a fin de rehabilitar el área utilizada o perturbada por la actividad minera para que esta alcance características de ecosistema compatible con un ambiente saludable y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación paisajista. Dicha ley, además, establece los objetivos y fines, conceptualiza los pasivos ambientales mineros, refiere sobre la identificación de los pasivos ambientales mineros y determinación de los responsables.

2.2. Base teórica o teoría en la que se sustenta

Habiendo estudiado por separado tanto a la figura del principio de oportunidad como al delito de minería ilegal, corresponde ahora concatenar las ideas obtenidas y analizar la cuestión de fondo de la investigación: ¿resulta apropiado o congruente que frente a la comisión del delito de minería ilegal pueda aplicarse el principio de oportunidad?

Análisis entre el delito de minería ilegal y el principio de oportunidad El principio de oportunidad regulado del CPP peruano de 2004 tiene directa influencia del CPP redactado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Este código introdujo ciertos criterios de oportunidad a manera de excepción pues los sistemas jurídicos del mundo iberoamericano a los que estaba dirigido, por tradición, habían acogido un sistema inquisitivo que entroniza el principio de legalidad.

Entonces, estas excepciones en que consiste el principio de oportunidad estaban pensadas como correctivos del principio opuesto.

De este modo, nuestro sistema jurídico adoptó la figura del principio de oportunidad, al cual desde una perspectiva histórica y teleológica hemos identificado como un acto procesal penal que excluye el proceso a manera de solución alternativa al conflicto, y lo hace en supuestos establecidos taxativamente en la ley bajo criterios puramente materiales de necesidad y merecimiento de pena.

Por otro lado, en el capítulo segundo nos hemos ocupado de revisar la situación de la minería ilegal en el país, escudriñando en los motivos de diversa índole que han llevado al legislador peruano a considerar necesaria su tipificación como conducta delictiva. Como se ha podido apreciar, los impactos que es capaz de producir la minería que opera al margen de la ley sobre el medio ambiente, la salud humana, y otros intereses de la sociedad, tienen en potencia la entidad suficiente para plantearse la necesidad de su represión

por parte del ius puniendi estatal. Desde el plano ambiental, estamos ante un ilícito cuya alta trascendencia y nocividad ha sido reconocida por el mismo Estado, prueba de ello, que se haya regulado mediante el D. Leg. N° 1100 la interdicción de esta actividad. Particularmente preocupante resulta la clara y recurrente vinculación de la minería ilegal con graves ilícitos de criminalidad organizada, tales como el narcotráfico y el lavado de activos.

a. Oportunidad a la minería ilegal

Mediante el D. Leg. N° 1102, publicado en “El Peruano” el 29 de febrero de 2012, se introdujo un supuesto de aplicación del principio de oportunidad en los delitos de minería ilegal, contenido en el numeral 8 del art. 2° CPP. Con ello, se busca optimizar la lucha contra la minería ilegal y el crimen organizado relacionado con la misma, dado que hasta ese momento el tratamiento a los delitos contra el medio ambiente había resultado ineficaz.

Tal como se ha regulado, nos queda claro que dicho criterio de oportunidad obedece a un intento del Ejecutivo por formalizar la actividad minera; el Estado peruano prevé un supuesto de oportunidad “premial” a manera de incentivo para quienes decidan reconducir su actividad por el camino de la legalidad. Así se desprende de la Primera Disposición Complementaria y Final del D. Leg. N° 1102 que prescribe:

Está exento de responsabilidad penal el agente de los delitos señalados en el párrafo anterior que, en un plazo máximo de ciento veinte días calendario computados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, se inserte en programas sostenidos de formalización de minería o de otras actividades económicas alternativas promovidas por la autoridad competente.

PEÑA CABRERA FREYRE; 2000, 28 al opinar que: los criterios de oportunidad deberían aplicarse en los delitos de bagatela,

aquellos cuyo disvalor resulte de significancia menor y por ende de escaso interés social su persecución. Esta característica, señala, suele verse reflejada en los marcos penales impositivos como puede apreciarse en los literales a) y b), inc. 1 del art. 2° CPP, que exigen para aplicar algunos criterios de oportunidad que la pena mínima no supere los dos años de pena privativa de la libertad o, en otro supuesto, que en su extremo máximo no supere los cuatro años de pena privativa de libertad.

Sin embargo, el delito de minería ilegal en su tipo base (art.307°- A CP) está sancionado con una pena no menor de cuatro años de pena privativa de libertad y una máxima de ocho años; mientras que en sus formas agravadas las penas van hasta los diez años de prisión. Más aún, el delito de financiamiento de la minería ilegal (art. 307°-C CP) contempla una pena mínima de cuatro y máxima de doce años de prisión. Por ello, el autor concluyó que “se estaría promoviendo la aplicación de los criterios de oportunidad a delitos de meridiania gravedad, donde el contenido del injusto tiene un alto grado de disvalor, por lo que se estaría trastocando el uso de este mecanismo de justicia penal consensuada, para casos que no lo merecen”.

Podemos traer a colación lo opinado por la profesora HERRERA GUERRERO: “si consideramos los delitos leves, el acuerdo entre la víctima y el autor puede satisfacer los fines de la pena o, por lo menos, no perjudicarla significativamente. Pero si se trata de delitos graves, la negociación en el proceso penal no realiza de modo suficiente las exigencias de la prevención general”. Consideramos que esta afirmación aplica con independencia de la concepción de función de la pena que uno conciba, y suscribimos plenamente el fondo de la idea.

A nuestro modo de ver, PEÑA CABRERA FREYRE hace una crítica legítima pues, tal como lo hemos sostenido, el delito de minería ilegal es un delito pluriofensivo dado que su comisión

afecta potencialmente a más de un bien jurídico a la vez, entre los que hemos señalado al medio ambiente y la salud, así como por conexión suele además atentar contra la libertad personal y el orden socioeconómico del Estado.

También encontramos criticable (aunque esto tiene que ver con la falta de proporcionalidad en la determinación del margen de penas abstractas para los distintos tipos penales) que respecto de algunos ilícitos como, por ejemplo, el delito contra los bosques o formaciones boscosas del art. 310°CP no pueda recurrirse al principio de oportunidad por no cumplir con el límite objetivo previsto por el art. 2° (ya sea por falta de necesidad de pena del - inc. 1- o por falta de merecimiento de pena –inc. 2), mientras que frente al delito de minería ilegal sí es permitido por una causal específica.

A criterio nuestro, dado su carácter pluriofensivo, el disvalor de acción del delito de minería ilegal es necesariamente mayor, e incluso en ocasiones (vg. minería aurífera aluvial) suele concurrir con –o más bien, comprender- la tala y deforestación de bosques, resultando incongruente que el autor del ilícito más reprochable cuente con una salida alternativa que no le es permitida al que comete el otro.

Ahora bien, estas consideraciones hechas desde un plano de generalidad y abstracción tienen que ser relativizadas, puesto que entendemos que el Derecho debe atender siempre al caso concreto en la medida que no todos los supuestos son iguales. Por ende, no podemos, sin más, concluir que el principio de oportunidad no debería aplicarse a ningún caso de minería ilegal.

b. Discrecionalidad y Arbitrariedad

Es precisamente debido a lo vasta y diversa que puede ser la realidad que, en nuestra opinión, el legislador ha creído conveniente atribuir una potestad de naturaleza discrecional al Fiscal, para decidir la abstención o persecución del delito de

minería ilegal. A pesar de que se trata de una potestad discrecional reglada (es decir, que la misma norma que la otorga impone ciertos límites a su aplicación), en la medida que no está sujeta a control jurisdiccional alguno, creemos que resulta necesario analizar los criterios que permitan su ejercicio razonable, puesto que discrecionalidad no debe ser sinónimo de arbitrariedad.

El tema de la discrecionalidad y la arbitrariedad se ha desarrollado con mayor profundidad en el Derecho administrativo, donde la atribución de este tipo de potestades (a la Administración Pública, en este caso) es más común. Sin embargo, creemos que hay elementos sustanciales a los que podemos recurrir para nuestro análisis. Sobre el tema, el TC peruano ha señalado en su sentencia del 5 de julio de 2004, recaída en el Exp. N° 009-2004-AC/TC que: (...) el ejercicio de una potestad discrecional debe acompañarse de una motivación que muestre puntualmente el nexo coherente entre el medio adoptado y el interés general circunscrito al que apunta (...) Es así que el interés público, como concepto indeterminado, se construye sobre la base de la motivación de las decisiones, como requisito sine qua non de la potestad discrecional de la Administración, quedando excluida toda posibilidad de arbitrariedad.

En dicha sentencia, se define a la arbitrariedad como “lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo”. Por lo tanto, el ejercicio de una potestad discrecional debe ser debidamente motivado; es decir, la decisión se ha de basar en razones que se adecuen a la realidad, y no a la mera voluntad de quien emite la decisión. Asimismo, entre dichas razones y la decisión debe existir coherencia lógica.

Volviendo a los límites preestablecidos por la norma (art. 2°, inc.

8 CPP), ésta impone al Fiscal que tras la verificación correspondiente: a) se hayan suspendido las actividades ilícitas de modo voluntario, definitivo e indubitable, y b) que este hecho se comunique al OEFA mediante instrumento de fecha cierta. Desde nuestro punto de vista, pese a esta reducción del ámbito de discrecionalidad que hace la norma, sigue habiendo un margen considerable de actuación para el Fiscal el cual, frente al inexistente control jurisdiccional, debe encontrar límites necesarios en la motivación y razonabilidad de la decisión.

c. Disvalor de acción y disvalor de resultado

Desarrollando lo anterior, para que el Fiscal ejercite adecuadamente su potestad discrecional reglada frente a determinado supuesto, tendría que previamente realizar una evaluación basada en la realidad de los hechos, que le lleve a concluir de forma razonable que puede dejar de ejercitar la acción penal en dicho caso, para no caer en arbitrariedad. Afirma ZIELINSKI que “el derecho está lesionado por el menosprecio de la prohibición, no por la –casual- producción del resultado”. Nos queda claro que, en el delito de minería ilegal, por los motivos ampliamente expuestos a lo largo de este trabajo –y principalmente por su pluriofensividad-, la acción o conducta es disvaliosa y por tanto no es un criterio que nos permita discernir sobre cuándo corresponde o no aplicar el principio de oportunidad. Sin embargo, sí podemos hacer una graduación en cuanto al disvalor del resultado de la conducta. El autor alemán lo pone de manifiesto cuando dice que:

Todo delito manifiesta la negación de la validez de la norma infringida. Pero la pretensión de validez de la norma está afectada y en general puesta en peligro tanto más fuertemente, cuanto más abiertamente pueda consolidarse el delito, es decir, cuantos más miembros de la comunidad jurídica se enteren de él, sin que el orden jurídico se defienda -mediante la pena.

En otras palabras, la producción de un resultado hace

especialmente visible al ilícito, y repercute con mayor intensidad sobre la comunidad jurídica comunicándole la afectación a la confianza puesta en el orden jurídico, y, por lo tanto, el resultado es un criterio de necesidad concreta de pena.

2.2. Definiciones conceptuales

- **FPEMA:** Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental, enfocado al problema de investigación, siendo que esta Fiscalía Especializada se creó el 01 de junio de 2012 con la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal y es donde la investigadora dará a conocer y explicar el problema de investigación.
- **Leoncio Prado:** Viene hacer el lugar de estudio de la presente investigación.
- **Delito:** Sanción a imponer a quién infringe la ley.
- **Concesión Minera:** título que le otorga al concesionario para que pueda ejercer el derecho a la exploración y explotación de los recursos minerales concedidos.
- **OEFA:** Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental que verifica su ejercicio por las entidades de Fiscalización Ambiental e impulsa la elaboración de los Planes Anuales de Evaluación y Fiscalización Ambiental y fiscaliza las actividades de la mediana y gran minería.
- **DREMH:** Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos se encarga de realizar la aprobación de los planes y la determinación de las acciones realizadas con la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.
- **INTERDICCIÓN MINERA:** Se refiere a acciones destinadas a suprimir, prohibir o vetar de manera inmediata la actividad minera ilegal, que incluyen el decomiso de los bienes, maquinarias, equipos e insumos prohibidos, así como la destrucción o demolición de maquinarias.

CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1. Método y nivel de la investigación

Método de la investigación. El método utilizado en la presente investigación fueron el cualitativo-cuantitativo (mixto), los métodos generales de la investigación tales como la observación, el análisis, la síntesis, la inducción y la deducción, empero por ser una investigación jurídico social se emplearon los métodos propios del derecho como el método dogmático y el método interpretativo.

Nivel de investigación es descriptivo - explicativo ya que tiene por objeto determinar una causalidad de las variables de estudio.

3.2. Sistema de hipótesis, variables y esquema de diseño

3.2.1. Hipótesis General.

Es deficiente la aplicación del Principio de Oportunidad debido a una limitada fiscalización por parte de los operadores de los organismos competentes y por los escasos recursos logísticos para un mejor tratamiento en los delitos de minería ilegal, en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012 – 2016.

3.2.2. Hipótesis Específico.

- A.** Es deficiente el tratamiento que se viene dando con la aplicación del Principio de Oportunidad para los delitos de minería ilegal, en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012 – 2016.
- B.** Es bajo en nivel de efectividad que se tiene con la aplicación del Principio de Oportunidad debido a que no se cumple de manera objetiva con los presupuestos establecidos para la aplicación en su otorgamiento para los delitos de minería ilegal, en Fiscalía

Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012 – 2016.

- C.** Si se modifica el 3° párrafo del artículo 307° - A del Código Penal en cuanto al extremo de considerar como conducta dolosa, entonces se reducirá significativamente la incidencia de los delitos de minería ilegal, en Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012 – 2016.
- D.** Si se implementa como norma el cierre de minas y cierre de pasivos ambientales habrá responsabilidad para el resarcimiento físico en los delitos de minería ilegal en Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012 – 2016.

i. Sistema de variables.

1. Variable independiente: El principio de oportunidad

2. Variables dependientes: El delito de minería ilegal.

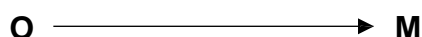
Operacionalización de variables

Variables	Dimensiones	Indicadores
Vx. El principio de oportunidad.	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de necesidad de la pena. - Falta de merecimiento de la pena. - Mínima culpabilidad del agente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Factores que inciden en la aplicación del principio de oportunidad para estos delitos. - El tratamiento que se viene dando con la aplicación del principio de oportunidad. - Nivel de efectividad que tiene el principio de oportunidad. - El estudio de carpetas fiscales con relación a la aplicación del principio de oportunidad en los delitos de minería ilegal. -
Vy. La minería ilegal	<ul style="list-style-type: none"> - Minería ilegal - Minería informal 	<ul style="list-style-type: none"> - Factores que inciden para la comisión de delito de minería ilegal. - Si cuenta con certificación de inicio y reinicio de operaciones mineras. - Firma de declaración de compromiso. - Acceso a título de concesión. - Acuerdo previo con la comunidad. - Fundamentos fácticos normativos para reducir la incidencia de minería ilegal. - Presupuestos que eximen de responsabilidad penal. Acciones que se realizan sobre el cierre de minas y/o pasivos ambientales. - Tipificación del artículo 207-A del Código Penal que lo reconduzca hacia su adecuada regulación.

Diseño

El diseño que tendrá el presente proyecto será el diseño no experimental – longitudinal simple; porque los datos objetos de investigación se han obtenido por un periodo 2012-2016. ROMERO DELGADO, Hugo Eusebio y otros: “Metodología de la Investigación Jurídica” Editorial Grijley, 2016.

Diseño Descriptivo Simple:



Donde:

M = Muestra

O = Información

3.3. Técnicas e instrumentos.

Al respecto, se distinguen dos clases de recopilación de datos: una está dada por la recopilación de datos previos; la otra, por la recopilación de datos investigatorios. En la primera, se obtuvo una visión global del fenómeno que vamos a estudiar y en la segunda se detectó los aspectos directamente relacionados con el tema que sirvió para probar o disponer en la hipótesis de trabajo.

Técnicas	Instrumentos
Fichaje	Fichas de resúmenes, textuales, bibliográficas las misma que permitirán el recojo de información para el marco teórico
Análisis de contenidos	Ficha de análisis a las carpetas fiscales en materia el delito de minería ilegal que obra en la FPEMA de la provincia de Leoncio Prado.
Entrevista	Ficha de entrevista a Fiscales y Jueces penales.

Técnica para el procesamiento y análisis de la información.

Para el procesamiento se procedió inicialmente a tabular en un cuadro los datos obtenidos por nuestros instrumentos, luego se plasmó en cuadros de distribución estadística y los gráficos estadísticos simples, la misma que constituirá base para contrastar la hipótesis planteada.

El presente proyecto, por tratarse de una investigación de tipo básico, basado en entrevista y análisis de contenidos. Los actos estuvieron procesados mediante el análisis cuantitativo y cualitativo de los casos recopilados tanto de las entrevistas, así como análisis documental las carpetas fiscales que obran en la FPEMA de la provincia de Leoncio Prado durante el periodo 2012 al 2016.

El análisis de datos para comprobar nuestra hipótesis se procedió de dos formas: Una de manera estadística; y otra de manera cualitativa, es decir haciendo una comprensión y análisis a partir de nuestro marco teórico; así mismo expresó los resultados en las tablas y esquemas.

En la investigación se recurrió al análisis documentario de carpetas fiscales concerniente a delitos contra los recursos naturales en su modalidad de delitos de minería ilegal previsto en el artículo 307-A del Código Penal y que se han sometido al Principio de Oportunidad llegando a establecer a un acuerdo preparatorio, con la anterior modificación según Decreto Legislativo 1102 (29/02/12).

Para la presentación de los datos se utilizó las tablas y gráficos estadísticos utilizando la frecuencia simple y el porcentaje de promedio, además también se utilizó el POWER POINT, que permitió combinar tablas y datos estadísticos, para revelar mejor la problemática.

3.4. Cobertura de la investigación.

Población: La población estuvo constituida, como sujetos de estudio, por todos los expertos en materia de delitos de minería ilegal de la provincia de Leoncio Prado siendo estos aproximadamente 78 expertos entre magistrados, abogados y operados de la FPEMA, asimismo como objetos de análisis lo constituirán 40 carpetas fiscales en delitos de minería ilegal

que obran en la FPEMA de la provincia de Leoncio Prado entre los años 2012 al 2016.

Cuadro de la población de estudio

Unidades de estudio		Total
Experto en materia de delitos de minería ilegal (entre magistrados, abogados y operados de la FPEMA)	78 Sujetos de estudio	118 Unidades de análisis
Carpeta fiscal en el delito de minería ilegal que obra en la FPEMA de la provincia de Leoncio Prado	40 Objetos de análisis	

Fuente: Observación directa de la investigadora

Elaboración: La investigadora. Agosto del 2017.

Muestra: La muestra de estudio es de tipo No Probabilística en su variante intencional, es decir, se seleccionó a criterio de la investigadora los mismos que estuvieron constituidas por 12 carpetas fiscales en delitos de minería ilegal que obran en la FPEMA de la provincia de Leoncio Prado entre los años 2012 al 2017. Así como también 10 expertos en materia de delitos de minería ilegal (entre magistrados, abogados y operados de la FPEMA).

Cuadro de la muestra de estudio

Unidades de estudio		Total
Experto en materia de delitos de minería ilegal (entre magistrados, abogados y operados de la FPEMA)	10 Sujetos de estudio	22 Unidades de análisis
Carpeta fiscal en el delito de minería ilegal que obra en la FPEMA de la provincia de Leoncio Prado	12 Objetos de análisis	

Fuente: Observación directa de la investigadora

Elaboración: La investigadora. Agosto del 2017.

CAPITULO IV RESULTADOS

4.1. Presentación de resultados

Cuadro N° 01

Muestra las opiniones que expresan los expertos en materia penal respecto a la efectividad del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal, en la FPEMA-LP, 2012-2017.

A la Pregunta	Repuestas de los expertos	
N° 01 A su experiencia ¿Cuál es la efectividad que tiene la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal en la FPEMA-LP, 2012-2017?	1. Fiscal provincial de la FPEMA-Huánuco	Como mecanismo de conclusión de investigación e investigaciones preparatorias, es viable puesto que cumple los objetivos del cese de actividades definitivas por parte de los trasgresores, ello en tutela de medio ambiente.
	2. Fiscal provincial de la FPEMA-LP	El principio de oportunidad tiene plena efectividad, en cuanto al cumplimiento del acuerdo entre las partes con la participación del Ministerio Público, sin embargo, a la concientización e internalización del infractor no se tiene respuesta positiva.
	3. Fiscal adjunto provincial.	La efectividad del principio de oportunidad en el proceso penal es óptima en el sentido que las actividades de minería metálica y no metálica se suspenden en la zona intervenida sin embargo la pequeña minería ejercen nuevamente sus actividades en otra zona y en algunos casos se formalizan.
	4. Juez del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	Es bajo el nivel de efectividad que se viene aplicando a nivel judicial en este distrito judicial de Huánuco, ya que no se viene aplicando a nivel judicial el principio de oportunidad para estos delitos porque consideran que debe con sanciones más drásticas.
	5. Asistente en función fiscal.	Reducir la carga procesal a delitos que son considerados de bagatela o de poca importancia, siendo los delitos de minería ilegal.
	6. Especialista del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	A nivel judicial no se viene aplicando el principio de oportunidad en los delitos de minería ilegal en el distrito judicial de Huánuco.
	7. Especialista del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	Sirve para simplificar el proceso, disminuir la carga procesal, teniendo en cuenta los principios de celeridad y economía procesal.
	8. Asistente en función fiscal FPEMA-LP.	Que ha superado el récord de la carga fiscal, pero en cuanto al daño al medio ambiente generado es deficiente.
	9. Ingeniero Ambiental de minería-LP.	Si se analiza desde el punto de vista de la protección del medio ambiente que es el objetivo, la efectividad es nula porque no se está devolviendo al área afectada a las condiciones normales del ambiente de las zonas intervenidas solo se le libera de la responsabilidad con un pago simbólico.
	10. Asistente en función fiscal FPEMA-LP.	No tiene efectividad puesto que no existe la presencia de la parte agraviada siendo el procurador del Ministerio del Ambiente, por ello solo los acusados lo hacen en presencia del Ministerio Público.

Fuente: Ficha de entrevista Anexo 02
Elaboración: La investigadora julio 2017

Análisis e interpretación

El cuadro N° 01 encontramos las respuestas de los expertos en cuanto a la pregunta ¿Cuál es la efectividad que tiene la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal en la FPEMA-LP, 2012-2017? Los expertos respondieron. El Fiscal Provincial de la FEMA-Huánuco manifestó: Como mecanismo de conclusión de investigación e investigaciones preparatorias, es viable puesto que cumple los objetivos del cese de actividades definitivas por parte de los trasgresores, ello en tutela de medio ambiente. Asimismo, el Fiscal Provincial de la FEMA de Cerro de Pasco señaló: El principio de oportunidad tiene plena efectividad, en cuanto al cumplimiento del acuerdo entre las partes con la participación del Ministerio Público, sin embargo, a la concientización e internalización del infractor no se tiene respuesta positiva. Del mismo modo la Fiscal Adjunta refirió que La efectividad del principio de oportunidad en el proceso penal es óptima en el sentido que las actividades de minería metálica y no metálica se suspenden en la zona intervenida; sin embargo, las pequeñas minerías ejercen nuevamente sus actividades en otra zona y en algunos casos se formalizan. Por otro lado, el Juez del juzgado de investigación preparatoria, así como los especialistas del Juzgado de Investigación Preparatorias expresan que es bajo el nivel de efectividad que se viene aplicando a nivel judicial en este distrito judicial de Huánuco, ya que no se viene aplicando a nivel judicial el principio de oportunidad para estos delitos porque consideran que debe imponer sanciones más drásticas. Sin embargo, los Asistentes en función fiscal de la FEMA manifiestan que se ha superado el récord de la carga fiscal, pero en cuanto al daño al medio ambiente generado es deficiente porque permite reducir la carga procesal a delitos que son considerados de bagatela o de poca importancia, siendo los delitos de minería ilegal y por último el ingeniero ambiental de la DREM- HCO, expresó que: si se analiza desde el punto de vista de la protección del medio ambiental que es el objetivo, la efectividad es nula porque no se está devolviendo al área afectada a las condiciones normales del ambiente de las zonas intervenidas solo se le libera de la responsabilidad con un pago simbólico. De lo expresado podemos concluir que: No es efectivo la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal ya que contraviene a la norma, toda vez que, la aplicación de este principio sólo es para los delitos con escala relevancia social.

Cuadro N° 02

Muestra las opiniones que expresan los expertos en materia penal respecto a la efectividad del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal, en la FPEMA-LP, 2012-2017.

A la Pregunta	Repuestas de los expertos	
N° 02 A su experiencia ¿Cuál es el tratamiento que se viene dando con la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal, en la FPEMA-LP, 2012-2017?	1. Fiscal provincial de la FEMA-Huánuco	Una vez concluido el trámite del principio del principio de oportunidad vía abstención, la fiscalía y el seguimiento del cese definitivo del cese de actividades, le es inherente a los entes administrativos, en el ámbito de su jurisdicción y a los DREMS en el ámbito de la competencia.
	2. Fiscal provincial	Se está aplicando en la medida del conocimiento que posee el infractor a requerimiento del Ministerio Público como también del conocimiento del asesor legal.
	3. Fiscal adjunto provincial.	El tratamiento que se da es a la existencia de una intervención a las minas ilegales, procede a proponer el principio de oportunidad a su favor llegando a un acuerdo de la reparación civil y el resarcimiento del daño ocasionado, en un plazo mínimo a favor del Estado.
	4. Juez del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	El tratamiento que está dado es a nivel fiscal ya que el RMB debe aplicar el art 2 del CPP y realizar una buena fiscalización ya que es el órgano receptor del delito.
	5. Asistente en función fiscal.	Solo existen casos donde el infractor no cuenta con documentos legales como concesión minera, declaración de compromisos y al encontrarse con los hechos culposos exigiendo una sanción carcelaria y un pago de multa pecuniaria; pero ello, no soluciona de ningún modo la contaminación ambiental generado por los infractores.
	6. Especialista del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	Es a nivel fiscal quien está realizando la aplicación del principio de oportunidad en los delitos de minería ilegal.
	7. Especialista del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	En la actualidad no se está aplicando el principio de oportunidad a nivel judicial, toda vez que se está realizando a nivel preliminar llevándose a cabo a nivel fiscal, con la presencia del RMB.
	8. Asistente en función fiscal FPEMA-LP.	Deficiente
	9. Ingeniero Ambiental de minería-LP.	Se evalúa con antecedente visuales y declaratoria de los intervenidos y se aplica la pena o sanción y luego se establece un pago el cual una vez efectuado son liberados de la responsabilidad fiscal de reestablecer el área afectada en su estado original.
	10. Asistente en función fiscal FPEMA-LP.	Inadecuado

Fuente: Ficha de entrevista Anexo 02
 Elaboración: La investigadora julio 2017

Análisis e interpretación

En relación a la pregunta ¿Cuál es el tratamiento que se viene dando con la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal, en la FPEMA-LP, 2012-2017? El Fiscal Provincial de la FEMA señaló: Una vez concluido el trámite del principio de oportunidad vía abstención, la fiscalía realiza el seguimiento del cese definitivo de actividades, lo cual, es inherente a los entes administrativos, en el ámbito de su jurisdicción y a los DREMS en el ámbito de la competencia; asimismo, el Fiscal Provincial y la Fiscal Adjunta de Cerro de Pasco manifestaron que se está aplicando en la medida del conocimiento que posee el infractor a requerimiento del Ministerio Público como también del conocimiento del asesor legal y el tratamiento que se da es la existencia de una intervención a las minas ilegales, procediendo a proponer el principio de oportunidad a su favor llegando a un acuerdo de la reparación civil y el resarcimiento del daño ocasionado, en un plazo mínimo a favor del Estado; de igual manera, el Juez de Investigación Preparatoria así como los especialistas señalaron que el tratamiento que está dando parte de la responsabilidad del fiscal ya que es quién tiene el ejercicio de la acción penal y más aún que debe aplicar el principio de legalidad establecido en la norma como lo señala el art 2 del CPP ya que en la actualidad no se está aplicando el principio de oportunidad a nivel judicial. Por otro lado, los asistentes en función fiscal señalan que es deficiente e inadecuado ya que sólo existen casos donde el infractor no cuenta con documentos legales como concesión minera, declaración de compromisos y al encontrarse con los hechos culposos se someten al principio de oportunidad pagando una multa pecuniaria; pero ello, no es la solución a la contaminación ambiental generado por los infractores y al finalizar el ingeniero de la DREM-HCO evalúa con antecedente visuales y declaratoria de los intervenidos, los infractores se acogen a un beneficio premial como es el principio de oportunidad, pagando una reparación civil por el daño causado, no habiendo una sanción más drásticas que es llegar a una pena efectiva por el daño generado al medio ambiente, por el contrario, son liberados de la responsabilidad penal de reestablecer el área afectada en su estado original.

De lo expresado podemos concluir que: El responsable de aplicar la sanción penal no está dando un tratamiento adecuado en torno a la minería ilegal, sólo se sujeta a la norma penal; sin embargo, aquí el responsable para que no se aplique el Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal es el propio Estado quién es la parte agraviada a través de los Procuradores Públicos Especializado en Materia Ambiental, quién tiene el deber y la obligación de constituirse en la parte civil, ya que en la actualidad, al momento de solicitar su presencia en las diligencias no concurren, ni muchos menos participan en las diligencias; a pesar que son notificados a su domicilio laboral; por lo que, esto conlleva a que el Fiscal tome la decisión de asumir dicha función.

Cuadro N° 03

Muestra las opiniones que expresan los expertos en materia penal respecto a la efectividad del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal, en la FPEMA-LP, 2012-2017.

A la Pregunta	Repuestas de los expertos	
N° 03 A su consideración ¿Cuál es el nivel de efectividad que tiene la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal, en la FPEMA-LP, 2012-2017?	1. Fiscal provincial de la FEMA-Huánuco	El nivel de efectividad es medio a razón de que, si bien se cumple con la verificación del cese de actividades mineras, resulta contraproducente en el resarcimiento y el monitoreo de la reparación civil.
	2. Fiscal provincial	La efectividad está relacionada sobre todo a la solución que requiere el infractor sin embargo en cuestiones ambientales ninguna.
	3. Fiscal adjunto provincial.	El nivel de efectividad es medio de 10 unas 8 se acogen al principio de oportunidad.
	4. Juez del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	Es bajo porque a nivel judicial ya que no está permitido que los sujetos lleguen a un principio de oportunidad a estos delitos.
	5. Asistente en función fiscal.	Es reducir la carga procesal que existe en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, sin embargo, no existe efectividad en cuanto a la solución al daño ambiental que ayuden a crear nuevos pasivos ambientales.
	6. Especialista del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	Es bajo, porque no existe caso a juicio oral en los delitos de minería ilegal.
	7. Especialista del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	El nivel de efectividad es bajo en los delitos de minería ilegal en la aplicación del principio de oportunidad.
	8. Asistente en función fiscal FPEMA-LP.	Desde el periodo 2012 hasta la actualidad en estos delitos casi todos se han sometido al Principio de Oportunidad pagando una suma irrisoria por la afectación al daño generados; sin embargo, hasta ahora hay casos que existen en investigación preventiva, del cual no incurrir en responsabilidad al daño generado.
	9. Ingeniero Ambiental de minería-LP.	Ninguna.
	10. Asistente en función fiscal FPEMA-LP.	Deficiente

Fuente: Ficha de entrevista Anexo 02
 Elaboración: La investigadora julio 2017

Análisis e interpretación

Con respecto a la pregunta: ¿Cuáles es el nivel de efectividad que tiene la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal, en la FPMA-LP, 2012-2017? Los expertos indicaron lo siguiente: El Fiscal Provincial de la FPMA mencionó que el nivel de efectividad es medio a razón de que, si bien se cumple con la verificación del cese de actividades mineras, resulta contraproducente en el resarcimiento y el monitoreo de la reparación civil; asimismo, el Fiscal Provincial de Cerro de Pasco señaló que la efectividad está relacionada sobre todo a la solución que requiere el infractor; sin embargo, en cuestiones ambientales ninguna, así como también la Fiscal Adjunta de ese despacho fiscal señaló que de 10 carpetas fiscales, 8 se acogieron al principio de oportunidad; desde otra perspectiva el juez de investigación preparatoria como los especialistas dijeron que es bajo porque a nivel judicial ya no se está permitiendo que los sujetos procesales lleguen a un principio de oportunidad en los delitos de minería ilegal; así como también recalcaron los asistentes en función fiscal que no existe efectividad en cuanto a la solución al daño ambiental, manifestaron que desde el periodo 2012 hasta la actualidad en estos delitos casi todos se han sometido al Principio de Oportunidad pagando una suma irrisoria por la afectación al daño generado; sin embargo, hasta ahora hay casos que existen en investigación preventiva, del cual no hay ninguna responsabilidad al daño generado y por su parte el Ingeniero señaló ninguna.

De lo que se concluye que no están de acuerdo con el nivel de efectividad que tiene la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal, toda vez que, el daño generado al medio ambiente aún persiste, y no se hace nada al respecto en cuanto al resarcimiento de ello, generando contaminación y destrucción a nuestro ecosistema.

Cuadro N° 04

Muestra las opiniones que expresan los expertos en materia penal respecto a la efectividad del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal, en la FPEMA-LP, 2012-2017.

A la Pregunta	Repuestas de los expertos	
N° 04 A su opinión ¿Cuáles son los fundamentos fácticos-normativos que se deben proponer para reducir la incidencia en los delitos de minería ilegal, en la FPEMA-LP, 2012-2017?	1. Fiscal provincial de la FEMA-Huánuco	Que se cumplan a cabalidad en el marco normativo pre existente, con la actividad y participación de la procuraduría pública en materia ambiental de modo descentralizado.
	2. Fiscal provincial	Una buena fiscalización y control por parte de los operadores responsables en los delitos ambientales, quienes deben ejercer su función con cabalidad.
	3. Fiscal adjunto provincial.	En primer lugar, para reducir la incidencia de minería ilegal deben actuar efectivamente los entes administrativos del sector minería, tanto en las fiscalizaciones mineras como la orientación y acercamiento a la población, en segundo lugar, como fundamento fáctico jurídico debe distinguirse las penas para la actividad minera metálica y no metálica ya que su obtención del mineral, producción es diferente para cada una.
	4. Juez del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	No se debe dar facilidades o beneficios a las mineras ilegales a personas que cometan estos hechos delictivos, siendo el principio de oportunidad e incluso cuando son encontrados en flagrancia delictiva.
	5. Asistente en función fiscal.	Los fundamentos técnicos legales son correctos pero la falta de conocimiento por las autoridades involucradas de no ejercer adecuadamente sus funciones, caen el facilismo, dando penas salomónicas con montos irrisorios al culpable de los compromisos de resarcir el daño al ambiente, generando un listado enorme de pasivos ambientales sin solución para el Estado Peruano.
	6. Especialista del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	Se debe tener en cuenta el grado de participación, responsabilidad a las personas que consienten estos hechos delictivos y hacen una diferenciación en mineras ilegales, informales, pequeñas mineras y mineras artesanales, porque no todos responden a la misma teniendo en cuenta a la imputación objetiva.
	7. Especialista del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	Se cumple con lo establecido en la norma ya que se está aplicando y a la vez tienen esos beneficios las personas tanto las personas naturales y jurídicas para someterse al principio de oportunidad.
	8. Asistente en función fiscal FPEMA-LP.	Los fundamentos técnicos legales son concretos, pero desde el punto de vista del CP estipulado en el art. 307-A no existe una correcta aplicación toda vez que existe falencia en la norma trayendo consigo son los fiscales que interpretan cuanto a los hechos que traen consigo.
	9. Ingeniero Ambiental de minería-LP.	Reestablecer el principio de oportunidad sobre el recurso metálico y no metálico de las concesiones que se han visto vulneradas en el art 3° del DL N°1100. Penalización efectiva a extractores ilícitos sean estos formales, informales, legales.
	10. Asistente en función fiscal FPEMA-LP.	La norma está bien dada solo está en las en las autoridades que no aplican correctamente por desconocimiento y preparación.

Fuente: Ficha de entrevista Anexo 02
 Elaboración: La investigadora julio 2017

Análisis e interpretación

Referente a la pregunta: ¿Cuáles son los fundamentos fácticos-normativos que se deben proponer para reducir la incidencia en los delitos de minería ilegal, en la FPMA-LP, 2012-2017? El Fiscal Provincial de la FMA dijo que se deberían cumplir a cabalidad en el marco normativo pre existente, con la actividad y participación de la procuraduría pública en materia ambiental de modo descentralizado, de igual manera el Fiscal Provincial de Cerro de Pasco señaló que deber haber una buena fiscalización y control por parte de los operadores responsables en los delitos ambientales, quienes deben ejercer su función con cabalidad, del mismo modo recalcó la Fiscal Adjunta de ese distrito fiscal en primer lugar, para reducir la incidencia de minería ilegal deben actuar efectivamente los entes administrativos del sector minería, tanto en las fiscalizaciones mineras como la orientación y acercamiento a la población, en segundo lugar, como fundamento fáctico jurídico debe distinguirse las penas para la actividad minera metálica y no metálica ya que su obtención del mineral, producción es diferente para cada una. Desde otro ángulo el Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco mencionó que no se debe dar facilidades o beneficios a las mineras ilegales a personas que cometan estos hechos delictivos, siendo el principio de oportunidad e incluso cuando son encontrados en flagrancia delictiva; asimismo, los especialistas sostuvieron que se debe tener en cuenta el grado de participación, responsabilidad a las personas que consienten estos hechos delictivos y hacen una diferenciación en mineras ilegales, informales, pequeñas mineras y mineras artesanales, porque no todos responden a la misma teniendo en cuenta a la imputación objetiva y se cumple con lo establecido en la norma ya que se está aplicando y a la vez tienen esos beneficios las personas tanto las personas naturales y jurídicas para someterse al principio de oportunidad. En cuanto a los asistentes en función fiscal denotaron los fundamentos técnicos legales son concretos, pero desde el punto de vista del CP estipulado en el art. 307-A no existe una correcta aplicación toda vez que existe falencia en la norma trayendo consigo son los fiscales que interpretan erróneamente la norma, en cuanto a los hechos que traen consigo y que la norma está bien dada solo está en las autoridades que no aplican correctamente por desconocimiento y preparación; en contraste, con la opinión del ingeniero ambiental que remarcó reestablecer el principio de oportunidad sobre el recurso metálico y no metálico de las concesiones que se han visto vulneradas en el art 3° del DL N°1100. Penalización efectiva a extractores ilícitos sean estos formales, informales, legales.

De lo que se concluye que no hay una buena fiscalización por parte de los entes encargados de asumir con responsabilidad sus funciones ello obedece que el Estado debe capacitar y prepararlos a aquellos entes que estén dispuestos de ponerse la camiseta y combatir dicha criminalidad, que hoy en día somos testigos de la destrucción progresiva que existe en nuestra Amazonía y del cual somos amenazados; sin embargo, el Estado le resta importancia y no se preocupa que son de interés público; por lo que, las autoridades manifiestan que el poder ejecutivo debe proponer normas radicales para reducir la incidencia en los delitos de minería ilegal y no aceptar a que los infractos de estos hechos delictivos se acojan a este beneficio premial.

Cuadro N° 05

Muestra las opiniones que expresan los expertos en materia penal respecto a la efectividad del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal, en la FPEMA-LP, 2012-2017.

A la Pregunta	Repuestas de los expertos	
N° 05 A su consideración ¿Cuáles son los factores que inciden en la comisión del delito de minería ilegal previsto en el artículo 307°-A del Código Penal?	1. Fiscal provincial de la FEMA-Huánuco	En esencia considero que el factor que incide versa en la inoperatividad funcional de los entes fiscalizadores puesto que no están cumpliendo sus funciones a cabalidad.
	2. Fiscal provincial	Las normas administrativas no son del todo claras o explícitas.
	3. Fiscal adjunto provincial.	Uno de los factores es el desempleo imperante en la sociedad y en consecuencia el aprovechamiento de empresas mineras en la compra del mineral extraído por las mineras ilegales a bajo precio.
	4. Juez del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	Desconocimiento de las normas ambientales, escasos recursos logísticos tanto a nivel policial y fiscal en cuanto a las interdicciones mineras y es el Estado que debe operar y debe hacer una sensibilización atendiendo a las necesidades y el desconocimiento de las personas que realizan estas actividades mineras.
	5. Asistente en función fiscal.	Los casos que existen en la FPEMA – LP, nos señalan que el factor más relevante es la falta de aceleración en los documentos de los concesionarios para no infringir la Ley esto representa el 66%, el resto depende de los funcionarios públicos y de la fiscalía en su mejor aplicación.
	6. Especialista del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	La falta de oportunidades de trabajo y medio de vida ya que los habitantes de una comunidad llegan a ser explotados por los mineros, la inexistencia del Estado frente al ordenamiento territorial que añade una formalización minera, determinando si esas zonas son o no para la explotación del recurso.
	7. Especialista del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	Parte del órgano estatal conformado por el RMP siendo el responsable de la persecución del delito y más aun teniendo en cuenta que el agraviado en estos delitos es el procurador del Ministerio del Ambiente, quien debe constituir en actor civil.
	8. Asistente en función fiscal FPEMA-LP.	Los factores que inciden es la deficiente aplicación que tienen los operadores responsables en la investigación del delito toda vez que realizan una investigación preventiva, exhortando y previniendo a los responsables del delito.
	9. Ingeniero Ambiental de minería-LP.	Se aprecia que los mineros que quieren ejercer la minería en la Región Huánuco se ven frustrados por la lentitud de los trámites burocráticos y ve una manera más rápida a acogerse al trámite de una minería informal y en muchos otros caos son personas que desconocen según ellos las normas y extraen los recursos sin permiso alguno solo por ser propietarios o no del suelo.
	10. Asistente en función fiscal FPEMA-LP.	Una buena praxis en la aplicación de estos delitos y que vayan acorde con la realidad de los hechos y la falta de concientización a la población para que no incurran en el facilismo y explotación.

Fuente: Ficha de entrevista Anexo 02
 Elaboración: La investigadora julio 2017

Análisis e interpretación

Atinente a la pregunta 5 A su consideración ¿Cuáles son los factores que inciden en la comisión del delito de minería ilegal previsto en el artículo 307°-A del Código Penal? El Fiscal Provincial de la FEMA expresó que: En esencia considero que el factor que incide versa, en la inoperatividad funcional de los entes fiscalizadores puesto que no están cumpliendo sus funciones a cabalidad; asimismo, el Fiscal Provincial de Cerro de Pasco aseveró que las normas administrativas no son del todo claras o explícitas; por su parte, la Fiscal Adjunta de ese distrito fiscal señaló que uno de los factores es el desempleo imperante en la sociedad y en consecuencia el aprovechamiento de empresas mineras en la compra del mineral extraído por las mineras ilegales a bajo precio; mientras que, el Juez de Investigación Preparatoria de Huánuco mencionó que es por desconocimiento de las normas ambientales, escasos recursos logísticos tanto a nivel policial y fiscal; consecuentemente, el especialista de su despacho añadió que es por la falta de oportunidades de trabajo y medio de vida ya que los habitantes de una comunidad llegan a ser explotados por los mineros, la inexistencia del Estado frente al ordenamiento territorial que añade una formalización minera, determinando si esas zonas son o no para la explotación del recurso, aunado a ello, parte del órgano estatal conformado por el RMP siendo el responsable de la persecución del delito y más aun teniendo en cuenta que el agraviado en estos delitos es el procurador del Ministerio del Ambiente, quien debería constituir en actor civil; de igual forma, los asistentes en función fiscal enfatizaron que existen casos en la FPMA –LP, que el factor más relevante es la falta de aceleración en los documentos de los concesionarios para no infringir la Ley esto representa el 66%, el resto depende de los funcionarios públicos y de la fiscalía en su mejor aplicación; sumado a ello, Los factores que inciden es la deficiente aplicación que tienen los operadores responsables en la investigación del delito toda vez que realizan una investigación preventiva, exhortando y previniendo a los responsables del delito y por su parte el ingeniero ambiental considera que los mineros que quieren ejercer la minería en la Región Huánuco se ven frustrados por la lentitud de los trámites burocráticos y ve una manera más rápida a acogerse al trámite de una minería informal y en muchos otros caos son personas que desconocen según ellos las normas y extraen los recursos sin permiso alguno solo por ser propietarios o no del suelo.

De lo que se concluye que menos de la cuarta parte de los encuestados están de acuerdo con los factores que inciden en la comisión del delito de minería ilegal previsto en el artículo 307°-A del Código Penal. En otras palabras, el procedimiento administrativo burocrático es lento no es efectivo.

Cuadro N° 06

Muestra las opiniones que expresan los expertos en materia penal respecto a la efectividad del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal, en la FPEMA-LP, 2012-2017.

A la Pregunta	Repuestas de los expertos	
N° 06 A su consideración ¿Qué medidas deben adoptar como autoridades responsables del Medio Ambiente, para reducir la incidencia de delitos de minería ilegal en LP, 2012-2017?	1. Fiscal provincial de la FEMA-Huánuco	Que se debe de dotar de equipos logísticos adecuados al sistema fiscal y policial para una activa participación en las acciones de interdicción minera, habida cuenta que la distribución del material logístico adecuado.
	2. Fiscal provincial	Educación ambiental, impartición de charlas en los centros educativos desde el primer nivel, también en las comunidades.
	3. Fiscal adjunto provincial.	Orientación a la población, registro de compra y venta de mineral en orden interno del país, identificación plena de productores.
	4. Juez del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	Focalización más adecuada que debe conllevar a trabajar en equipo todos los organismos responsables siendo la fiscalía, DREM, ALA, OEFA, siendo esta última en ente ejecutor de los delitos ambientales.
	5. Asistente en función fiscal.	Los trámites burocráticos largos ya que de los casos que se investigan son infractores que cuentan con concesión titulada pero carecen de permisos ambientales por la DREM – HCO, otros que cuentan con declaración de compromiso, son extractores ilícitos sin concesión ni documento alguno, trabajan en áreas libres o de concesión desconocida y falta de fiscalización minera con las exigencias de la ley minera y sanciones más severas.
	6. Especialista del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	Hacer un trabajo coordinado con los diversos sectores de fiscalización realizando una gestión y prevención a los conflictos que puede formarse con los mineros ilegales e informales. El Estado debe facilitar la formalización de los mineros.
	7. Especialista del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	Deben trabajar conjuntamente con las autoridades responsables para llevar a cabo la legalización de las mineras informales y concientizar a los pobladores.
	8. Asistente en función fiscal FPEMA-LP.	Una fiscalización minera más eficiente que no exija al sometimiento de un principio de oportunidad, sino que estos delitos deben ser excluidos de este principio
	9. Ingeniero Ambiental de minería-LP.	Acelerar los documentos ambientales de los mineros involucrados en tiempos rápidos y con fiscalización en mano, reestablecer la celeridad de que le minero al tener la concesión titulada es responsable del recurso por lo tanto va a velar por sí mismo que no exista extracción ilícita y por lo tanto se reduce drásticamente los extractores informales e ilegales.
	10. Asistente en función fiscal FPEMA-LP.	Una adecuada fiscalización minera cumpliendo con las normas, poniendo más sanciones a los que incurren en ello, concientizar a las comunidades de la zona.

Fuente: Ficha de entrevista Anexo 02
 Elaboración: La investigadora julio 2017

Análisis e interpretación

Alusivo a la pregunta: ¿Qué medidas deben adoptar como autoridades responsables del Medio Ambiente, para reducir la incidencia de delitos de minería ilegal en LP, 2012-2017? El Fiscal Provincial de la FEMA advierte que se debe de dotar de equipos logísticos adecuados al sistema fiscal y policial para una activa participación en las acciones de interdicción minera, habida cuenta que la distribución del material logístico es inadecuado; por su parte, el Fiscal de Cerro de Pasco añadió que debe haber Educación ambiental, impartición de charlas en los centros educativos desde el primer nivel, también en las comunidades; asimismo, la Fiscal Adjunta refiere que debe haber orientación a la población, registro de compra y venta de mineral en orden interno del país, identificación plena de productores; de igual forma, el Juez de Investigación Preparatoria menciona que habría una Fiscalización más adecuada si todos los organismos responsables siendo la fiscalía, DREM, ALA, OEFA, trabajar en equipo y coordinación siendo esta última el ente ejecutor de los delitos ambientales; asimismo los especialistas recalcaron que debe haber un trabajo coordinado con los diversos sectores de fiscalización realizando una gestión y prevención a los conflictos que puede formarse con los mineros ilegales e informales. El Estado debe facilitar la formalización de los mineros; mientras que los asistentes en función fiscal acotaron que existiría una fiscalización minera más eficiente que no exija al sometimiento de un principio de oportunidad, sino que estos delitos deben ser excluidos de este principio y por último el ingeniero subrayó que debe acelerarse los documentos ambientales de los mineros involucrados en tiempos rápidos y con fiscalización en mano, reestablecer la celeridad de que el minero al tener la concesión titulada es responsable del recurso por lo tanto va a velar por sí mismo que no exista extracción ilícita y por lo tanto se reduce drásticamente los extractores informales e ilegales.

De lo que se concluye que todos los encuestados están de acuerdo de adoptar medidas, para reducir la incidencia de delitos de minería ilegal en LP, 2012-2017. En otras palabras, el procedimiento administrativo burocrático debe ser difundido y ser ágil en su cumplimiento y modificación a la norma. Por qué no es efectivo.

Cuadro N° 07

Muestra las opiniones que expresan los expertos en materia penal respecto a la efectividad del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal, en la FPEMA-LP, 2012-2017.

A la Pregunta	Repuestas de los expertos	
N° 07 A su consideración ¿Si el Ministerio Público suspenda las actividades ilícitas de la minería ilegal, este hecho deviene de un presupuesto eximente o exculpable de la responsabilidad penal? ¿Por qué?	1. Fiscal provincial de la FEMA-Huánuco	Si el imputado suspende sus actividades ilícitas en el ámbito minero debidamente comprobados de modo indiscutible y fiscalizado por la OEFA y a su vez debidamente encausado dentro de un proceso administrativo de principio de oportunidad, con el pago íntegro de la reparación civil, el Ministerio Público no debe abstenerse de la acción pena, que implica eximir la responsabilidad del imputado.
	2. Fiscal provincial	No porque las actividades no autorizadas en los recursos naturales están consumadas, por lo que recaen en ilícito penal ambiental por lo que deben ser investigados.
	3. Fiscal adjunto provincial.	Se debe tener en cuenta la suspensión de las actividades ilícitas de los intervenidos, no generan como presupuesto eximir o exculpar de los actos delictivos ya que no es presupuesto y lo está establecido en el Código Penal Peruano art. 20°.
	4. Juez del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	No porque estos hechos no van acorde a lo establecido en el art. 20° del CP.
	5. Asistente en función fiscal.	La incorrecta aplicación de la norma, sin pruebas concretas, medibles de acuerdo a la Ley General de Minería, Decreto Supremo N° 014-92-EM, reglamentos y ley de Fiscalización y ley General del Ambiente libera al inculcado de reparar el daño real al impacto ambiental generado, pasivos ambientales mineros sin responsables y carga para el Estado para cerrar o dar otro destino a estos pasivos.
	6. Especialista del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	No, solo se suspende sus actividades ilícitas, pro esto no genera eximir de su responsabilidad porque no se encuentra contemplado en uno de los supuestos del art. 20° de nuestro ordenamiento legal.
	7. Especialista del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	No, una vez que se cumpla con el pago de la reparación civil el imputado y cese sus actividades, el OEFA debe realizar una verificación para constatar si cumple con la suspensión de las actividades, en ese sentido el RMP dispondrá su archivo.
	8. Asistente en función fiscal FPEMA-LP.	Una vez que el infractor suspenda sus actividades y comunica esto al OEFA, el Ministerio Público hace la disposición de abstención del ejercicio de la acción penal, quedando impune de su responsabilidad.
	9. Ingeniero Ambiental de minería-LP.	Sí, porque al no existir un ente regulador que penalice los hechos delictivos de contaminación minera por personas extrañas a las autorizadas por la ley esto se desborda y como consecuencia se tienen miles de pasivos ambientales en el país sin responsable alguno.
	10. Asistente en función fiscal FPEMA-LP.	Sí, porque libera de responsabilidad penal por el hecho de haber cumplido el pago de responsabilidad de resarcir el daño ambiental, sin embargo no hay responsabilidad después de originarse los daños ambientales.

Fuente: Ficha de entrevista Anexo 02
 Elaboración: La investigadora julio 2017

Análisis e interpretación

Concerniente a la pregunta: ¿Si el Ministerio Público suspenda las actividades ilícitas de la minería ilegal, este hecho deviene de un presupuesto eximente o exculpable de la responsabilidad penal? ¿Por qué? El Fiscal Provincial manifestó que, si el imputado suspende sus actividades ilícitas en el ámbito minero debidamente comprobado de modo indiscutible y fiscalizado por el OEFA y a su vez debidamente encausado dentro de un proceso administrativo de principio de oportunidad, con el pago íntegro de la reparación civil, el Ministerio Público debe abstenerse de la acción penal, que implica eximir de responsabilidad al imputado, ello en atención al principio de oportunidad, por su parte el Fiscal Provincial de Cerro de Pasco refirió que no deviene en presupuesto eximente de la responsabilidad penal porque las actividades no autorizadas en los recursos naturales están consumadas, por lo que recaen en ilícito penal ambiental por lo que deben ser investigados; en ese sentido, la Fiscal Adjunta y el Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria advierten que se debe tener en cuenta la suspensión de las actividades ilícitas de los intervenidos, no generan como presupuesto eximir o exculpar de los actos delictivos ya que no es presupuesto a lo está establecido en el Código Penal Peruano art. 20°; asimismo, el asistente en función fiscal menciona que La incorrecta aplicación de la norma, sin pruebas concretas, medibles de acuerdo a la Ley General de Minería, Decreto Supremo N° 014-92-EM, reglamentos y ley de Fiscalización y ley General del Ambiente libera al inculpado de reparar el daño real al impacto ambiental generado, pasivos ambientales mineros sin responsables y carga para el Estado para cerrar o dar otro destino a estos pasivos ambientales, por otro lado, el ingeniero ambiental con el asistente y especialistas manifiestan que si se exime de responsabilidad al imputado, porque al no existir un ente regulador que penalice los hechos delictivos de contaminación minera por personas extrañas a las autorizadas por la ley esto se desborda y como consecuencia se tienen miles de pasivos ambientales en el país sin responsable alguno y esto conlleva a liberar de responsabilidad penal, por el hecho de haber cumplido el pago por resarcir el daño ambiental, sin embargo no hay responsabilidad penal después de originarse los daños ambientales.

De lo que se concluye que no deviene en presupuesto eximente de la responsabilidad penal porque las actividades no autorizadas a los recursos naturales ya se encuentran consumadas, por lo que recaen en ilícito penal ambiental, del cual deben ser investigador y sanción con penas efectivas, de lo que se infiere que, no es efectivo.

Cuadro N° 08

Muestra las opiniones que expresan los expertos en materia penal respecto a la efectividad del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal, en la FPEMA-LP, 2012-2017.

A la Pregunta	Repuestas de los expertos	
N° 08 A su experiencia ¿Cómo autoridades del Medio Ambiente que acciones realizan una vez que se da al cierre de la actividad minera, donde trae consigo los pasivos ambientales?	1. Fiscal provincial de la FEMA-Huánuco	Que el monitoreo de los mismos le es inherente a los entes administrativos (Municipalidades/DREM) dentro del ámbito de jurisdicción.
	2. Fiscal provincial	Que estas autoridades deben hacer cumplir los programas de cierre estipulado en las sanciones correspondientes.
	3. Fiscal adjunto provincial.	Se debe entender que el derecho penal es de última ratio con la finalidad de protección de los viene jurídicos que otras ramas del derecho no puede hacer, por lo tanto, al referirse a acciones a realizar son en primer orden la efectivización de la reivindicación del pasivo ambiental conforme a lo que determine la autoridad administrativa.
	4. Juez del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	Son los entes encargados para la ejecución de los pasivos ambientales, quienes deben de realizar la efectivización de estos pasivos, el control y fiscalización de la minería ilegal.
	5. Asistente en función fiscal.	Lamentablemente la norma peruana no contempla la responsabilidad al infractor, toda vez que la concesión minera titulada no otorga un derecho real que autorice la extracción u otros de la operación minera y exime de responsabilidad sobre los recursos concedidos del subsuelo generando la informalidad e ilegalidad de los extractores que pueden ser los mismos dueños del terreno superficial, extractores externos u otras personas que no tiene vinculación con la concesión.
	6. Especialista del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	El uso racional de los recursos naturales, la utilización de los insumos siendo el mercurio el componente más importante, el reciclado, la reutilización, el tratamiento del agua, etc.
	7. Especialista del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	Las autoridades deben ser más drásticas y realizar una fiscalización constante para hacer que los responsables de estos delitos cumplan el resarcimiento de los daños.
	8. Asistente en función fiscal FPEMA-LP.	Las autoridades son las responsables de hacer cumplir las normas sin embargo por desconocimiento no hacen nada al respecto, ya que las municipalidades deben de realizar la fiscalización conjuntamente con las demás autoridades.
	9. Ingeniero Ambiental de minería-LP.	La actividad minera es puntual por lo tanto al modificar esto es extraer los recursos mineros metálicos o no metálicos están afectando el medio ambiente de su entorno lo cual es localizable, pero al no existir un control estos no tienen responsables.
	10. Asistente en función fiscal FPEMA-LP.	Lamentablemente la norma establecida en el DL 1102,1105 considera que la concesión minera tutelada no otorga derecho al que autorice la extracción u otros de la operación minera y exime al titular de la propiedad sobre los recursos naturales del subsuelo.

Fuente: Ficha de entrevista Anexo 02
Elaboración: La investigadora julio 2017

Análisis e interpretación

A la pregunta: ¿Cómo autoridades del Medio Ambiente que acciones realizan una vez que se da al cierre de la actividad minera, donde trae consigo los pasivos ambientales? Señala el Fiscal Provincial que el monitoreo de los mismos le es inherente a los entes administrativos (Municipalidades/DREM) dentro del ámbito de jurisdicción; asimismo, el Fiscal Provincial de Cerro de Pasco refiere que estas autoridades deben hacer cumplir los programas de cierre estipulado en las sanciones correspondientes, añadiendo la Fiscal Adjunta que el derecho penal es de última ratio con la finalidad de protección de los bienes jurídicos que otras ramas del derecho no puede hacer, por lo tanto, al referirse a acciones a realizar son en primer orden la efectivización de la reivindicación del pasivo ambiental conforme a lo que determine la autoridad administrativa; de igual forma, agregaron los asistentes en función fiscal que son los entes encargados para la ejecución de los pasivos ambientales, quienes deben de realizar la efectivización de estos pasivos, el control y fiscalización de la minería ilegal; en ese sentido, los especialistas reafirmaron que lamentablemente la norma peruana no contempla la responsabilidad al infractor, toda vez que la concesión minera titulada no otorga un derecho real que autorice la extracción u otros de la operación minera y exime de responsabilidad sobre los recursos concedidos del subsuelo generando la informalidad e ilegalidad de los extractores que pueden ser los mismos dueños del terreno superficial, extractores externos u otras personas que no tiene vinculación con la concesión y precisando el ingeniero ambiental que la actividad minera es puntual por lo tanto al modificar esto es extraer los recursos mineros metálicos o no metálicos están afectando el medio ambiente de su entorno lo cual es localizable, pero al no existir un control estos no tienen responsabilidad.

De lo que se concluye que las autoridades responsables del Medio Ambiente, no realizan la fiscalización, una vez que se da el cierre de las minas, toda vez que, ellos manifiestan que son las Municipalidades encargadas de aplicar el instrumento de gestión ambiental correctivo; sin embargo, desconocen de la materia al respecto, señalando que no cuentan con presupuesto; por lo que se deduce que, no es efectivo.

Cuadro N° 09

Muestra las opiniones que expresan los expertos en materia penal respecto a la efectividad del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal, en la FPMA-LP, 2012-2017.

A la Pregunta	Repuestas de los expertos	
N° 09 A su conocimiento ¿Realmente existe la minería ilegal culposa, cuáles son los presupuestos configurativos de aquello y si estos presupuestos devienen acorde con la teoría del delito?	1. Fiscal provincial de la FEMA-Huánuco	Que, si es viable sostener que se da la minería ilegal en su figura culposa, puesto que el presupuesto condicionante versa en la falta de la diligencia debida por el o por los agentes para el inicio de sus actividades mineras no hayan obtenido una autorización expresa por la autoridad competente.
	2. Fiscal provincial	No.
	3. Fiscal adjunto provincial.	La manera normativa se establece como conducta culposa un actuar de la realización de actividad minera, al respecto debemos entender que se produce la culpa a la falta al deber objetivo de cuidado, en ese contexto no puede definirse la existencia en la realidad de una actividad culposa, ya que para realizar cualquier actividad es necesario contar con autorización.
	4. Juez del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	De acuerdo a lo estipulado en la norma sí existe la minería culposa. El fundamento de los delitos culposos existe peligro de riesgo considerado como disolver la acción.
	5. Asistente en función fiscal.	Desde el punto de vista que la concesión minera no le otorga el derecho de propiedad sobre los recurso metálicos o no metálicos entonces el propietario es el Estado, el cual es el responsable, entonces al no existir responsabilidad alguna, los infractores no son sujetos de responsabilidad sobre los recursos extraídos y el Estado es ineficiente en establecer la prueba por tanto no hay delito.
	6. Especialista del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	No existe minería culposa, desde mi punto de vista ya que quien realiza esta actividad relacionada con este ilícito penal, sea bajo la forma de explotación, exploración y extracción lo hace siempre con actitud dolosa, para determinar el nivel del daño se debe partir de los organismos competente EOFA ,ALA.
	7. Especialista del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	Según la norma si se encuentra estipulado y tiene el supuesto. El disvalor de la acción incrementa el peligro o riesgo y el disvalor del resultado lo que genera la cesión al bien jurídico protegido y en los delitos ambientales es de riesgo y resultado.
	8. Asistente en función fiscal FPMA-LP.	Según nuestro ordenamiento jurídico se encuentra plasmado la minería culposa prevista en el artículo 307-A del Código Penal; sin embargo está en la responsabilidad del fiscal como órgano persecutor del delito realizar una buena fiscalización a fin de que los infractores incurran en ello, teniendo en consideración que al realizar esta conducta lo hace con pleno conocimiento y voluntad.
	9. Ingeniero Ambiental de minería-LP.	Sí se existe minería ilegal lo cual es términos normales son ladrones de minerales amparados por el Estado pero que incomodan a los mineros con título de concesión minera o mineros que quieran hacer las cosas bien por la vía formal.
	10. Asistente en función fiscal FPMA-LP.	Si vemos la realidad deberíamos decir que no existe minería culposa.

Fuente: Ficha de entrevista Anexo 02
 Elaboración: La investigadora julio 2017

Análisis e interpretación

Relacionado a la pregunta 9 A su conocimiento ¿Realmente existe la minería ilegal culposa, Relacionado a la pregunta: ¿Realmente existe la minería ilegal culposa, ¿Cuáles son los presupuestos configurativos de aquello y si estos presupuestos devienen acordes con la teoría del delito? El Fiscal Provincial indica que, si es viable sostener que se da la minería ilegal en su figura culposa, puesto que el presupuesto condicionante versa en la falta de la diligencia debida por el o por los agentes para el inicio de sus actividades mineras no hayan obtenido una autorización expresa por la autoridad competente; por su parte, la fiscal adjunta dijo que la manera normativa se establece como conducta culposa un actuar de la realización de actividad minera, al respecto debemos entender que se produce la culpa a la falta al deber objetivo de cuidado, en ese contexto no puede definirse la existencia en la realidad de una actividad culposa, ya que para realizar cualquier actividad es necesario contar con autorización; sin embargo, los asistentes en función fiscal como el ingeniero ambiental señalan que de acuerdo a lo estipulado en la norma sí existe la minería culposa. Según nuestro ordenamiento jurídico se encuentra plasmado la minería culposa prevista en el artículo 307-A del Código Penal; por lo que, está en la responsabilidad del fiscal como órgano persecutor del delito realizar una buena fiscalización a fin de que los infractores incurran en ello, teniendo en consideración que al realizar esta conducta lo hace con pleno conocimiento y voluntad; en cambio un especialista refiere que No existe minería culposa, desde mi punto de vista ya que quien realiza esta actividad relacionada con este ilícito penal, sea bajo la forma de explotación, exploración y extracción lo hace siempre con actitud dolosa, para determinar el nivel del daño se debe partir de los organismos competente OEFA, ALA.

De lo que se concluye que la cuarta parte de los encuestados están de acuerdo que existe la minería ilegal culposa.

Cuadro N° 10

Muestra las opiniones que expresan los expertos en materia penal respecto a la efectividad del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal, en la FPEMA-LP, 2012-2017.

A la Pregunta	Repuestas de los expertos	
N° 10 A su consideración ¿El Art. 307-A deviene en adecuadamente regulado en nuestro cuerpo penal con la actual tipificación? o ¿necesita de alguna modificación que lo reconduzca hacia su adecuada regulación?	1. Fiscal provincial de la FEMA-Huánuco	Que el contexto normativo del referido artículo en el extremo u otro acto similar colisiona se modo grotesco con el art III del Título preliminar del CP, que prescribe la analogía para calificar el hecho imputado como delito.
	2. Fiscal provincial	No está debidamente establecido acorde a la realidad de las actividades mineras en sus diferentes tipos. El informe eximido debe considerar la constatación de la actividad informal o ilegal no condicionando a la causa del daño por lo que realizar la actividad minera sin autorización ya contravino la norma ambiental.
	3. Fiscal adjunto provincial.	Como se ha dicho precedentemente debe existir diferencia en la sanción en cuanto a la actividad minera metálica y no metálica.
	4. Juez del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	Necesita una modificación e incluso los delitos de minería ilegal considerado de mayor trascendencia puesto que afecta a todo el ecosistema
	5. Asistente en función fiscal.	Si necesita de una modificación, toda vez que existe vacíos que requieren ser aclarados para una buena aplicación en el tipo penal.
	6. Especialista del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	Muestra una modificación ya que existe un vacío normativo para la aplicación de este delito, ya que los operadores justiciables realizan una interpretación de ella, contraviniendo la prohibición de analogía, el principio de legalidad.
	7. Especialista del juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial Huánuco.	Sí, se debe reformular porque son verbos rectores en este artículo tienen similitud y no hay una aplicación correcta para estos delitos.
	8. Asistente en función fiscal FPEMA-LP.	Si debe existir una modificación en cuanto al artículo ya que existe falencia para la aplicación de ello, asimismo se debería implantar normas que rigen a la remediación de los pasivos ambientales y excluir a los delitos de minería ilegal para la aplicación del art. 2 del CPP. siendo ello que se pongan normas más severas para los responsables.
	9. Ingeniero Ambiental de minería-LP.	Necesita precisar y ampliar el delito y su sanción con los términos drásticos, en otras palabras, modifíquese y derogar normas que no constituyen minería formal.
	10. Asistente en función fiscal FPEMA-LP.	Se necesita de una reorganización, toda vez que el art. 307-A tiene diversos vacíos, por ello se tiene que modificar.

Fuente: Ficha de entrevista Anexo 02
 Elaboración: La investigadora julio 2017

Análisis e interpretación

Y puntualizando a la pregunta: ¿El Art. 307-A deviene en adecuadamente regulado en nuestro cuerpo penal con la actual tipificación? o ¿necesita de alguna modificación que lo reconduzca hacia su adecuada regulación? El Fiscal Provincial destacó que, el contexto normativo del referido artículo en el extremo u otro acto similar colisiona de modo grotesco con el art III del Título preliminar del CP, que prescribe la analogía para calificar el hecho imputado como delito; por su parte el Fiscal Provincial de Cerro de Pasco señaló que la norma establecida en el artículo 307-A del Código Penal no está debidamente establecido acorde a la realidad de las actividades mineras en sus diferentes tipos. El informe eximido debe considerar la constatación de la actividad informal o ilegal no condicionando a la causa del daño por lo que realizar la actividad minera sin autorización ya que contraviene la norma ambiental; asimismo, como se ha dicho precedentemente debe existir diferencia en la sanción en cuanto a la actividad minera metálica y no metálica, aduce la Fiscal Adjunta; por lo que, los asistentes en función fiscal manifiestan que se necesita una modificación e incluso los delitos de minería ilegal considerado de mayor trascendencia puesto que afecta a todo el ecosistema, toda vez que el art. 307-A tiene diversos vacíos, por ello se tiene que modificar; así como también los especialistas indican que si debe existir una modificación en cuanto al artículo ya que existe falencia para la aplicación de ello, asimismo se debería implantar normas que rigen a la remediación de los pasivos ambientales y excluir a los delitos de minería ilegal para la aplicación del art. 2 del CPP. siendo ello que se pongan normas más severas para aquellos responsables que incurren en estos delitos y por último el ingeniero acota que se necesita precisar y ampliar el delito y su sanción con los términos drásticos, en otras palabras, modificar y derogar normas que no constituyen minería formal.

De lo que se concluye que todos los encuestados están de acuerdo que exista una modificación a nuestra norma legal.

4.2. Análisis y organización de datos

Población 2: 40 Objetos de Análisis. / Muestra 2: 12 Objetos de Análisis (Carpetas Fiscales).

N°	CASO NUMERO	DELITO	FECHA	CONCESIÓN - ÁREA	MÉTODO DE EXTRACCIÓN	DENUNCIADO	DENUNCIANTE	PROCESO LEGAL APLICADO	REPARACIÓN IMPUTADA(S/)			
									PENA	ESTADO	AFECTADO	ESTADO ACTUAL
1	50-2012-01	Contaminación Ambiental	13/12/2012	Concesión Minera SHENITA, Código N° 60-00037-71. Pto. Marzana S3, lote 04 y 07 del Centro Poblado de Supte - San Jorge, Distrito Rupa Rupa, Provincia Leoncio Prado; Región Huánuco.	1) Extracción de Oro a Tajo Abierto, uso y derivó de agua sin la debida autorización ubicada dentro de las zonas de Aguadulces y los Jazmines; Oficio N° 019-2012-ANA-ALA- TM (Administrador Local del Agua). 2) Escavaciones con posibilidad de derrumbes por el mal uso del agua como elemento de extracción del material metálico. Informe N° 007-2012-GR-HUANUCO/DREMH-AL/MCB (DREMH-HUANUCO). 3) Acta de Inspección Verifica uso de palas, pico, carretilla, motobomba. 4) Declaración Agravada Laurencio Jesus Rufina, manifiesta que extraxor solicitó permiso uso de terreno superficial y luego uso terreno sin permiso alguno. 5) Declaración de Titular concesión SHENITA-Karina Pinedo Rosales. 6) Declaración de inculpa de trabajar desde el año 2008 al 2012 como extraxor de oro en esa zona por desconocimiento.	Rivera Rojas, Jairzenyo Clier (42) - Agente Municipal.	1) Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Supte- San Jorge; 2) Laurencio Jesus, Rufina (Terminación Anticipada	03 años y 04 meses Pena Privativa de Libertad Provisional mente	400	300	ARCHIVADO
2	2006065200-2012-63-0	Contaminación Ambiental (Minería Ilegal)	02/10/2012	Concesión Minera: RUPA RUPA, Código N° 01010812(100 Hect.) PANTICOSA, Código N° 01025612(500 Hect.). Caserio el Arabe, Centro Poblado de Santo Domingo de Anda, Distrito José Crespo y Castillo - Aucayacu, Provincia Leoncio Prado; Región Huánuco.	1) El Área a trabajar es de 4 Hectáreas en proyecto iniciada según empresa. Extracción de Oro a Tajo Abierto. Cuentan con Acta de Reunión de fecha 21 de Julio del 2012, con autoridades del centro poblado de Santo Domingo de Anda; Oficio N° 263-2012- DGG/G/C y C (Gobernación de José Crespo y Castillo - Aucayacu - Ministerio del Interior) 2) Oposición por la posible afectación a 4500 Hectáreas de cultivos de la Asociación Agropecuaria Forestal Nuevo Paraiso, Sr. Rojas Human, Teófilo. Oficio N° 283-2012- DGG/G/C y C (Gobernación de José Crespo y Castillo - Aucayacu - Ministerio del Interior) 3) En Informe de DREMHUANUCO que la concesiones RUPA RUPA y PANTICOSA cuentan con declaraciones de Compromiso de Minería Informal e ilegal N° 57 y 67 respectivamente. Asimismo se constatación diciendo que no tienen permiso alguno por la DREMH HUANUCO para ejercer actividad alguna en minería, por otro lado la concesión RUPA-RUPA Cuentan con título de Concesión, mientras que la concesión PANTICOSA a esta a través de título de concesión, Oficio N° 882-2012-GR-HUANUCO/DREMH, Informe N° 684-2012-GR-HUANUCO/DREMH-AL/RPM. 4) Acta Fiscal de fecha 14 de febrero del 2013 constata No existe algarde de minería ilegal ni por parte de los pobladores ni de la MINERIA IBERANDINA S.A.C.	IBERANDINA DE GESTIONES S.A.C.; MINERIA IBERANDINA S.A.C.; Viespe Sanchez, Luis Alberto (Gerente de la Empresa).	1) Presidente del Centro Poblado de Santo Domingo de Anda de la Asociación Agropecuaria Forestal Nuevo Paraiso, Sr. Rojas Human, Teófilo.	Fiscalización, Acta de constatación No actividad lícita, informes DREMH Huánuco. Agotada la acción preventiva se archiva.	Ninguna	0	0	ARCHIVADO
3	2006065200-2013-21-0	Contaminación Ambiental (Delito de Minería Ilegal)	22/01/2013	Concesión Minera no Identificado. Caserio Huascar y Athuampa, Cartera al costado del río colipa (Arrieta) a 100m. Centro Poblado de Huascar y Centro Poblado de Athuampa, Distrito de Luyando Naranjillo, Provincia Leoncio Prado;	1) En visita Insitu se observo montículo de arena de 100 m2, aprox. Que según moradores es material para realizar mantenimiento de carretera. NO SE CONFIRMO EXISTENCIA DE INDICIOS DE MINERIA ILEGAL Y/O ARTESANAL.	NINGUNO	1) Alcalde de la Municipalidad Distrito de Luyando Naranjillo; Pulido Rios, Félix.	Acción Preventiva.	Ninguna	0	0	ARCHIVADO
4	2006065200-2013-29-0	Contaminación Ambiental (Delito de Minería Ilegal)	25/01/2013	Concesión Minera no Identificado. Caserio Victor Langumack, Frente al Puerto Principal de Aucayacu - Rio Huallaga, Caserio Victor Langumack, Distrito de José Crespo y Castillo, Provincia Leoncio Prado; Región Huánuco, según parte policial no se encontro persona alguna pero si carretillas, baldes de plastico y canchales gravimétricas de maderas para extraer orocualqui. 2) El Teniente Gobernador advierte a amenazas por los extractores por lo que no manifiesta nada mas sobre el caso.	1) Extracción de Oro orillas del río huallaga Frente al Puerto Principal de Aucayacu - Rio Huallaga, Caserio Victor Langumack, Distrito de José Crespo y Castillo, Provincia Leoncio Prado; Región Huánuco, según parte policial no se encontro persona alguna pero si carretillas, baldes de plastico y canchales gravimétricas de maderas para extraer orocualqui. 2) El Teniente Gobernador advierte a amenazas por los extractores por lo que no manifiesta nada mas sobre el caso.	NINGUNO	1) Teniente Gobernador del Caserio Victor Langumack, Distrito de José Crespo y Castillo, Provincia Leoncio Prado; Región Huánuco. PIMENTEL JARA, RAMON.	Acción Preventiva.	NINGUNA	0	0	ARCHIVADO
5	2006065200-2013-53-0	Contaminación Ambiental (Art.304*)	25/02/2013	Concesión Minera - LUYANDO 10, Código: 0104687111, CEMENTO MAZONICO S.A.C., Representante Legal: OSORIO RAMIREZ, VICTOR MANUEL, Caserio Ricardo Palma, Distrito de Padre Felipe Luyando - Naranjillo, Provincia Leoncio Prado; Región Huánuco. Caserio Pico azul, Caserio Pendencia, Distrito de Daniel Alomía Robles - Puma huasi.	1) Segund denuncia: La empresa CEMENTO AMAZONICO S.A.C. Cuente con Resolución Directoral N° 183-2012-GR-HUANUCO/DREMH con fecha 15/02/2012 Autorización de exploración. Se compraron 17 hectáreas de terreno superficial. 2) Presencia de ONG Ambientales de Huánuco. 3) No se realizó participación de la comunidad de aldeanías de las zonas de Influencia Tanto Directa como Indirecta. 4) Existencia de obra Calcareas para la instalación de una Planta de Cemento, Cuentan con Estudio Ambiental aprobado para Exploración, Declaración de Impacto Ambiental: DIA R.D.R. N° 005-2013-GR-HUANUCO/DREMH. 4) EN INSPECCION NO SE VERIFICO ACCION LICITA ALGUNA EN RELACION A MINERIA INFORMAL E ILEGAL- ARCHIVAMIENTO.	CEMENTO AMAZONICO S.A.C., Representante Legal: OSORIO RAMIREZ, VICTOR MANUEL, Caserio Ricardo Palma, Distrito de Padre Felipe Luyando - Naranjillo, Provincia Leoncio Prado; Región Huánuco.	1) Comisión Centro Poblado Ricardo Palma 2) Carlos Alvarez-Biologo.	Acción Preventiva, Fiscalización-Acta de Visita Insitu, Informe DREMHUANUCO, Archiviamento	Ninguna	0	0	ARCHIVADO
6	2006065200-2013-135-0	(Art.307* - A) DELITO DE MINERIA ILEGAL	22/04/2013	Concesión Minera : NO UBICADA, ZONA Puente Perez, Las Palmas, Distrito Mariano Damaso Beraun, Provincia Leoncio Prado; Región Huánuco, Aproximadamente en el km 7 de carretera	1) EN INSPECCION SE VERIFICO ACCION LICITA trabajo de acarreo de material homogén para búsqueda de material oro, manifiesta acción por desconocimiento. Amonestación de No reincidir en extraer los recursos naturales sin permisos, ARCHIVAMIENTO.	1) NENDOZA CARUZO, ERNESTO PAOLO (28) y otros: (Gallardo Urbina Carlos (15), Durand Sumaran Luis (15)).	Operativo Inopinado - ATFFS, SERNANP - FISCALA AMBIENTAL- Tingo Maria.	Acción Preventiva, Fiscalización-Acta de Visita Insitu, Amonestación, Archiviamento	Ninguna	0	0	ARCHIVADO
7	2006065200-2013-145-0	(Art.307* - A) DELITO DE MINERIA ILEGAL	21/05/2013	1) Concesión Minera: SHENITA, Código N° 60-00037-11, (1000 Hect.); Jesus Guaveira Bernal Lugar Cinco Pores - Naranjillo, Centro Poblado de Supte, Distrito Rupa Rupa-Tingo Maria, Provincia Leoncio Prado; Región Huánuco.	1) Area de extracción es de 80m x 5m de profundidad. 2) En inspección se realizó toma de muestras de agua por Area de salud de la red de salud de Leoncio Prado, Informe 020-2013-EPA-SA-2013 (09/sep/2013), 03 muestras, resumen de hierro fuera de L.M.P. (Contaminación por Fertiliz). 3) Acta Fiscal de fecha 8 de Mayo del 2013, constata Delito de Contaminación por Minería ilegal, existe trabajo de minería ilegal por los infractores con uso de 02 motores bomba para agua y otros implementos, carretillas, palas, etc.	1) Ventura Ometas, Mardoria (1) y otros.: 2) Trinidad Tolentino (Mazoni) (32); 3) Rojas Martinez, Henry; 4) Encarnación Ambrosio, Redumilio (30); 5) Inocente Ventura, Aldo.	1) Colaborador del Titular de la Concesión, 2) Operativo Fiscal, Red de salud Tingo Maria y DREMH Huánuco.	Fiscalización, Acta de constatación Actividad lícita, informes DREMH Huánuco. Agotada la acción preventiva se archiva. Terminación Anticipada Archiviamento.	3 años 4 meses.	1000	0	ARCHIVADO
8	2006065200-2013-195-0	(Art.307* - A) DELITO DE MINERIA ILEGAL	23/07/2013	1) Concesión Minera: VARIAS TODAS EXTINGUIDAS: VENEGAS SAC, Código N° 010035511 (100 Hect.); EL CONQUISTADOR, Código N° 07002330201 (16.00 Hect.); REY AUGURIOS, Código N° 010158611 (100 Hect.); CHONTA CALERA, Código N° 01053211 (200 Hect.); CHONTA YA, Código N° 010468611 (1000 Hect.); QUETZAL, Código N° 010223905 (800 Hect.); Lugar Caserio Quezada, Distrito Mariano Damason Beraun, Provincia Leoncio Prado; Región Huánuco. Zonas Intervendidas: 1) Cartera Alejandro Venegas, 2) Cartera de Augusto Tafur Cuchilla, 3) Cartera de Fidel Tafur Cuchilla, TODAS EN AREA de Amortiguamiento del	Extracción de Material No Metálico Dolomita, en las áreas de la inspección fiscal en conjunto con la DREMH Huánuco y el SERNANP Tingo Maria. Quienes verificaron el licito penal por estar extrayendo recursos sin permisos y en área de Amortiguamiento del Parque Nacional de Tingo Maria. Método explotación a tajo abierto por rajas cortos.	1) AUGURIOS TAFUR CUCHILLA (75); 2) FIDEL TAFUR CUCHILLA (81) Y EL ELMARIO VENEGAS MORALES (67)	1) Operativo Fiscal Ambiental.	Criterio de Oportunidad	Amonestación	respagos de 1500 C/U de los denunciados + S/ 4500 nuevos soles.	0	ARCHIVADO
9	2006065200-2013-211-3	(Art.307* - A) DELITO DE MINERIA ILEGAL	29/01/2014	Concesión Minera : NO UBICADA, ZONA: River del Rio Marañon, sector SUCCHA (Entre el poblado de Dupyan y el Distrito de Miraflores) Distrito Miraflores, Provincia Huamalete; Región Huánuco.	1) EN INSPECCION SE VERIFICO ACCION LICITA trabajo de acarreo de material homogén para búsqueda de material oro, manifiesta acción por desconocimiento. Amonestación de No reincidir en extraer los recursos naturales sin permisos, ARCHIVAMIENTO. 2) Método de Extracción de oro Aluvial con cascaderas, chupa derusa en la faja marginal del río marañon.	1) Ruben Basilio Garcia Vasquez (30); 2) Edumilio Fregi Velazquez Cervantes (24).	Operativo Inopinado - ATFFS, SERNANP - FISCALA AMBIENTAL- Tingo Maria.	Acción Preventiva, Fiscalización-Acta de Visita Insitu, Principio de Oportunidad- Archiviamento, Abstención de Denuncia	Amonestación	PAGO DE 500.00 NUEVOS SOLES CADA INCLUIDO + S/ 1000.00	0	ARCHIVADO
10	2006065200-2013-385-0	(Art.307* - A) DELITO DE MINERIA ILEGAL	17/11/2013	Concesión: CECILIA DE VICHAYCOCHA, Código: 010348108- Caserio San Fernando - Supte San Jorge, Distrito Rupa Rupa- Tingo Maria, Provincia Leoncio Prado; Región Huánuco.	Extracción de Oro Aluvial en Vetas de Pie de Monte a nivel Interior del subsuelo, extracción que se verifico con la escavación de 02 pozas de 8x3m por 03-3.5 metros de profundidad aprox., se encontraron motobomba, carretillas, picos, etc.	COTRINA FRETTEL ENESTO (53).	Operativo Inopinado - DREMH HUANUCO - FISCALA AMBIENTAL- Tingo Maria - PNP- Tingo Maria.	Acción Preventiva, Fiscalización-Acta de Visita Insitu, Principio de Oportunidad- Archiviamento, Abstención de Denuncia	Amonestación	S/ 1000 nuevos soles	0	ARCHIVADO
11	2006065200-2013-284-0	(Art.307* - A) DELITO DE MINERIA ILEGAL	11/12/2013	Concesión: CECILIA DE VICHAYCOCHA, Código: 010348108- Caserio San Fernando - Supte San Jorge, Distrito Rupa Rupa- Tingo Maria, Provincia Leoncio Prado; Región Huánuco.	Extracción de Oro Aluvial en Vetas de Pie de Monte a nivel Interior del subsuelo, extracción que se verifico con la escavación de 02 pozas de: 8x80m por 03-3.5 metros de profundidad aprox.; Pozas de 8x60M, y 3 a 3.5 m. de profundidad, se encontraron motobomba, carretillas, picos, etc.	TRIUNFO ATACHAGUA TEOPLO/3; TRIUNFO ARTEA, SERGIO OLIVO (38).	Operativo Inopinado - DREMH HUANUCO - FISCALA AMBIENTAL- Tingo Maria - PNP- Tingo Maria.	Acción Preventiva, Fiscalización-Acta de Visita Insitu, Principio de Oportunidad- Archiviamento, Abstención de Denuncia Penal.	2 AÑOS y 7 MESES.	S/ 2000 nuevos soles cada imputado + S/ 4000 nuevos soles y cuotas de S/ 250 hasta un monto de S/ 1200 por cada	0	ARCHIVADO
12	2006065200-2014-62-0	(Art.307* - A) DELITO DE MINERIA ILEGAL	27/05/2014	1) Concesión Minera: VARIAS TODAS EXTINGUIDAS: VENEGAS SAC, Código N° 010035511 (100 Hect.); LUGAR Caserio Quezada, Distrito Mariano Damason Beraun, Provincia Leoncio Prado; Región Huánuco. Zonas Intervendidas: 1) KM 10 CASERIO QUETZAL SRA. ZEVALLOS DE TAFUR, SALUSTIA, DENTRO DE AREA de Amortiguamiento del Parque Nacional de Tingo Maria	Extracción de Material No Metálico Dolomita, en una área de la inspección fiscal en conjunto con la DREMH Huánuco y el SERNANP Tingo Maria. Quienes verificaron el licito penal por estar extrayendo recursos sin permisos y en área de Amortiguamiento del Parque Nacional de Tingo Maria. Método explotación a tajo abierto por rajas cortos.	1) ZEVALLOS DE TAFUR, SALUSTIA (62); 2) TAFUR TRIUNFILLO, FIDEL.	1) ALEJANDRO VENEGAS MORALES (67)	Amonestación por Criterio de Oportunidad	Amonestación con recomendación de suspensión de actividad y no reincidencia	0	0	ARCHIVADO

RESUMEN DE ANALISIS DE 12 CARPETAS FISCALES – VER ANEXO.

N°	Órgano Jurisdiccional	N° de caso	A. ¿El caso cumplió con el objetivo de aplicar los instrumentos legales de terminación anticipada, criterio de oportunidad?	B. ¿En el caso se pagó un costo por contaminación?	C. ¿En el caso el afectado del terreno superficial recibió un pago por contaminación ambiental?	D. ¿En el caso el de nunciado cuenta con concesión?	E. ¿En el caso se sabe quién es el titular de la concesión?	F. ¿En el caso las empresas que se intervinieron cuentan con trámites legales, en curso o no concluidos?	G. ¿En el caso las concesiones intervenidas cuentan con documento ambiental autorizado?	H. ¿En el caso se opera con concesión con o sin permiso ambiental?	I. ¿En el caso se opera en concesión titulada siendo extractores ilícitos sin permiso alguno?	J. ¿En el caso se cuenta con declaración de compromisos de minería ilegal de la ley 2012?	K. ¿En el caso se aplicaron el Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal?	L. ¿Casos que se cumplieron con la pena en los delitos de minería ilegal?	M. ¿Ninguna aplicación de la norma de cierre de minas y pasivos ambientales en el resarcimiento físico de los delitos de minería ilegal?
1	Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Leónico Prado	50-2012-01	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0
2	Fiscalía Provincial Especial en Materia Ambiental Leónico Prado	2006065200- 2012- 63-0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0
3	Fiscalía Provincial Especial en Materia Ambiental		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Leónico Prado Fiscalía Provincial Especial en Materia	2006065200- 2013- 21-0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5	Ambiental Leónico Prado Fiscalía Provincial Especial en Materia	2006065200- 2013- 29-0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0
6	Ambiental Leónico Prado Fiscalía Provincial Especial en Materia	2006065200- 2013- 53-0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
7	Ambiental Leónico Prado Fiscalía Provincial Especial en Materia	2006065200- 2013- 135-0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
8	Ambiental Leónico Prado Fiscalía Provincial Especial en Materia	2006065200- 2013- 145-0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0
9	Ambiental Leónico Prado Fiscalía Provincial Especial en Materia	2006065200- 2013- 195-0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
10	Ambiental Leónico Prado Fiscalía Provincial Especial en Materia	2006065200- 2013- 211-3	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0
11	Especial en Materia Ambiental Leónico Prado	2006065200- 2013- 263-0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0
12	Especial en Materia Ambiental Leónico Prado	2006065200- 2013- 264-0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0
sub totales			12	6	1	6	8	2	1	2	7	1	9	9	0

Nota : ☐ sí ☐ no

1
0

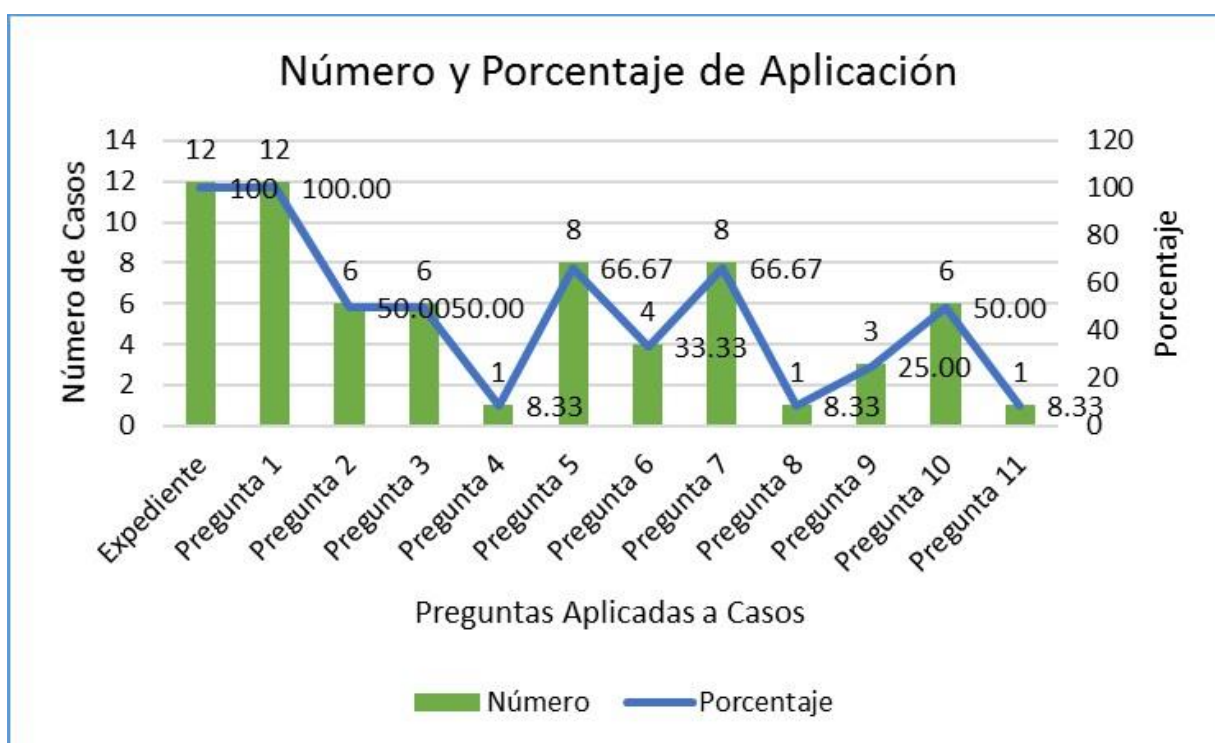
RESUMEN DE LAS 11 PREGUNTAS EFECTUADAS PARA SELECCIONAR LOS 12 CASOS DE LAS CARPETAS FISCALES Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON LOS SIGUIENTES:

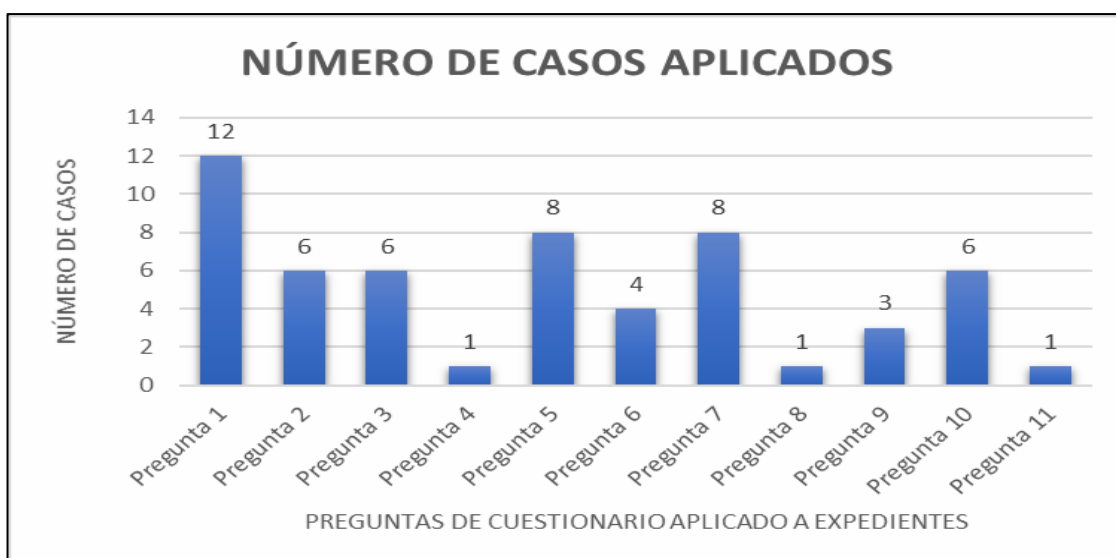
LAS 11 PREGUNTAS UTILIZADAS PARA SELECCIONAR LA INFORMACIÓN DE LAS CARPETAS FISCALES RELEVANTES DE LA MUESTRA SELECCIONADA DEL PRESENTE ESTUDIO.

NºPREGUNTA	CONTENIDO
Pregunta 1	Número de Casos que Cumplieron con el Objetivo de Aplicar los Instrumentos Legales: Terminación Anticipada, Criterio de Oportunidad.
Pregunta 2	Número de casos que Pagaron Un costo por Contaminación Ambiental.
Pregunta 3	Número de Casos que no Pagaron Nada por Contaminación Ambiental
Pregunta 4	Número de Casos donde el Afectado del Terreno Superficial recibió un Pago por Contaminación Ambiental.
Pregunta 5	Número de Casos donde el Denunciado cuenta con Concesión Minera Titulada o en Trámite.
Pregunta 6	Número de Casos donde no se sabe quién es el Titular de la Concesión Minera o no Tiene.
Pregunta 7	Número de Casos donde se Intervino a Empresas con Trámites Legales en curso o no concluidos.
Pregunta 8	Número de Concesiones Intervenidas con Documento Ambiental Autorizado.
Pregunta 9	Número de Casos que Operan con Concesión sin Permiso Ambiental Alguno
Pregunta 10	Número de Casos que Operan en Concesión Titulada siendo Extractores Ilícitos sin Permiso Alguno
Pregunta 11	Número de Casos que cuentan con Declaración de Compromisos de Minería Ilegal Informal del año 2012 Empadronados.

RESULTADOS:

	Número	Porcentaje
Expediente	12	100
Pregunta 1	12	100.00
Pregunta 2	6	50.00
Pregunta 3	6	50.00
Pregunta 4	1	8.33
Pregunta 5	8	66.67
Pregunta 6	4	33.33
Pregunta 7	8	66.67
Pregunta 8	1	8.33
Pregunta 9	3	25.00
Pregunta 10	6	50.00
Pregunta 11	1	8.33





CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS MUESTRA 2

		Número Expedientes	Porcentaje
NºPREGUNTA	CONTENIDO	12	100
Pregunta 1	Número de Casos que Cumplieron con el Objetivo de Aplicarlos Instrumentos Legales: Terminación Anticipada, Criterio de Oportunidad.	12	100.00
Pregunta 2	Número de casos que Pagaron Un costo por Contaminación Ambiental.	6	50.00
Pregunta 3	Número de Casos que no Pagaron Nada por Contaminación Ambiental	6	50.00
Pregunta 4	Número de Casos donde el Afectado del Terreno Superficial recibió un Pago por Contaminación Ambiental.	1	8.33
Pregunta 5	Número de Casos donde el Denunciado cuenta con Concesión Minera Titulada o en Trámite.	8	66.67
Pregunta 6	Número de Casos donde no se sabe quién es el Titular de la Concesión Minera o no Tiene.	4	33.33
Pregunta 7	Número de Casos donde se Intervino a Empresas con Trámites Legales en curso o no concluidos.	8	66.67
Pregunta 8	Número de Concesiones Intervenidas con Documento Ambiental Autorizado.	1	8.33
Pregunta 9	Número de Casos que Operan con Concesión sin Permiso Ambiental Alguno	3	25.00
Pregunta 10	Número de Casos que Operan en Concesión Titulada siendo Extractores Ilícitos sin Permiso Alguno	6	50.00
Pregunta 11	Número de Casos que cuentan con Declaración de Compromisos de Minería Ilegal e Informal del año 2012 Empadronados.	1	8.33

Conclusión técnica legal de la muestra 2:

- Como se ve en las estadísticas solo un solo (01) caso cumple con los nuevos requisitos de la minería informal e ilegal en el ámbito de contar con la declaración de compromiso y posiblemente faltando los demás requisitos legales para su formalización ante la ley peruana.
- Solo seis (06) casos pagaron un supuesto monto en dinero que cubriría el daño ambiental ocasionado por la extracción del recurso minero y que no se ha comprobado que este dinero haya resarcido el estado físico del daño ambiental en el lugar de los hechos y que el propio estado (OEFA), cobra por una actividad que no se ve frutos físicos en bien de la comunidad.
- Solo un (01) caso donde el afectado del terreno superficial recibió un pago monetario por el supuesto daño ambiental a su terreno el cual no se ha comprobado que se usara en resarcir físicamente el daño ambiental.
- Solo un (01) caso donde el titular intervenido cuenta con una autorización ambiental para la operación minera en curso, en la que no se le aplica pena alguna ni se comprueba daño ambiental alguno.
- Seis (06) casos de extractores ilícitos que operan en áreas de concesiones tituladas en las que ellos no tienen permiso alguno ni por el concesionario ni por el estado, mineros ilegales, libres de penas aun con las intervenciones efectuadas.
- Ocho (08) empresas que cuentan con la concesión titulada y no cuentan con los permisos ambientales concluidos para su operación minera, algunos sin pena monetaria alguna por contaminar el ambiente, ni comprobar si se resarcó el daño.

Conclusión:

Esta información nos demuestra que el estado al dar normas que no han sido estructuradas para realmente proteger el medio ambiente sino favorecer la impunidad de los extractores ilícitos, no concluir con procedimientos mineros formales en un plazo previsto por ley y con tanto trámite burocrático sin una simplificación efectiva ni un control y supervisión desde la etapa de las solicitudes de los petitorios mineros, el

estado no tiene un control de la actividad ni menos la moral para ordenar una actividad transparente, planificada en bien del poblador del entorno donde se efectúan estas actividades sin perjudicar la salud y el bienestar, por otro lado, el procedimiento de efectividad supuestamente se está aplicando correctamente ya que de los 12 casos evaluados los 12 cumplen con el objetivo señalado por la ley, pero la pregunta del millón ¿Se ha cumplido con el objetivo de remediar físicamente el daño ambiental reparando el ambiente, su entorno y el impacto posterior o solo es un cuento más del estado para simplificar la impunidad de las grandes mafias del oro y del narcotráfico disfrazado de minería ilegal, informal y pequeños mineros?

CAPITULO V

DISCUCIÓN DE RESULTADOS

5.1. Verificación o contrastación.

A. Contrastaciones con las Hipótesis

a. Con la Hipótesis General

Dada la Hipótesis General de la siguiente manera: “Es deficiente la aplicación del Principio de Oportunidad debido a una limitada fiscalización por parte de los operadores de los organismos competentes y por los escasos recursos logísticos para un mejor tratamiento en los delitos de minería ilegal, en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012 – 2016”.

Después haber analizado las respuestas de los expertos quienes refieren que no es efectivo la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal ya que contraviene a la norma, toda vez que, la aplicación de este principio sólo es para los delitos con escala relevancia social (ver la Muestra N° 01, Cuadro N° 01, fs. 65); de igual forma, consideran que el delito de minería ilegal, dado su carácter pluriofensivo, el disvalor de acción es necesariamente mayor, atentando no sólo la salud de los pobladores que viven en zonas donde se practica la minería ilegal, sino genera daños irreversibles a nuestro ecosistema, inclusive comprende la tala y deforestación de bosques, resultando perjudicial e incongruente que, los autores que incurrir en estos hechos cuenten con una salida alternativa que no es la permitida; por ende, consideramos que no debería aplicarse el principio de oportunidad a ningún caso de minería ilegal.

Asimismo, al haber realizado el análisis y organización de datos de las carpetas fiscales (muestra N° 2, fs. 85) se advierte que solo un caso (01) cumplió con los requisitos de la minería ilegal

e informal en el ámbito de contar con la declaración de compromiso; sin embargo, no cuentan con los demás requisitos para su formalización; del mismo modo, ocho (08) empresas cuentan con la concesión titulada y no cuentan con los permisos ambientales concluidos para su operación minera y no se impuso ninguna sanción, ni se comprobó el resarcimiento al daño generado y no obstante a ello, tenemos seis (06) casos de extractores ilícitos que operan en áreas de concesiones tituladas, en las que ellos no tienen permiso ni por el concesionario ni por el Estado, mineros ilegales, libres de penas aún con las intervenciones efectuadas.

Y finalmente en la exposición realizada sobre la actividad minero energético y su responsabilidad socioambiental expuesta por el Director de la Dirección Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos de Huánuco, quién refiere que el trabajo que viene realizando el Gobierno Regional, a través de la Dirección Regional, señala que existen 6000 mineros informales en las diversas provincias de la región. A la fecha existen 1148 petitorios mineros, 934 otorgados por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMET y 214 por la Dirección Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos - DREMH, de estos 518 tienen declaraciones de compromisos; quiere decir que, se encuentran en proceso de formalización; de los cuales, ninguna de estas concesiones mineras se le ha impuesto sanción administrativa y/o penal.

Por estas consideraciones expuestas debemos de aceptar la Hipótesis General como cierta y válida.

- b. Con la Sub Hipótesis A inferimos: “Es deficiente el tratamiento que se viene dando con la aplicación del Principio de Oportunidad para los delitos de minería ilegal, en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012 – 2016”.

Como refiere el Fiscal Provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Huánuco, (Cuadro N° 02, fs. 67) una vez concluido el trámite del principio de oportunidad vía abstención, la fiscalía realiza el seguimiento del cese definitivo de actividades, lo cual, es inherente a los entes administrativos, en el ámbito de su jurisdicción y a la Dirección Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos en el ámbito de la competencia; sin embargo, los entes fiscalizadoras no cuentan con presupuesto para contratar con un ingeniero o especialista evaluador y menos con instrumentos adecuados para realizar la verificación; porque, designan a los especialistas aparentemente sin valorar su calidad profesional, para evaluar el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo, ya que pueden pasar 10 meses sin emitir ningún pronunciamiento, frente a esta situación se atribuye la responsabilidad a que los especialistas están en campo o realizando otras actividades y no hay quién realice sus funciones; por otro lado, tenemos a los responsables de aplicar la sanción penal, quiénes, no está dando un tratamiento adecuado en torno a la minería ilegal, sólo se sujeta al Principio de legalidad, debiendo aquí intervenir el Estado a través de la Procuraduría Especializada en Materia Ambiental, siendo la parte agraviada, quién debería de constituirse en parte civil y de intervenir en las diligencias que se requiere su presencia; sin embargo, no concurren a la misma; a pesar que son notificados a su domicilio legal; en ese sentido, debe haber Procuradurías descentralizadas para que concurren a todas las diligencias que emanen de la disposición fiscal y a la vez reiterar a las entes administrativos de emitir su pronunciamiento en el más breve plazo, ya que el resultado de ello, es la demora de los procedimientos administrativos; por lo que, aceptamos la Hipótesis Específica A como cierta y válida.

- c. Referente a la Sub Hipótesis B que señala: “Es bajo en nivel de efectividad que se tiene con la aplicación del Principio de Oportunidad debido a que no se cumple de manera objetiva con los presupuestos establecidos para la aplicación en su otorgamiento para los delitos de minería ilegal, en Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012 – 2016

En cuanto a la solución al daño ambiental, de las doce (12) carpetas fiscales que se estudiaron se advierte que, desde el periodo 2012 hasta la actualidad; solo seis (06) casos pagaron un supuesto monto en dinero que cubriría el daño ambiental ocasionado por la extracción del recurso minero y que no se ha comprobado que este dinero haya resarcido el estado físico del daño ambiental en el lugar de los hechos y que el propio estado (OEFA), cobra por una actividad que no se ve frutos físicos en bien de la comunidad, hasta ahora hay casos que existen en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado que se encuentran en investigación preventiva, del cual no hay ninguna responsabilidad al daño generado; sólo se viene actuando de manera preventiva, exhortando y previniendo a aquellos que incurrir en estos hechos delictivos; de esta manera aceptamos la Hipótesis Específica B como cierta y válida.

- d. En cuanto a la Sub Hipótesis C expresamos que: Si se modifica el 3° párrafo del artículo 307° - A del Código Penal en cuanto al extremo de considerar como conducta dolosa, entonces se reducirá significativamente la incidencia de los delitos de minería ilegal, en Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012 – 2016.

Ahora bien, consideramos que se deben derogar las normas de interdicción minera, minería ilegal e informal, toda vez que éstas normas que se encuentran establecidas en el Decreto Legislativo N° 1101, 1102, 1105 y demás, no han sido estructuradas para

realmente proteger el medio ambiente sino favorecer la impunidad de los extractores ilícitos, no concluir con procedimientos mineros formales en un plazo previsto por ley y con tanto trámite burocrático sin una simplificación efectiva ni un control y supervisión desde la etapa de las solicitudes de los petitorios mineros, el Estado no tiene un control de la actividad ni menos la moral para ordenar una actividad transparente, planificada en bien del poblador del entorno donde se efectúan estas actividades sin perjudicar la salud y el bienestar; por otro lado, el procedimiento de efectividad supuestamente se está aplicando correctamente ya que de los 12 casos evaluados los 12 cumplen con el objetivo señalado por la ley; pero, hasta la actualidad no se ha cumplido con remediar físicamente el daño ambiental, su entorno y el impacto posterior; por lo que, podemos decir que, es un cuento más del Estado para simplificar la impunidad de las grandes mafias del oro y del narcotráfico disfrazado de minería ilegal, informal y pequeños mineros.

- e. Respecto a la Sub Hipótesis D apuntamos: Si se implementa como norma el cierre de minas y cierre de pasivos ambientales habrá responsabilidad para el resarcimiento físico en los delitos de minería ilegal en Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012 – 2016.

Modificar los procedimientos mineros acordes a la realidad nacional en bien de una minería responsable con deberes y derechos que cumplir y no que el estado tenga desinterés y se utiliza la doctrina de la permisibilidad en una actividad con daños irreversibles para el ser humano que vive en ese entorno especialmente en el tema ambiental y social.

5.2. Nuevos Planteamientos.

El principio de oportunidad aparentemente es el mejor mecanismo para no saturar las cárceles con “delitos menores” que no son relevantes para

el país y el medio ambiente, sin embargo, se llenan de millones de dólares las mafias del oro, el narcotráfico y el narcoterrorismo, con el aval del estado y la fuga de divisas por el lavado de activos y de la venta ilegal del oro peruano a través de las fronteras con otros países vecinos los cuales son beneficiados con este recurso, este hecho impacta a la economía local, regional y nacional con el hecho de no recabar el derecho de vigencia, derecho de trámite, canon minero, aporte voluntario, ley de regalías mineras, etc.

Ahora bien, mediante la promulgación del Decreto Legislativo N° 1102 se incorporó el delito de minería ilegal (Art. 307°-A) y sus agravantes. Así pues, el tipo base del delito sanciona con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con cien a seiscientos días multa, a quien realice actividad de exploración, extracción, explotación u otros actos similares, de recursos minerales, metálicos o no metálicos, sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental.

Cuando nos referimos a la comisión de otros actos similares, podrían incluirse al cateo, la prospección minera o el transporte minero; por otro lado, respecto al perjuicio, alteración o daño al ambiente o sus componentes, de qué manera el Ministerio Público o el Poder Judicial tomará certeza de que se está frente a una acción que haya podido causar perjuicio a los referidos bienes jurídicos y con ello, someterse a la aplicación del Principio de Oportunidad.

Por último y no menos importante, teniendo en cuenta el alto grado de especialización en materia de minería ilegal y delitos ambientales ¿en qué supuestos nos podríamos encontrar frente a la comisión culposa del delito de minería ilegal?

El tema de minería ilegal muchas veces sobrepasa el mero marco legal. Por ejemplo, el régimen legal minero establece medidas para dos tipos de métodos de extracción: a tajo abierto y socavones; pero la actividad minera que se realiza en la selva es de explotación aluvial de placeres. En este caso tenemos vacíos legales que necesitan implementarse para que todo este paquete de decretos legislativos sea eficiente.

Podemos decir que dicho precepto normativo no excluye a los mineros informales de la minería ilegal, tal como está redactado, podría inclusive aplicarse en casos de mineros formales, en que realicen exploraciones y demás actividades sin permiso, previo de la entidad administrativa competente.

Asimismo, el Decreto Legislativo N° 1105, hace alusión a los mineros ilegales e informales que no tiene título de concesión o no cuenten con autorización de inicio de operaciones, pero aquellos que ya han cumplido con todos los requisitos para operar, siendo estos los mineros formales quedan excluidos de la sanción penal.

Respecto a los daños ambientales se recurre a una técnica denominada “daño sumativo”, donde no se sanciona por el daño real que haga el sujeto sino por los efectos que puede generar para el ecosistema un hecho puntual, que sumado a otros podría generar una desestabilización grave.

Respecto a la actuación culposa, el legislador recurre a una cláusula de cierre para evitar que ningún comportamiento pueda ser considerado impune; es decir, donde el presunto autor alegue desconocimiento de la inexistencia de la autorización sería unas alegaciones sin éxito, puesto que, quien realice cualquier actividad relacionada con este ilícito penal, sea bajo la forma de exploración, explotación o beneficio, lo hace siempre a título doloso, por lo que, no cabe minería culposa.

Se requiere de una modificación de la norma, para que de esta manera no se sometan al Principio de Oportunidad, debiendo para ello, regularse adecuadamente el tipo penal establecido en el Art. 307-A con la actual tipificación y su posible modificación a la realidad procesal, que no sólo sancione aquellos sujetos que no cuenten con la autorización correspondiente, sino que exija además, sanciones más severas en cuanto al daño o perjuicio que lleva esta actividad, debiendo las instituciones coadyuvar con el Ministerio Público, aquí tenemos a las principales entidades a las que se recurre cuando se trate de delitos ambientales siendo el OEFA, ANA, DREMH, quiénes son las autorizadas para determinar si se ha causado o no un daño al medio ambiente, siendo estos instrumentos las pericias y demás exámenes necesarios para llegar a esa conclusión.

Restituir sistema de concesiones mineras con responsabilidad al concesionario de acciones civiles y penales bajo apercibimiento de caducidad automática, de comprobarse los hechos no acordes a la normatividad minera formal y Fiscalización efectiva con pena de cárcel efectiva para extractores ilícitos en todas las modalidades y penalidad para el dueño del terreno superficial como a las autoridades que otorguen permisos en todos los niveles de gobierno no acordes al procedimiento ordinario minero y los reglamentos de minería formal.

Modificación del Sistema, todo este paquete de normas contra la minería ilegal, básicamente nace como consecuencia de las acciones de personas naturales que vienen desarrollando sus actividades al margen de la ley, en el Perú existen más de 150 mil familias que ejercen la minería ilegal; sin embargo, no hizo nada al respecto, para restringir estas actividades ilícitas, a pesar que, el Ejecutivo dictó estas normas para combatirlas; pero, estas leyes no deben quedar en el papel, para aterrizar a la realidad, las normas deben ir acompañadas de ciertos mecanismos que incentiven a los mineros informales para salir de dicha informalidad y de la

ilegalidad, ya sea promoviendo créditos, brindándoles capacitación en diversas áreas, y/o dándoles alternativas viables de solucionar y llegar a acuerdos con los titulares de las concesiones mineras; que es donde se debería llegar finalmente.

Si realmente queremos acabar con la minería ilegal se debe llegar a quien efectivamente la ejerce y principalmente a quien la financia, pues al minero informal (aquel que ejerce la labor) no le interesa ni importa la legislación, porque, sabe que finalmente no habrá quien se le haga cumplir y mucho menos él la cumplirá, en tanto, el que provee los fondos sabe que no le alcanzaran las consecuencias legales.

Finalmente, y aunado a todo ello, el seguimiento del proceso debe estar ligado a que, el Ejecutivo tiene que complementar estas normas a través de acciones realizadas por sus organismos auxiliares: OSINERGMIN, OEFA, ALA, ANA, SERNANP, DREMH, ya que a través de ellos se puede llegar a desarticular a estas organizaciones de mineros informales. De esta manera, podremos decir, que estas normas tendrán sentido y llegarán a radicar la minería ilegal. Y como se dijo anteriormente, no es un problema que será solucionado en un par de años, tiene aún para largo mientras el Ejecutivo no realice actos concretos y no tenga el firme propósito de lograrlo.

CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

- Que, habiéndose evaluado el análisis del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal, se advierte que no es efectivo la aplicación de este Principio; porque, no cumple con los objetivos de preservar el medio ambiente y la calidad de vida de la población.
- Que, no es efectivo el tratamiento que se viene dando con la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal, puesto que, el Fiscal no está realizando una fiscalización efectiva, ya que el área física está haciendo alterada con consecuencias graves e irreversibles, debiendo modificar la norma que paralice todas estas actividades en bien del país.
- Que, es bajo el nivel de efectividad que tiene la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal; ya que, no se cumpla de manera objetiva con los presupuestos establecidos en la norma.
- Que, se debe de modificar el tercer párrafo del artículo 307°-A del Código Penal, en cuanto al extremo de considerar como conducta dolosa a aquellos que incurrir en estos delitos de minería ilegal.
- Que, se debe de implementar como norma penal el cierre de minas y cierre de pasivos ambientales para que haya responsabilidad al resarcimiento físico en los delitos de minería ilegal.

6.2. Recomendaciones

- **A los magistrados** se les recomienda que tengan más nivel de preparación sobre el derecho ambiental, siendo que los delitos ambientales son tipos penales en blanco, esto en razón de que la conducta antijurídica está sujeta al

incumplimiento de una norma administrativa, para ello, la entidad administrativa – EFA debe realizar su informe fundamentado, estableciendo el nexo causal entre los hechos materia de investigación y el ilícito ambiental, pues de no contar el fiscal ambiental con un adecuado informe fundamentado para sustentar su caso, se corre el riesgo de que el proceso penal no prospere; asimismo, se haga la revisión de las carpetas fiscales acorde a un análisis, de si estos casos continúan o si ha empeorado el área física en relación a la aplicación de la nueva metodología de formalización minera el cual se constituirá en un pasivo ambiental en el futuro cercano con un índice de irreversibilidad para el ambiente y su entorno. Además, se requiere de información a las entidades fiscalizadoras, a fin de evidenciar si los mineros informales que se encuentran en proceso de formalización vienen cumpliendo con los compromisos que asume en materia de seguridad, ambiental, social y demás.

- **A los legisladores**, quienes deben implementar normas legales acordes a la realidad, evitando la presión social al momento de dictar una norma, avocándose a aquellos proyectos que tienen mayor impacto social y mundial, promoviendo la prevención a través de una educación ciudadana; caso contrario, seremos desterrados de nuestros propios recursos naturales que tenemos en nuestra biodiversidad.
- **A los Gobiernos Regionales**, Reforzar a las regiones tanto en el ámbito económico con mucho más presupuesto como también con la capacitación de los técnicos especializados que oriente a los pequeños productores mineros y pequeños mineros artesanales al proceso de formalización y a la fiscalización a fin de evidenciar si realmente vienen cumpliendo con los compromisos que asume en materia ambiental.
- **A los pequeños productores mineros y pequeños mineros artesanales**, El titular minero debe de contar con las licencias, permisos, autorizaciones y de formar un Expediente Técnico de Plan Minado que deberá ser visado con informe favorable por el MINEM; para que, a partir de ahí, iniciar sus actividades de exploración o explotación minera.

- **A la Comunidad**, quiénes se sienten desprotegidas por parte del Estado ya que no les brinde el apoyo necesario para vivir en un ambiente adecuado; y que muchas son explotados tanto laboralmente como sexualmente y sometidos a trabajos forzosos que realizan en torno a la minería, sin recibir un sueldo justo que ostente a su familia y comunidad viviendo en condiciones infrahumanas; para ello, se recomienda que la población conozcan sus derecho siendo estos de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida y su salud.

- **A la Universidad**, con la tesis plasmada va a contribuir que profesionales del derecho se sientan motivadas de incursionar en ésta disciplina, y a la vez servirá para que los estudiantes del derecho conozcan la realidad minera en la que vivimos, para ello, se recomienda que el aprendizaje al curso de Derecho Minero sea práctico y metodológico y que exista convenios con las demás instituciones a fin de coadyuvar con la formación académica.

CAPITULO V

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. AVILA ACOSTA, Orlando. (2001; 2). Metodología de la Investigación. Lima Perú: Estudios y Ediciones R.A.
2. BACIGALUPO, E. (1987). Discriminación y prevención en Poder Judicial. Madrid: N° II.
3. BAUMANN, J. (1986). Conceptos fundamentales y principios procesales. Buenos Aires: De Palma.
4. BAUMANN, J. (1986). Conceptos fundamentales y principios procesales. Buenos Aires: De Palma.
5. BRAMONT ARIAS-TORRES, L. A. (1998). Manual de Derecho Penal- Parte Especial (4ta. Edición ed.). Lima: San Marcos.
6. CAFFERATA NORES, J. I. (2000). Cuestiones actuales sobre el proceso penal. Buenos Aires: Editores del Puerto.
7. CALDAS VERA, J. (2003). Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente En: Lecciones de Derecho Penal Parte Especial. Universidad Externado de Colombia.
8. CALDAS VERA, J. (s.f.). Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.
9. CARO CORIA, D. C. (1999). Derecho Penal del Ambiente. Delitos y técnicas de tipificación. Lima: Gráfica horizonte.
10. CREUS, C. (1987). Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Astrea.
11. GARCÍA PABLOS DE MOLINA, A. (1999). Tratado de Criminología (2° Edición ed.). Valencia: Tirant lo blanch.
12. GIMENO SENDRA, V. (1987). Los procedimientos penales simplificados. Revista de Derecho Procesal (N° 87), P. 355.
13. MELÉNDEZ ESPINOZA, E. (s.f.). “La Minería ilegal, el delito que finalmente es calificado como tal”. Obtenido de Ob. Cit.
14. MELÉNDEZ ESPINOZA, E. (s.f.). La Minería ilegal, el delito que finalmente es calificado como tal. Obtenido de <http://intranet.usat.edu.pe/usat/facultad-derecho/articulos/2366/>.

15. ORDOÑEZ MALDONADO, A. (2012). El Ministerio Público y la Minería Ilegal. artículo publicado en PNC, pág. p. 08.
16. ORE GUARDIA, A. (1999). Manual de Derecho Procesal Penal (2° Edición ed.). Lima: Alternativas.
17. PELLEGRINI GRINOVER, A. (1994). El proceso acusatorio garantista. Rio de Janeiro.
18. PEÑA CABRERA FREYRE, A. (2010). Los Delitos contra el Medio Ambiente (Primera edición ed.). Rodhas SAC.
19. PEÑA CABRERA FREYRE, A. R. (2012). Derecho Penal – Parte Especial (Vol. Tomo IV). Lima: IDEMSA.
20. PEÑA CABRERA FREYRE, A. R. (s.f.). Derecho Penal Parte Especial (Vol. Tomo IV). Lima-Perú: IDEMSA.
21. REÁTEGUI SÁBCHEZ, J. (2006). La Contaminación Ambiental como Delito (Primera Edición ed.). Lima: Jurista Editores E.I.R.L.
22. SAN MARTIN CASTRO, C. (2003). Derecho Procesal Penal (2° Ed. ed., Vol. Vol. I). Lima: Grijley.
23. SANCHEZ VELARDE, P. (1993). Estudios de derecho procesal penal. Lima: Alternativas.
24. Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N° 8957-2006-PA/TC (Constitucional 22 de Marzo de 2007).
25. SILVA SANCHEZ, J. M. (2011). LA expansión del Derecho Penal. Buenos Aires: Editorial B de F.
26. SORIANO GARCIA, j. E., & BRUFAO CURIEL, Pedro. (2010). Claves de Derecho Ambiental. Vol. I, Ps. 185.
27. TICONA PASTRANA, A. (1999). El sistema judicial penal en el Comon Law y el Principio de Oportunidad. Obtenido de <http://fondos.digitales.us.es/tesis>. .
28. TIEDEMANN, K. (s.f.). Relación entre Derecho Penal y autorización jurídico-administrativa. En: Temas de Derecho Penal Económico y Ambiental. Traducción de José Luis de la Cuesta.
29. ZAFFARONI, E. R., ALAGIA, A., & SLOKAR, A. (2005). Manual de Derecho Penal. Parte General. Buenos Aires: EDAR.

- 30.** ZEGARRA MULANOVICH, A. (2009). Descubrir al Derecho. Lima: Palestra editores.
- 31.** ZEGARRA MULANOVICH, A. (2009). Las nociones elementales del Derecho Privado y del Derecho Público explicadas en forma sistemática. Lima: Palestra Editores

ANEXOS

MATRIZ DE CONSTISTENCIA

(Anexo 01)

TITULO: “Evaluación del Principio de Oportunidad en los delitos de Minería Ilegal en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012-2016”

Tesisista: Br. Luzceila Cesia Jemina CALLATA PALOMINO

Docente Asesor:

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLE E INDICADORES	METODOLOGÍA	TECNICAS E INSTRUMENTOS
<p>Formulación general ¿Cuál es la evaluación que se da respecto a la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012-2016?</p> <p>Problemas específicos. A. ¿Cómo es el tratamiento que se viene dando con la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal, en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012-2016? B. ¿Cuál es el nivel de efectividad que tiene la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012-2016? C. ¿Cuáles son los fundamentos fácticos y normativos que se deben proponer para reducir la incidencia en los delitos de minería ilegal en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012-2016? D. ¿Qué planteamientos se deben adoptar para hacer efectivo el resarcimiento en lo delitos de minería ilegal en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012-2016?</p>	<p>Objetivo general: Evaluar la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012-2016.</p> <p>Objetivos específicos: A. Analizar el tratamiento que se viene dando con la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de Minería Ilegal en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012-2016. B. Identificar el nivel de efectividad que tiene la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012-2016. C. Proponer mecanismos fácticos y normativos que permitan reducir la incidencia en los delitos de minería ilegal en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012-2016. D. Proponer mecanismos normativos para hacer efectivo el resarcimiento en los delitos de minería ilegal en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012-2016.</p>	<p>Hipótesis General. Es deficiente la aplicación del Principio de Oportunidad debido a una limitada fiscalización por parte de los operadores de los organismos competentes y por los escasos recursos logísticos para un mejor tratamiento en los delitos de minería ilegal, en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012 – 2016.</p> <p>Hipótesis específicas. A. Es deficiente el tratamiento que se viene dando con la aplicación del Principio de Oportunidad para los delitos de minería ilegal, en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012-2016. B. Es bajo en nivel de efectividad que se tiene con la aplicación del Principio de Oportunidad debido a que no se cumple de manera objetiva con los presupuestos establecidos para la aplicación en su otorgamiento para los delitos de minería ilegal, en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012-2016. C. Si se modifica el 3° párrafo del artículo 307° - A del Código Penal en cuanto al extremo de considerar como conducta dolosa, entonces se reducirá significativamente la incidencia de los delitos de minería ilegal, en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012-2016. D. Si se implementa como norma el cierre de minas y cierre de pasivos ambientales habrá responsabilidad para el resarcimiento físicos en los delitos de minería ilegal, en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Leoncio Prado, 2012-2016.</p>	<p>Vx El principio de oportunidad. - Nivel de afectación al interés público. - La efectividad que tiene la aplicación del principio de oportunidad. - Factores que inciden en la aplicación del principio de oportunidad para estos delitos. - El tratamiento que se viene dando con la aplicación del principio de oportunidad. - El nivel de efectividad del principio de oportunidad. - El estudio de carpetas fiscales con relación a la aplicación del principio de oportunidad en los delitos de minería ilegal</p> <p>Vy La minería ilegal - Factores que inciden para la comisión del delito de minería ilegal. - Si cuenta con certificación de Inicio y Reinicio de operaciones mineras - Firma de Declaración de compromiso - Acceso a título de concesión - Contrato de cesión o contrato de operación - Acceso a área de terreno superficial - Acuerdo previo con la comunidad - Fundamentos fácticos normativos para reducir la minería ilegal. - Medidas que adoptarse para reducir la incidencia de minería ilegal. - Presupuestos que exigen la responsabilidad penal a los delitos de minería ilegal. - Acciones que se realizan sobre el cierre de minas y pasivos ambientales. - Tipificación del artículo 307°-A del C.P. que lo reconduzca hacia su adecuada regulación. - La defensa eficaz del medio ambiente. - La adecuada protección al patrimonio cultural.</p>	<p>Tipo de investigación: Básica</p> <p>Enfoque: Es cuantitativo-cualitativo,</p> <p>Nivel: Descriptivo-explicativo</p> <p>Población: Experto en materia de delitos de minería ilegal (entre magistrados, abogados y operados de la FPMA), 78. Abogados penalistas expertos en materia ambiental, 78. Carpeta fiscal en el delito de minería ilegal que obra en la FPMA de la provincia de Leoncio Prado, 40. Total: 118 unidades de estudio</p> <p>Muestra: Experto en materia de delitos de minería ilegal (entre magistrados, abogados y operados de la FPMA), 10 Carpeta fiscal en el delito de minería ilegal que obra en la FPMA de la provincia de Leoncio Prado, 12 Total: 22 unidades de estudio.</p> <p>Diseño: diseño no experimental –longitudinal simple</p>	<p>Técnica: - Fichaje de contenido. - Entrevistas.</p> <p>Instrumentos. - Fichas de resúmenes, Textuales, bibliográficas - Ficha de análisis a carpetas. - Ficha de entrevista a experto.</p>

FICHA DE ENTREVISTA A EXPERTO

(ANEXO N° 02)

“La efectividad del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal, en la FPEMA-LP, 2012-2017”

Entrevistado: _____

Entrevistadora: Br. Luzceila Cesia Jemina CALLATA PALOMINO

Lugar y fecha: _____, ____/_____/2017

Preguntas:

1. **A su experiencia ¿Cuáles es la efectividad que tiene la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal en la FPEMA-LP, 2012-2017?**
.....
2. **A su experiencia ¿Cuál es el tratamiento que se viene dando con la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal, en la FPEMA-LP, 2012-2017?**
.....
3. **A su consideración ¿Cuáles es el nivel de efectividad que tiene la aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal, en la FPEMA-LP, 2012-2017?**
.....
4. **A su opinión ¿Cuáles son los fundamentos fácticos-normativos que se deben proponer para reducir la incidencia en los delitos de minería ilegal, en la FPEMA-LP, 2012-2017?**
.....
5. **A su consideración ¿Cuáles son los factores que inciden en la comisión del delito de minería ilegal previsto en el artículo 307° - A del Código Penal?**
.....
6. **A su consideración ¿Qué medidas deben adoptar como autoridades responsables del Medio Ambiente, para reducir la incidencia de delitos de minería ilegal en Leoncio Prado, 2012-2017?**
.....
7. **A su consideración ¿Si el Ministerio Público suspenda las actividades ilícitas de la minería ilegal, este hecho deviene en presupuesto eximente o exculpante de la responsabilidad penal? ¿Por qué?**
.....
8. **A su experiencia ¿Cómo autoridades del Medio Ambiente que acciones realizan una vez que se da el cierre de la actividad minera, donde trae consigo los pasivos ambientales?**
.....
9. **A su conocimiento ¿Realmente existe la minería ilegal culposa, cuáles son los presupuestos configurativos de aquello y si estos presupuestos devienen acorde con la teoría del delito?**
.....
.....
10. **A su conocimiento ¿El Art. 307° - A deviene en adecuadamente regulado en nuestro cuerpo penal con la actual tipificación? o ¿necesita de alguna modificación que lo reconduzca hacia su adecuada regulación?**
.....

LCJCP/MD°-UDH

FICHA DE ANALISIS DE CARPETAS

(Anexo 03)

[illegible]

FOTOS DE REFERENCIA

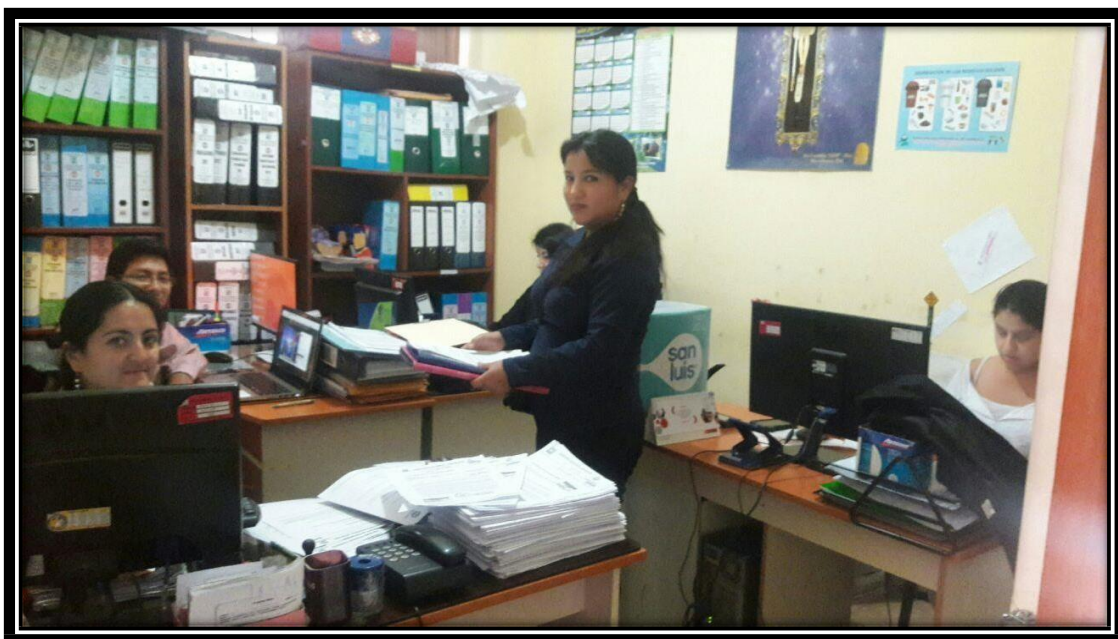
(Anexo 04)



La investigadora realizando la entrevista al Fiscal Provincial Especializado en Materia Ambiental de Huánuco.



La Investigadora realizando la entrevista al Juez de Investigación Preparatoria de Huánuco.



La investigadora realizando la entrevista a los Abogados del Ministerio de justicia de Huánuco.



La investigadora realizando la entrevista a los Ingenieros de la Dirección Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos de Huánuco.



**La investigadora participó como asistente en el
I Expo Minero Energético Ambiental organizado por la DREMH- HCO**